



Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes

Basados en el trabajo con la
comunidad y la familia, con
enfoque de género



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud



Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo

Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes

Basados en el trabajo con la comunidad y la familia,
con enfoque de género

Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes

Basados en el trabajo con
la comunidad y la familia,
con enfoque de género

José Miguel Abad G.

Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes, basados en el trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género

Pan American Health Organization (OMS)
Pan American Sanitary Bureau (OPS)
Regional Office of the World Health Organization
525 Twenty-third Street, N. W. Washington, D. C.
20037 United States of America
Teléfono: (202) 974-3000
www.paho.org

Cooperación Técnica Alemana-GTZ
Prolongación Arenales 801
Lima 18, Perú
Teléfono: (511) 422-9067
gtz-peru@pe.gtz.de

Esta publicación se realizó en el 2006 en el marco del Proyecto Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia (OPS-GTZ)

Autor
José Miguel Abad G.
Ex asesor regional de la GTZ, ensayista y consultor en políticas de juventud y temas de desarrollo social para varios países de América Latina

Equipo Técnico de GTZ
Matilde Maddaleno
Alberto Concha Eastman
Ana Isabel Moreno

Cuidado de edición: Rocío Moscoso
Diseño de carátula y diagramación: SINCO Editores

ISBN 92 7 532679 7

Hecho el depósito legal 2006-9188 en la Biblioteca Nacional del Perú

Biblioteca Sede OPS - Catalogación en la fuente

Abad G., José Miguel
Estado del arte de los programas de prevención de la violencia en jóvenes, basados en el trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género.
Washington, D. C.: OPS, © 2006

I. Título

1. VIOLENCIA-prevención y control

2. CONDUCTA DEL ADOLESCENTE

3. SALUD DEL ADOLESCENTE

4. RELACIONES FAMILIARES

5. IDENTIDAD DE GÉNERO

NLM WS 460

Índice

Presentación	9
Introducción	11
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO	15
1. Limitaciones y posibilidades del objeto de estudio	17
2. Definiciones metodológicas	19
3. Procedimientos aplicados	21
1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL	25
1.1 El enfoque de la salud pública	27
1.2 Definición de violencia	27
1.3 Tipología de la violencia	28
1.4 La distribución de la violencia	29
1.5 Violencia juvenil	31
2. SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES DE AMÉRICA LATINA	33
2.1 Violencia juvenil y derechos humanos	37
2.2 Violencia juvenil y salud pública	38
2.3 Violencia juvenil y desarrollo	44
2.4 Conclusiones	45
3. CAUSAS DE LA VIOLENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES DE AMÉRICA LATINA	47
3.1 El nivel individual	50
3.1.1 Características biológicas	50



3.1.2 Características psicosociales	51
3.2 El nivel de las relaciones	52
3.2.1 Influencia de la familia	53
3.2.2 Influencia del grupo de pares	56
3.3 El nivel de la comunidad	57
3.3.1 Influencia del vecindario	58
3.3.2 Integración y capital social	61
3.4 El nivel social	63
3.4.1 Cambios demográficos y sociales	63
3.4.2 Desigualdad de ingresos y pobreza	65
3.4.3 Desarrollo institucional y protección social	66
3.4.4 Influencias culturales	69
3.5 Conclusiones	72
4. INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES	73
4.1 Las resistencias contra la prevención	75
4.2 ¿Qué se sabe sobre la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes?	77
4.2.1 Estrategias en el nivel individual	79
4.2.2 Estrategias en el nivel de las relaciones	80
4.2.3 Estrategias en el nivel de la comunidad	83
4.2.4 Estrategias en el nivel social	88
4.3 Consideraciones finales	89
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	93
BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA	103
ANEXO	115

Presentación

Según el Informe mundial sobre la violencia y la salud preparado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) en el 2003, América Latina es la región que sufre el mayor impacto de la violencia en el mundo. La tasa promedio de homicidio de los jóvenes entre 15 y 29 años es de 101,7 por 100.000 en varones, y de 11,5 por 100.000 en mujeres. Sin embargo, el homicidio es solamente la manifestación más extrema de la violencia. Se calcula que por cada asesinato hay entre 20 y 40 víctimas, adultas y jóvenes, involucradas en actos de violencia sin consecuencias mortales, pero que requieren atención intrahospitalaria. Los adolescentes y jóvenes constituyen la población más afectada por todo tipo de violencia, incluyendo el abuso físico, sexual, verbal y emocional, así como el abandono. Las posibilidades de que los jóvenes y adolescentes tengan un desarrollo sano se ven limitadas cuando son golpeados por la violencia, sea como testigos, víctimas o agresores.

En casi todos los países de América Latina se reconoce que la violencia que afecta a los jóvenes es un problema político y de salud pública. Su prevalencia no solamente tiene repercusiones en el desarrollo juvenil, sino también mina los fundamentos democráticos de la sociedad y es responsable por costos humanos, económicos y sociales enormes en la región.

Los gobiernos dedican considerables recursos a la lucha contra la violencia juvenil; sin embargo, muchas iniciativas fracasan porque se ha invertido poco en la evaluación de impacto de los proyectos y en la participación de los jóvenes en el proceso.

El Proyecto Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia, financiado por el Gobierno alemán e implementado por la Organización Panamericana de la Salud y la Cooperación Técnica Alemana-GTZ, tiene como objetivo mejorar la participación de los jóvenes en la gestión de los programas de desarrollo juvenil y prevención de la violencia en los países seleccionados —Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú—.

En este contexto, una de las principales líneas de acción es la gerencia de conocimientos, que busca generar evidencia de experiencias y políticas exitosas en la prevención de la violencia relacionada con jóvenes en la región, desde una perspectiva de salud pública que incorpora el género, el desarrollo y la participación. Esta publicación, Estado del arte



de los programas de prevención de la violencia en jóvenes, basados en el trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género, es un componente de los esfuerzos en la gerencia de conocimientos, y esperamos que contribuya a fortalecer las capacidades de los profesionales que trabajan en esta temática en los diferentes países.

Matilde Maddaleno
Asesora regional
Unidad de Salud del Adolescente
Área de Salud Familiar y Comunitaria
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud

Alberto Concha-Eastman
Asesor regional
Unidad de Evaluación de Riesgos,
Prevención de la Violencia y Lesiones
Área Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud

Wilfried Liehr
Asesor principal
Proyecto Fomento del Desarrollo
Juvenil y Prevención de la Violencia
Cooperación Técnica Alemana-GTZ

Ana Isabel Moreno
Coordinadora regional
Proyecto Fomento del Desarrollo
Juvenil y Prevención de la Violencia
Cooperación Técnica Alemana-GTZ

Introducción

Actualmente, la violencia en adolescentes y jóvenes se ha convertido en uno de los principales problemas políticos y sociales de América Latina, cuyos costos económicos y peores efectos sociales recaen sobre la población más pobre. Las insuficiencias de la democracia generan, además, una subcultura en adolescentes y jóvenes a través de la idealización defensiva del grupo —la *barra brava*, la *mara*, la *galera*, la *banda*, la *pandilla*, la *nación*—, en la cual la violencia moviliza la única forma de acceder a un reconocimiento de aquello que les ha sido negado por una superposición de carencias desde su infancia.

Hoy por hoy, los hechos de violencia explican la mayor parte de las muertes de los jóvenes en la región, especialmente tratándose de hombres de bajos ingresos, residentes en barrios degradados social y físicamente. Al mismo tiempo, la inseguridad ciudadana —que se ha convertido en una de las mayores aprehensiones para la opinión pública latinoamericana— facilita que se estigmatice a este sector de la población. De esta manera, la violencia toma a muchos jóvenes a la vez como víctimas y como protagonistas.

Por otro lado, hay incontestables evidencias científicas sobre el carácter aprendido de la violencia. Estas evidencias explicarían que, en presencia de determinados factores situacionales o estructurales, se tome la decisión individual y colectiva —que llega a convertirse en una forma socialmente tolerada e incorporada a las pautas de relacionamiento cotidiano— de resolver los conflictos que emergen de la convivencia social recurriendo a la violencia, así como la tolerancia y el sufrimiento de sus víctimas. Sin embargo, siendo una respuesta socialmente aprendida, la violencia tiene una expresión histórica determinada, y no constituye un rasgo “connatural” del ser humano.

En esta tesis se basa la idea de que es posible prevenir la violencia: el aprendizaje de otras conductas y la eliminación o el control de determinadas condiciones o situaciones pueden mejorar la capacidad de las sociedades para resolver sus conflictos sin los costos —tangibles e intangibles— que ocasiona la violencia, incluso aquella que se ejerce legítimamente. Esto conlleva a la necesidad de conocer más y mejor sus causas, identificar los factores que la previenen o la incitan, y saber cuál es la magnitud de sus efectos. Al mismo tiempo, especialmente desde los últimos 15 años, se han implementado, con mayor o menor eficacia, distintas experiencias de prevención, todo lo que va conformando un profuso —aunque disperso— cuerpo de evidencias acerca de lo que resulta efectivo o no efectivo en la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes.

En este contexto, el Proyecto Fomento del Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia, implementado por la Organización Panamericana de la Salud y la Cooperación Técnica Alemana-GTZ en seis países de la región —Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú—, quiere aportar a racionalizar las intervenciones para mejorar su



efectividad, considerando los ingentes recursos que los gobiernos invierten en la lucha contra la violencia juvenil. Una de las estrategias del proyecto consiste en sistematizar las evidencias disponibles sobre las diferentes estrategias de intervención implementadas en la región para que sirva de insumo en el diseño de proyectos orientados a reducir la violencia juvenil, produciendo un “Documento de evidencia sobre el desarrollo juvenil y la prevención de violencia en el contexto de América Latina y el Caribe”.

Como parte de ese documento, se ha contratado la elaboración de un “Documento de evidencias sobre el estado del arte de la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, usando la estrategia de trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género”, que permita establecer cuál es el estado del arte y los avances en la investigación sobre el tema mencionado.

El documento en cuestión debe seleccionar y ordenar la información disponible en Internet, en las instituciones de educación e investigación, y en los centros de documentación y bibliotecas para, sobre esta base, redactar un informe en el que, (1) se identifiquen las intervenciones de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes que se hayan implementado con estrategias de trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género, y (2) se analicen las evidencias según su efectividad en la prevención.

La estructura del documento que se ha preparado es la siguiente: el primer capítulo es una conceptualización mínima para establecer el marco de nociones y de categorías que serán empleadas en el texto, dando énfasis al enfoque de la salud pública, partiendo del Primer Informe Mundial sobre Violencia y Salud en el Mundo de la Organización Mundial de la Salud. Además, se pasa revista a algunos datos que permitan al lector formarse una idea de la magnitud y las características de este problema de salud en el mundo, especialmente referido a la violencia juvenil.

El segundo capítulo procura describir de manera sintética la situación de los adolescentes y jóvenes en los países de la región respecto a la violencia, la que es encarada como un asunto de derechos humanos, como un problema de salud pública y, finalmente, como un obstáculo al desarrollo económico de la región.

El tercer capítulo se concentra en exponer las causas de la violencia en los adolescentes y jóvenes de América Latina. Para ello, se aprovecha el “modelo ecológico” —utilizado por la OMS— para resaltar el carácter multideterminado que tiene la violencia, las conexiones entre los distintos niveles etiológicos, así como las complejas relaciones entre factores de riesgo y de protección que generan la mayor o menor probabilidad de participación adolescente y juvenil en los actos de violencia.

El cuarto capítulo pasa revista a las intervenciones de prevención que la literatura ha estudiado, para establecer aquellas que han demostrado ser efectivas o no serlo, así como aquellas que aún requieren mayor evidencia científica. Para esto, sistematiza la información general disponible en la literatura especializada acerca de las características presentes en el diseño e implementación de las “buenas prácticas” de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes mediante estrategias con la familia y la comunidad, comparándola con intervenciones revisadas en América Latina, para analizar sus semejanzas y diferencias.

Dado el carácter multicausal de la violencia y el principio de integralidad de los enfoques de prevención que parece suscitar el mayor consenso de la comunidad científica, no nos



hemos concentrado exclusivamente en las estrategias dirigidas a la comunidad y la familia. Al final, proponemos una matriz sencilla para sintetizar el contenido del capítulo.

Por último, a partir del análisis de las intervenciones destacadas en el capítulo anterior, planteamos unas conclusiones y recomendaciones que retoman los aspectos planteados en la revisión documental, intentando relacionarlas con el objetivo del documento: cómo realizar intervenciones más efectivas en la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes.

El documento se complementa con una descripción de la metodología utilizada, partiendo de una reflexión acerca del estado de los datos y las evidencias que están disponibles para el estudio, las definiciones que delimitan el objeto de estudio, los procedimientos seguidos para la recopilación de la información, así como los criterios elaborados para analizar las prácticas de intervención seleccionadas. Al final, se anexa la sistematización de las intervenciones, con información sobre las fuentes.

Metodología del estudio

Metodología del estudio

1. Limitaciones y posibilidades del objeto de estudio

Para el presente estudio, interesa encontrar y sistematizar las evidencias de intervenciones efectivas de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes en América Latina, que se implementen con perspectiva de género, y cuyas estrategias se orienten hacia el fortalecimiento y la integración social de las familias, la conformación de comunidades protectoras y cercanas, y la generación de entornos barriales seguros y habitables.

Las evidencias, en este caso, suponen encontrar prácticas de intervención cuya validez empírica haya sido comprobada científicamente con relación a efectos de prevención en una situación controlada, quiere decir, donde se supone que las variables de tipo causal o relacional han sido objeto de algún tipo de control por el diseño experimental. En teoría, se supondría que tales intervenciones están no sólo documentadas en cuanto a sus concepciones y procedimientos, sino también evaluadas mediante modelos experimentales que permiten señalar con certeza las relaciones entre variables dependientes e independientes, y establecer sus correlaciones con los distintos componentes de la intervención.

En realidad, en la región nos encontramos con una notable ausencia de investigaciones acerca de la efectividad de las intervenciones de prevención en comparación con el relativo desarrollo que sí han tenido, en cambio, las investigaciones sobre las causas y/o los factores asociados con la violencia. Si la información acerca de los programas y proyectos en cuanto a su documentación es dispar y de calidad dudosa e irregular, cuando no prácticamente inexistente e inaccesible —a no ser por una búsqueda directa—, aun así es mayor que la existencia de evaluaciones e investigaciones que permitan ponderar adecuadamente las relaciones entre las variables dependientes e independientes, y establecer así sus correlaciones con los distintos componentes de las intervenciones.

La evidencia que nos proporcionan las experiencias identificadas en la región es abrumadoramente imperfecta y parcial. Parte de programas y proyectos que no definen con precisión y claridad sus objetivos de prevención ni establecen metas ni comparaciones que faciliten apreciar el impacto de su intervención. Por otro lado, la calificación de una práctica como “efectiva” se basa por lo general en las observaciones y percepciones de informantes calificados, profesionales que participan directamente en la intervención, grupos de destinatarios y *stakeholders*, que algunas veces incorporan algún tipo de técnicas cualitativas de investigación, pero que rara vez son aplicadas según un diseño metodológico científico ni se comparan con los resultados de instrumentos e investigaciones



más objetivas.¹ A esta situación contribuyen diversos factores cuyo análisis escapa al objeto de este informe y que serían materia de estudios en el área de la sociología de las ciencias.

Sin embargo, vamos a referirnos a aquellos que la propia búsqueda de información para elaborar el estudio hizo sobresalir.

El primero es que a nivel internacional y nacional se carece de metas concretas de prevención que faciliten un acuerdo básico en torno a los estándares de efectividad, como sucede, en cambio, con la epidemia de VIH o la disminución de la pobreza. Colabora con ello la amplia —aunque imprescindible— definición de la violencia. La múltiple gama de consecuencias y manifestaciones que abarca la violencia refleja la necesidad de incluir actos que no causan por fuerza lesiones, invalidez o muerte, pero que imponen una carga sustancial a los individuos, las familias, las comunidades y los sistemas de asistencia sanitaria, y que envuelven daños psíquicos, privaciones y múltiples deficiencias para el desarrollo de los países.

A su vez, esto se relaciona con los problemas de la recopilación de datos, que se ven afectados por las diferencias entre países de los sistemas sanitarios y judiciales —tanto en sus aspectos formales como en la capacidad técnica y el desarrollo—, que emplean distintos métodos e instrumentos —a veces no aptos para la investigación— o carecen de los recursos necesarios para adecuarse a estándares internacionales, perjudicando la disponibilidad y calidad de sus fuentes de datos y estadísticas. Otro tipo de instrumentos, más sensibles a las violencias que no detectan los sistemas sanitarios y judiciales estatales, muchas veces se ve influenciado por la forma en que se plantean las preguntas y por quién las formula, al igual que por circunstancias como el momento, el lugar y el modo en que se realiza la entrevista o se aplica el instrumento.

Todo esto dificulta vincular los datos de las distintas fuentes, ya que se trata de una problemática en la que participa una enorme variedad de organizaciones con múltiples intereses y enfoques, que actúan independientemente unas de otras, sin compartir objetivos, sistemas de monitoreo ni protocolos de identificación, haciendo difícil cualquier intento por comparar. Por otro lado, las intervenciones generalmente son complejas, si bien están basadas —algunas veces— en estrategias e intervenciones compartidas, que replican proyectos o transfieren metodologías y conceptos. La complejidad proviene de una mezcla de varios factores: hay una combinación de estrategias, distintos niveles de objetivos que se dirigen a la prevención de varios tipos de violencia, y con diferentes grupos de destinatarios y beneficiarios.

También, en relación con este factor, está la necesidad permanente de elaborar medidas pertinentes y específicas para los subgrupos de población presentes en diferentes contextos culturales. En contraste con los mecanismos biológicos por los que determinados problemas de salud pública reaccionan a drogas terapéuticas, es mucho más difícil llegar a un consenso para explicar el porqué una intervención cognitiva, comportamental o social previene mejor que otra la violencia en adolescentes y jóvenes.

¹ La Secretaría Nacional de Segurança Pública (SENASP), de Brasil, recopiló y sistematizó 168 intervenciones de prevención sobre las violencias de diversos tipos, encontrando que “Apenas metade das ações passou por algum processo de avaliação de resultados. Entre as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, tal percentual é de 42,1%, nas Polícias Civis este percentual é o maior encontrado (65,8%), nas Secretarias Estaduais de Segurança Pública o percentual de ações avaliadas foi de 50% e nas instituições da sociedade civil 58% passaram por avaliação” (SENASP 2005: 25).



Finalmente, la falta de documentación hace difícil saber cuáles son los contextos específicos en que se trabaja, así como tampoco hay buena información sobre los materiales y procedimientos que se utilizan. De igual forma, el contenido y la calidad de una sola intervención —como la capacitación a padres de familia o la implementación de actividades comunitarias— puede variar substancialmente de una organización a otra, aun cuando se haga lo mismo.

Sin embargo, considerando las dimensiones y los costos de la violencia relacionada con adolescentes y jóvenes de América Latina, el intento por sistematizar estas intervenciones, tanto las respaldadas por evaluaciones que siguen modelos experimentales como por otras más “ligeras”, o mínimamente por comparación con lo que ha sido probado que funciona a través de la investigación —más especializada y completa— producida en los países desarrollados, resulta de la mayor importancia, aunque nunca sea suficiente insistir en la necesidad de incorporar el seguimiento y la evaluación de estas prácticas de una manera más rigurosa, coherente con la gravedad del problema que se enfrenta y los ingentes recursos que se invierten en su prevención y tratamiento.

Ponderar qué es lo que realmente funcionó en una estrategia compuesta por varios tipos de intervenciones en distintos niveles, en ausencia de evaluaciones rigurosas y sin una documentación sistemática de lo realizado, y hacer recomendaciones al respecto, significa tomar decisiones basadas en informaciones harto parciales e incompletas. Quizá no sea posible proceder de otra forma más que por ensayo y error, lo que parece ser, incluso, la *mejor opción política* en condiciones de incertidumbre, pues cuando

[...] a complexidade do problema somado à ausência de conhecimentos sistematizados na área da prevenção dificulta a compreensão dos ganchos que conectam os fatores que levam os indivíduos à criminalidade e os possíveis mecanismos para atacá-los. baseadas na tentativa e erro [...] Para que as possibilidades de erro sejam reduzidas, é preciso flexibilidade das ações e dos atores para responderem às mudanças de cenário e/ou entendimento do problema. A flexibilidade, garantida por um constante processo de negociação, é necessária também para acolher os diversos atores, que possuem interpretações diferentes do problema e interesses próprios em jogo” (Lana Leite 2003: 121).

2. Definiciones metodológicas

La producción de este documento a partir de la búsqueda, revisión, clasificación e interpretación de fuentes secundarias, significa adoptar una perspectiva metodológica hermenéutica, como “elemento estructurador del proceso de construcción de estados del arte” (Hoyos 2002), cuya finalidad es dar cuenta de los desarrollos de la investigación sobre determinado tema; en este caso, qué se sabe acerca de la efectividad de las intervenciones preventivas de la violencia en adolescentes y jóvenes en la perspectiva de las estrategias de trabajo con la familia y la comunidad en América Latina.

Para la delimitación del objeto de estudio, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones, algunas implícitas en los términos de referencia y otras aclaradas por la entidad contratante a partir de las preguntas del contratado, así como aquellas que han surgido por efecto de la revisión de las fuentes documentales.

- a) El estudio se centra en las estrategias de intervención con carácter preventivo desarrolladas a través de la familia y la comunidad.
- b) Los objetivos de la prevención deben tener efectos de reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes, sea en su carácter de víctimas o de victimarios de ésta.



- c) Violencia se entiende de una manera amplia, como “una situación de interacción donde uno o varios agentes actúan de manera directa o indirecta, de forma concentrada o dispersa, causando daños a una o más personas en grados variables, sea en su integridad física, su integridad moral, sus posesiones o en sus participaciones simbólicas o culturales” (Michaud 1989). Sin embargo, se utilizará la definición de la OMS, que se expone más adelante.
- d) Siguiendo a Waiselfisz (2000), se opta por la utilización de las muertes por violencia como indicador general de la violencia en la sociedad —aun reconociendo la amplitud de sus expresiones no siempre fatales—, por ser la muerte no sólo la violencia llevada a sus extremas consecuencias —que revela la intensidad de los diversos tipos de violencia— sino también por la falta de otras alternativas de medición más confiables.
- e) De igual manera, no se va a considerar en profundidad la inclusión y el análisis de los factores de riesgo y de protección individuales asociados a la violencia, aun reconociendo su importancia en los actuales paradigmas de prevención y tratamiento. Tal decisión no sólo se justifica por el enfoque mismo del estudio conforme se explicita en los términos de referencia, sino por la consideración de que la violencia es un fenómeno social que, lejos de reflejar decisiones individuales aisladas, refleja la interacción de un conjunto de determinantes originados en e influidos por la convivencia entre grupos heterogéneos que se distinguen entre sí por su diferencial de acceso a los recursos de la sociedad y las estructuras sociales de dominación que preservan esa desigualdad.²
- f) Acerca de la delimitación de los sujetos del estudio, adolescentes y jóvenes serán identificados según las definiciones de la OPS-OMS, que distinguen a los dos grupos por sus diferencias fisiológicas, psicológicas y sociológicas. Así, para la OPS-OMS la adolescencia es más un proceso esencialmente biológico, en el que se produce un desarrollo cognitivo y estructurante de la personalidad, que tiene lugar entre los 10 y los 19 años, mientras que el concepto de juventud indicaría el proceso de preparación de los individuos para asumir roles y tareas de adulto en la sociedad, tanto en el plano social como en el profesional, y abarcaría a los sujetos entre 15 y 24 años.
- g) La compilación de las fuentes documentales sobre intervenciones se limita a las experiencias e investigaciones más relevantes desarrolladas en América Latina durante los últimos 10 años, así como a las compilaciones de los resultados sobre investigaciones y estudios acerca de las causas y la prevención de la violencia, especialmente en las obras de Sherman et al. (1997), Cornell (1999), Thornton et al., (2000), McAlister (2000) y Mihalic et al. (2001), además del *Informe mundial sobre salud y violencia* de la OMS.
- h) Se opta preferentemente por las estrategias de prevención localizadas en ámbitos urbanos, donde se concentra la gran mayoría de las investigaciones e intervenciones

² Contra la metodología del estado del arte como procedimiento interpretativo que garantiza la “fidelidad” a la verdad de cada texto (Hoyos 2002: 66) en la tradición de la hermenéutica bíblica, la perspectiva adoptada en este estudio está en la línea postestructuralista, que renuncia a encontrar un sentido “original” en los textos. En tal sentido, el análisis de las fuentes recopiladas es, eminentemente, un ejercicio crítico y deconstructivo, en el que la producción de la verdad resulta de “la reducción represiva de la diversidad infinita de las intuiciones particulares a formas de identidad” (Payne 2002: 380). En esta línea, el investigador opta por el materialismo histórico como significativo productor de sentido, en tanto concepción del mundo como continuo físico-biológico, bio-psico-social y sociocultural, en que la particularidad de la especie humana y sus manifestaciones fenoménicas devienen de su capacidad para organizar y producir socialmente los medios que necesita para reproducir su vida, lo que revela relaciones de poder y dominación con las que directamente se relaciona la violencia.



que se han documentado, así como los mayores índices de violencia en adolescentes y jóvenes.

3. Procedimientos aplicados

Considerando lo anteriormente expuesto, la lectura y síntesis mediante fichas bibliográficas permitió elaborar una primera estructura para el texto, la que fue sometida a la revisión del equipo regional del proyecto Fomento de Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia (OPS-GTZ), contratante del estudio. Aunque dicha estructura sobredimensionaba las necesidades de información y ha sido sustancialmente recortada, su realización facilitó cumplir una extensa revisión bibliográfica, de todas maneras útil para abordar un problema de esta complejidad.

Metodológicamente, se realizaron las siguientes actividades:

- Lectura y análisis de los términos de referencia del estudio, así como aclaración y delimitación de sus exigencias y condiciones con la entidad contratante.
- Lectura y análisis de otros documentos de evidencias elaborados por la OPS remitidos como modelos de trabajo por la GTZ-OPS.
- Construcción de las primeras categorías conceptuales para ser revisadas y/o elaboradas a partir de los documentos remitidos por la GTZ-OPS y los términos de referencia.
- Elaboración y remisión de una encuesta para sondear prácticas preventivas tanto en el ámbito público como privado, así como para tomar contacto con las instituciones especializadas en adolescencia y juventud a nivel de los distintos gobiernos nacionales en América Latina.³
- Entrevista con investigadores del Núcleo de Estudos da Violência de la Universidad de São Paulo (NEV-USP) y de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Campinas, en Brasil, y con investigadores de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes, en Colombia, para ampliar y enriquecer las categorías conceptuales desde las cuales construir las distintas aproximaciones interpretativas sobre la violencia.
- Identificación, selección y fichaje de los sitios web de universidades y centros de investigación especializados para el estudio de la violencia en América Latina, así como de materiales disponibles en organismos de cooperación multilateral.
- Diseño y aplicación de un esquema de lectura para la búsqueda y selección de la información, así como elaboración de una estructura de clasificación, según grupos temáticos:
 - Situación de adolescentes y jóvenes en América Latina.
 - Enfoques analíticos de los estudios sobre violencia.

³ Se solicitó información vía correo electrónico a casi 200 instituciones y/o informantes calificados: de ellos, 9 eran las oficinas coordinadoras de la OPS y GTZ en los países del proyecto y 24 entidades especializadas en juventud en el nivel nacional. Además, se aplicaron 95 encuestas dirigidas a organismos públicos y privados con intervenciones en prevención de la violencia. Esta estrategia no tuvo resultado, pues menos del 10% de las instituciones enviaron información, y de éstas, sólo unas cuantas contenían información que podía ser aprovechada.



- Poder y violencia.
- Seguridad, violencia y pobreza en América Latina.
- Violencia y delincuencia en adolescentes y jóvenes.
- Prácticas de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes.
- Construcción de un archivo de prensa sobre noticias relacionadas con los temas violencia-prevención-adolescentes y jóvenes en América Latina a través de servicios de información por Internet.
- Búsqueda y lectura en bibliotecas y centros de documentación de la Universidad Estadual de Campinas, la Universidad de São Paulo, el Núcleo de Estudos da Violência (NEV-USP), la Universidad Nacional de Bogotá y la Universidad de Los Andes, así como en Internet.
- Elaboración de fichas analíticas de la literatura revisada, conforme los grupos temáticos organizados, con la siguiente información:
 - Datos de identificación.
 - Problema planteado y tesis central; tesis secundarias.
 - Referentes teóricos.
 - Conclusiones.
- Lectura de los informes disponibles producidos por los países de la región en respuesta al *Cuestionario de las Naciones Unidas sobre violencia contra niños y adolescentes*.
- Construcción de una matriz de clasificación y análisis para las evidencias de efectividad encontradas en las intervenciones analizadas, identificación de criterios de evaluación y producción de preguntas-guía para su análisis.

Un aspecto relevante para el estudio era encontrar evidencias de efectividad en prácticas de prevención implementadas en la región según los términos de referencia, es decir, intervenciones que han utilizado las estrategias de trabajo con la comunidad y la familia, con enfoque de género, que (a) tengan evidencia en la literatura de ser efectivas y eficaces para prevenir la violencia en adolescentes y jóvenes; (b) hayan demostrado su éxito hasta el momento, pero necesiten más investigación para demostrar su efectividad en prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes; (c) no hayan demostrado ser efectivas en la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes.

Precisamente por las deficiencias derivadas tanto de la calidad de la información disponible como de la complejidad de las intervenciones, se trata de seleccionar aquella que, considerando el carácter incompleto e insuficiente de los datos a los que se tiene acceso, sea suficientemente determinante para orientar decisiones racionales, al tiempo de ofrecer la información de la manera más sencilla y práctica posible. En consecuencia, se elaboraron unos criterios para evaluar la evidencia proporcionada por el grupo de prácticas identificadas.

Obviamente, no es un catálogo de todas las intervenciones, y lo que se procuró fue relevar algunas que fueran ejemplares —en el sentido de ilustrar formas de intervención con las estrategias de familia y comunidad—, suficientemente diferentes entre sí, y que se implementaran con elementos innovadores o llamativos. Según estas premisas, los criterios que se proponen son los siguientes:



- Resultados de las intervenciones identificadas, demostrados mediante evaluaciones con *diseños experimentales o cuasi experimentales, de tipo longitudinal o transversal, y control aleatorio*, o bien triangulaciones de mediciones con datos recolectados para los indicadores de impacto de la intervención, admitiéndose diversos niveles de sofisticación según los recursos y ámbitos de la intervención analizada.⁴
- El segundo criterio es que la intervención se adecue a los relativos consensos en la comunidad científica acerca de la efectividad de las prácticas, a partir de las evaluaciones y estudios realizados.⁵
- El tercer criterio es que la intervención demuestre suficiencia y plausibilidad en la reducción de la violencia⁶ o en factores precursores, es decir, que se haya realizado completamente una intervención (*suficiencia*) que haya generado cambios, y que estos cambios puedan atribuirse en mayor medida a esa intervención, y no a otras causas independientes (*plausibilidad*).
- El cuarto criterio es la *calidad y pertinencia de la intervención*. Algunos elementos para decidir sobre la evidencia acerca de la probable efectividad de la intervención, serían:
 - *La relevancia de la intervención*: ¿los contenidos y materiales de la intervención, así como los objetivos definidos, son importantes y están justificados de acuerdo con las características culturales y sociales del contexto en que ésta se realiza?
 - ¿Existe una *base teórica consistente* —formulada de manera explícita, plausible y comprobada en otros contextos—, sostenida en evidencias científicas que justifican la elección de determinadas intervenciones y procedimientos en el marco de una clara hipótesis de prevención?

La sustentabilidad técnica, política y financiera de la intervención: calidad de la ejecución, existencia de sistemas de monitoreo, relación costo-beneficio, viabilidad financiera según costos actuales y proyectados, aceptabilidad por parte de los *stakeholders* relevantes, posibilidad de ser replicada en otros contextos y posibilidad de ser transferida a escalas mayores o a programas y políticas más amplias.

En los anexos del documento se encontrarán las informaciones pertinentes sobre las experiencias sistematizadas, así como datos de contacto, cuando sea posible.

4 En este principio hay que estimar la calidad de la evaluación y la pertinencia de su diseño. Cuanto más ambiciosa sea la intervención en su complejidad operativa y metas, más evidencia deberá exigirse y, por lo tanto, una evaluación de mejor calidad. En este orden de ideas, evaluar adecuadamente una intervención y obtener resultados modestos es mucho más útil que obtener resultados más positivos por medio de una evaluación inadecuada y superficial.

5 Obviamente, la comunidad científica no es ajena a fuerzas políticas y financieras que inciden en la preferencia por uno u otro tipo de intervención. Justamente por eso, es necesario contar con más y mejores evidencias sobre la prevención de la violencia en la sociedad, capaces de contrarrestar las presiones meramente ideológicas, argumentadas en forma insuficiente desde el punto de vista científico.

6 Siguiendo a Cornell, considerando los costos —tangibles e intangibles— de la violencia en adolescentes y jóvenes, tanto para las víctimas como para la comunidad y el sistema de protección social, una intervención puede considerarse efectiva si consigue reducciones de las tasas de homicidio y de lesiones fatales entre 10% y 20% (Cornell 1999).



1. Conceptualización de la violencia juvenil



1 Conceptualización de la violencia juvenil

1.1 El enfoque de la salud pública

Podría afirmarse que la violencia siempre ha estado presente en la historia humana, y más allá de los diversos conceptos y sistemas religiosos, filosóficos, jurídicos y comunales que han intentado dar cuenta del fenómeno y actuar a favor de su reducción y control, sus efectos y manifestaciones continúan siendo evidentes en todo el planeta, afectando prácticamente al conjunto de la población mundial.

Uno de los enfoques más recientes —marcadamente a partir de los años 1980— y que usufructúa una considerable legitimidad política y científica a nivel mundial es considerar la violencia como un problema de *salud pública*. En estos términos fue reconocida por la Asamblea Mundial de la Salud en 1996, que además resaltó sus graves consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, para individuos, familias, comunidades y países, e instó a los Estados miembros y a la Dirección de la OMS a que implementaran acciones para su prevención y tratamiento.

Las consecuencias de considerar la violencia como un problema de salud pública implican, a grandes rasgos, una serie de asertos que constituyen tanto la base de su justificación como el corolario de su adopción: “[...] disponemos de algunos de los instrumentos y de los conocimientos necesarios para cambiar la situación, los mismos instrumentos que se han utilizado con éxito para abordar otros problemas de salud”, señala Gro Harlem Brundtland, directora general de la OMS, en el prefacio del primer *Informe mundial sobre la violencia y la salud*, por lo que

Es posible prevenir la violencia y disminuir sus efectos (...) [modificando] los factores que contribuyen a producir respuestas violentas, ya sea los dependientes de la actitud y el comportamiento o los relacionados con situaciones sociales, económicas, políticas y culturales más amplias (Krug et al. 2003: 3, corchetes del autor).

El abordaje de salud pública requiere el empleo de métodos científicos y perspectivas transdisciplinarias para la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre la violencia, el análisis de sus causas y correlaciones con factores individuales y/o colectivos, el diseño de intervenciones eficaces y eficientes capaces de actuar sobre estos factores, y el seguimiento a la ejecución de las acciones —que prioritariamente se dirigen hacia la prevención— para evaluarlas y difundirlas.

1.2 Definición de violencia

Antes de entrar en materia, resulta conveniente precisar el concepto de violencia, ya que a partir de estas definiciones se comprenden las categorías causales y las estrategias de prevención. En el informe usaremos preferentemente las definiciones, categorías conceptuales y clasificaciones utilizadas por la OMS, conforme están expuestas en el



primer capítulo del *Informe mundial sobre la violencia y la salud* ya citado, del que haremos un breve resumen, pues proporciona

[...] un marco útil para comprender los tipos complejos de violencia que acontecen en todo el mundo, así como la violencia en la vida diaria de las personas, las familias y las comunidades [captando] la naturaleza de los actos de violencia, la importancia del entorno, la relación entre el agresor y la víctima, y, en el caso de la violencia colectiva, los posibles motivos de la violencia (Krug et al. 2003: 8, corchetes del autor).¹

La OMS define el acto violento como “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Krug et al. 2003: 5), independientemente de si sus consecuencias se realizan efectivamente, excluyendo los incidentes que no tienen una intención violenta, como los accidentes de tránsito.

La inclusión del concepto “poder” en la definición “amplía la naturaleza de un acto de violencia así como la comprensión convencional de la violencia para dar cabida a los actos que son el resultado de una relación de poder, incluidas las amenazas y la intimidación” (Krug et al. 2003: 5), para contener también aquellos actos por omisión o descuido, los maltratos físico, sexual y psicológico, así como el suicidio y otras formas de autoagresión, reflejando “el reconocimiento cada vez mayor, por parte de los investigadores y los profesionales, de la necesidad de incluir los actos de violencia que no causan por fuerza lesiones o la muerte, pero que a pesar de todo imponen una carga sustancial a los individuos, las familias, las comunidades y los sistemas de asistencia sanitaria en todo el mundo” (Krug et al. 2003: 5), como distintas formas de violencia que no confluyen necesariamente en lesiones, invalidez o muerte, pero que originan trastornos físicos, psíquicos y sociales, sea como consecuencia inmediata o sea que se presenten años después de haberse producido el maltrato. Además, la definición de la OMS conlleva implícitos otros aspectos de la violencia que no son enunciados manifiestamente en la definición, que incorpora —en forma tácita— todos los actos de violencia, sean públicos o privados, reactivos o activos, delictivos o no, con consecuencias de distinta naturaleza (física, psicológica, sexual y de privación o descuido).²

1.3 Tipología de la violencia

A partir de las precisiones anteriores, la OMS ha elaborado una tipología que caracteriza y relaciona las posibles manifestaciones de la violencia. La clasificación propuesta por la OMS toma en cuenta las características de quienes cometen el acto de violencia, que puede ser:

Violencia autoinfligida: cometida por uno mismo contra sí mismo, como el suicidio —incluyendo pensamientos suicidas e intentos— y las autolesiones y automutilaciones.

Violencia interpersonal: cometida por otro individuo o un grupo pequeño contra alguien.

1 Igualmente, hacemos eco de las aclaraciones de la OMS respecto a las limitaciones de estas definiciones y clasificaciones para separar y distinguir claramente los tipos, las motivaciones y la naturaleza de los actos violentos, tanto en la teoría como en la práctica, sin que esto invalide su utilidad descriptiva.

2 Como en cualquier definición, es necesario adecuar e interpretar correctamente los casos en los que se aplica y sus limitaciones. El Informe menciona, con ejemplos, la diferencia entre la intencionalidad de causar daño y el uso de la fuerza, que puede ocasionar daños aunque esa no fuera la intención, y la necesidad de distinguir entre la intención de lesionar y la intención de usar la violencia, que está determinada por el contexto cultural. Sin embargo, la OMS estima que un acto es violento si afecta la salud o el bienestar de las personas (Krug et al. 2003: 5-6).



A su vez, ésta puede ser *violencia familiar* o *de pareja*, producida generalmente en el hogar entre los miembros de la familia o de la pareja, y *violencia comunitaria*, entre individuos que no son parientes y que pueden o no conocerse. En este tipo se incluye explícitamente la violencia juvenil (Krug et al. 2003: 7).

Violencia colectiva: es la cometida por grupos más grandes de individuos, como por ejemplo organismos de seguridad, organizaciones terroristas o masas, organizadas o no. Este tipo de violencia es subdividida en *violencia social* —para promover intereses de determinados grupos sociales—, *violencia política* —que incluye la guerra y la represión de los aparatos estatales o paraestatales— y *violencia económica* —motivada por el afán de lucro económico—. Es frecuente que los actos cometidos por grupos más grandes tengan motivos múltiples.

1.4 La distribución de la violencia

En esta perspectiva, la violencia, como otros problemas de salud pública, no se distribuye territorialmente de manera uniforme ni afecta por igual a toda la población, y si bien muchos de los factores que elevan el riesgo de violencia son comunes y su intervención puede incidir positivamente sobre varios grupos en distintos ámbitos, es también necesaria la implementación de acciones más específicas que tomen en cuenta las condiciones y situaciones particulares según diferentes grupos de edad y determinados contextos sociales.

Según el primer *Informe mundial sobre la violencia y la salud*, la violencia constituye una de las primeras causas de mortalidad para la población de entre 15 y 44 años de edad, pues llega a sumar 1,6 millones de muertes cada año. Sin embargo, éstas constituyen, con toda probabilidad, apenas una aproximación a la verdadera dimensión que alcanza la violencia en el mundo. De hecho, no se disponen de estimaciones precisas para medir aquellas agresiones que no ocasionan lesiones suficientemente graves desde el punto de vista de la atención médica o no están contempladas como delitos por el sistema judicial. También muchas de éstas ocurren en países cuyos sistemas de vigilancia son deficientes o se cometen contra grupos cuyas condiciones de género, generación o etnia les imponen una fuerte presión cultural, que dificulta reportar los actos violentos que los victimizan.

Por todo esto, los investigadores recurren a encuestas y estudios especiales para visibilizar y evaluar estas formas de violencia, habitualmente subregistradas o invisibles. Sin embargo, al ser informaciones que se comunican espontáneamente, existe un riesgo de sesgo por subestimación o sobreestimación: “Las víctimas de la violencia quizá sean renuentes a hablar de sus experiencias, no solamente por vergüenza y a causa de los tabúes, sino también por temor” (Krug et al. 2003: 12);³ de ahí que se utilicen de preferencia los datos de mortalidad, que por lo general se recolectan universalmente y están más disponibles.⁴

Así, según datos de la OMS, la violencia —autoinfligida, interpersonal o colectiva— causó en el año 2000 cerca de 1,6 millones de muertes en todo el mundo, lo que representa una

3 “La violencia familiar —y en particular la violencia contra la mujer— se denuncia poco, y las razones son lógicas. ‘Si hablamos [con el teniente gobernador] es peor, más nos pegan’ (sierra piurana). ‘Nos pegan a veces bien fuerte; pero no nos quejamos a nadie, ni decimos nada porque tenemos miedo que nuestros esposos luego nos peguen más duro’ (Juliaca). ‘No voy a denunciar porque, capaz, me deja sola. A veces siento que me quiero morir, pero mis hijos me dan valor’ (Laderas del Chillón, Lima). ‘Cuando me golpea, yo lloro sin que mis hijos se den cuenta y al día siguiente es como si no hubiera pasado nada’ (Carabayllo, Lima). ‘Existe dónde quejarnos, Comisaría de Mujeres; por vergüenza no nos quejamos y arreglamos el problema en casa’ (ceja de selva ayacuchana)” (Blackburn 1999: 22).

4 Sobre los actos violentos con consecuencias no mortales, la OMS afirma que la mayoría de los países no cuenta con datos sistemáticamente levantados, aunque se está trabajando en el diseño de instrumentos que permitan recolectar esta información de manera confiable (Krug et al. 2003: 9).

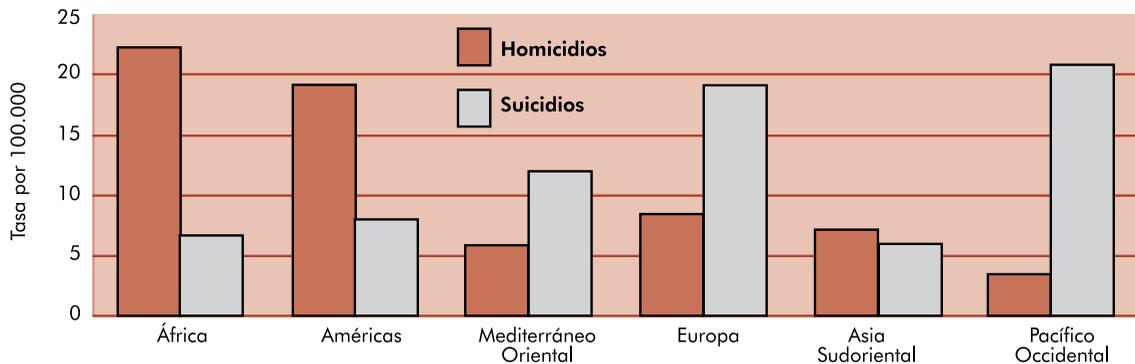


tasa de 28,8 por 100.000 habitantes, distribuidas la mitad en suicidios, una tercera parte en homicidios y una quinta parte en conflictos armados. Del total de estas defunciones, “Menos de 10% [...] registraron en los países de ingreso alto”; la tasa por muertes violentas en los países de ingresos bajos y medios es de 32,1 por 100.000 habitantes, contra una tasa del 14,4 en los países desarrollados (32,1 contra 14,4) (Krug et al. 2003: 11).

En cuanto al sexo, en el 2000 hubo casi 520.000 homicidios en el mundo, equivalente a una tasa de 8,8 por 100.000 habitantes. Los hombres representaron 77% de los homicidios, con tasas tres veces superiores a las de las mujeres, 13,6 por 4,0 cada 100.000. Las tasas más altas de homicidios correspondieron a los hombres jóvenes, con edades entre 15 y 29 años, con una tasa de 19,4 por 100.000. En todo el mundo, unas 815.000 personas se suicidaron en el año 2000, lo que representa una tasa de 14,5 por 100.000. Más de 60% correspondieron a hombres, siendo las tasas de 18,9 por 100.000 frente a 10,6 de las mujeres. Más de la mitad de los suicidas eran personas con edades entre 15 y 44 años de edad, aunque la tasa se incrementa con la edad.

También hay diferencias importantes según las regiones. Así, se puede observar una relación casi inversamente proporcional en las tasas de homicidios y en las tasas de suicidios entre las divisiones de la OMS de África y del Pacífico Occidental, y entre las Américas y Europa (véase la gráfica 1.1).

Gráfica 1.1: Tasas de homicidios y de suicidios por regiones de la OMS (2000)



Fuente: Krug et al. 2003: 12.

Para aproximarse a la magnitud de la violencia en el caso específico de América Latina, sirve como parámetro de comparación la clasificación mundial de las principales causas de muerte y en años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD), y las posiciones relativas de los homicidios y la violencia interpersonal en cada una de éstas:

También hay grandes diferencias entre países de una misma región o subregión —como se verá a continuación para el caso de América Latina—, y dentro de los propios países, además de las diferencias de género y generacionales, que afectan en forma particular a poblaciones rurales o urbanas, comunidades ricas o pobres, y a distintos grupos raciales y étnicos (Krug et al. 2003: 11-12).

**Tabla 1.1: Posiciones relativas de las muertes vinculadas con violencia y AVAD en el mundo (Estados miembros de la OMS) y en América Latina**

Regiones	Defunciones			AVAD		
	Homicidios	Hombres	Mujeres	Violencia interpersonal	Hombres	Mujeres
Total mundial	22.º	17.º	37.º	21.º	16.º	43.º
Las Américas	7.º	4.º	30.º	5.º	2.º	27.º
Estados Unidos, Canadá y Bahamas	22.º	s/d	s/d	18	s/d	s/d
América Latina y El Caribe	5.º	s/d	s/d	3	s/d	s/d

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, versión 1 (Krug et al. 2003).

1.5 Violencia juvenil

La adolescencia y los primeros años de la edad adulta constituyen un período en el que la violencia, así como otro tipo de comportamientos, a menudo se expresan con más intensidad. Categóricamente, la OMS afirma que “En casi todos los países, los adolescentes y los adultos jóvenes son tanto las principales víctimas como los principales perpetradores de esa violencia” (Krug et al. 2003: 27). Efectivamente, la violencia cometida por adolescentes y jóvenes⁵ es una de las formas más visibles de la violencia en la sociedad, cuyas manifestaciones son destacadas a diario y difundidas por los medios masivos de comunicación de todo el mundo, al asociarse con la realización de infracciones que abarcan diversas violaciones de las normas jurídicas y sociales, desde delitos leves hasta delitos graves, vinculados con la oportunidad de participar en actividades ilícitas, el consumo de drogas y los actos de violencia.

Por otro lado, desarrollando la otra parte de la afirmación anterior, en las últimas décadas, y a nivel mundial, han aumentado las tasas de homicidios juveniles, aunque revelando marcadas diferencias entre países y regiones: “Los aumentos de las tasas de homicidios juveniles fueron más pronunciados en los países en desarrollo y en las economías en transición. Además, los incrementos de dichas tasas se asociaron en general con un mayor uso de las armas de fuego como método de ataque” (Krug et al. 2003: 28-29).

La magnitud del fenómeno —en el 2000 se produjeron 199.000 homicidios de jóvenes (9,2 por 100.000 habitantes), un promedio de 565 niños, adolescentes y adultos jóvenes

5 El primer Informe mundial sobre la violencia y la salud define a los jóvenes como personas con edades entre los 10 y los 29 años (Krug et al. 2003: 27). En este informe acogeremos esta convención, aunque considerando las diferencias fisiológicas, psicológicas y sociológicas presentes en este amplio rango de edades. Así, de acuerdo con criterios de la OPS, este rango será diferenciado en las categorías de adolescentes y jóvenes, de la siguiente manera:

- La adolescencia, entre los 10 y los 19 años, caracterizada como un proceso esencialmente biológico, en el que se produce un avance importante en el desarrollo cognitivo y estructurante de la personalidad.
- La juventud, para diferenciarla, indicaría el proceso de preparación de los individuos para asumir roles y tareas de adulto en la sociedad, tanto en el plano social como en el profesional, y contemplaría a los sujetos con edades entre 15 y 24 años, que extenderemos hasta los 29.

Según estos parámetros, la población de América Latina entre 10 y 29 años de edad constituye cerca de 37% de la población total, unos 200 millones en total, con una tasa de expansión inferior a 1% medio anual, con una tendencia a tasas negativas de crecimiento para los años siguientes (Hopenhayn y Miranda 2004).



de 10 a 29 años de edad por día— y su incidencia en países de bajos o medianos ingresos —con tasas superiores a 11,0 por 100.000 habitantes en África, América Latina y el Caribe, la Federación Rusa y los países de Europa sudoriental, a los que suma Estados Unidos dentro del grupo de países de altos ingresos— es tal que las crecientes tasas de homicidios y lesiones mortales en la adolescencia y juventud han llevado a que, en algunos países no desarrollados, se anulen los impactos en el aumento de años en la esperanza media de vida producto de la reducción de la mortalidad infantil y el mejoramiento en la provisión y cobertura de servicios médicos y sanitarios para la población (Dowdney 2005).

Pero además, son sobre todo los impactos de la violencia sobre niños y adolescentes de las familias más pobres los que incrementan las presiones en varias áreas y comprometen seriamente el desarrollo social y humano de los países:

En primer lugar, profundiza la cultura de la violencia a través de la socialización que conlleva la violencia social y la criminalidad. En segundo lugar, la presión sobre el sistema de salud, cuyos costos diarios de atender a los niños víctimas de la violencia social son altísimos para las familias pobres, que no poseen estos seguros. En tercer lugar, los traumas psicosociales para las familias y la cada vez menor posibilidad de evitar la defensa violenta ante tales agresiones (Wielandt 2005: 20).

Por todo esto, la violencia en adolescentes y jóvenes ha concitado la atención de las instituciones abocadas al desarrollo y la preservación de la paz a escala global, y es hoy motivo de atención prioritaria en las políticas de prevención. En el máximo nivel, el *Informe sobre la juventud mundial 2005* del secretario general de las Naciones Unidas (ONU 2005: 21-23) hace especial referencia a este tópico, refiriendo que la mayoría de los actos violentos perpetrados por jóvenes se dirigen contra otros jóvenes de la misma edad y sexo, y que la tasa de delincuencia de los hombres adolescentes y jóvenes duplica la de las mujeres del mismo grupo etario, así como sus condenas son seis o siete veces superiores que las de las mujeres. El informe también hace referencia a la forma en que la discriminación y los estereotipos basados en el género inciden contra las mujeres adolescentes y jóvenes, especialmente vulnerables a la violencia sexual y el maltrato físico, así como a su combinación con factores de riesgo que aumentan esta condición, particularmente en el caso de las refugiadas, cuya población mundial está compuesta por 50% de mujeres menores de 19 años.

El informe avanza también en dar recomendaciones, mencionando algunos instrumentos específicos de las Naciones Unidas con directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad, Reglas de Beijing), que apuntan a su consideración como parte esencial de la prevención general del delito en la sociedad. Entre estas recomendaciones están la de reducir la necesidad de intervención del Estado cuando va en detrimento de la función socializadora de la familia, el establecimiento de medidas positivas para promover el bienestar general del menor, los enfoques sociales sobre los judiciales para el tratamiento de jóvenes delincuentes, y la intervención en etapas tempranas como la mejor forma de prevenir la delincuencia juvenil. Y con relación a la violencia contra mujeres adolescentes y jóvenes, el informe exhorta a la promulgación de leyes que las protejan de todas las formas de violencia, con especial énfasis en las medidas preventivas relacionadas con el infanticidio femenino, la selección prenatal por el sexo del feto, la mutilación genital, el incesto, el abuso sexual, la explotación sexual, la prostitución y la pornografía (ONU 2005: 23), entre otras.

2. Situación de la violencia en adolescentes y jóvenes de América Latina



2

Situación de la violencia en adolescentes y jóvenes de América Latina

América Latina es la región del mundo donde las tasas de homicidios juveniles son más altas, con 36,4 por 100.000 habitantes, seguida de África —17,6 por 100.000— y, todavía más lejos, Europa Occidental y algunos países de Asia y el Pacífico —0,9 por 100.000— (Krug et al. 2003: 27). Por otro lado, los estudios sobre violencia no mortal permiten complementar los datos anteriores, revelando que por cada homicidio juvenil, hay entre 20 y 40 víctimas jóvenes que reciben tratamiento en los hospitales. Los estudios —realizados en ciudades africanas y latinoamericanas— revelan que los traumatismos causados por la violencia tienden a aumentar extraordinariamente conforme se avanza de la adolescencia a la juventud y hacia los primeros años de la vida adulta (Krug et al. 2003: 30-31).

Obviamente, un fenómeno de esta magnitud no pasa desapercibido ni deja de suscitar asociaciones más generales con el incremento de la violencia interpersonal en América Latina, a su vez vinculado al aumento de la inseguridad ciudadana, movilizándolo a la opinión pública en todos los países y clases sociales.

En la encuesta Latinobarómetro 2001, realizada en 17 países de la región, cuatro de cada cinco entrevistados dijeron que la delincuencia y la drogadicción habían aumentado mucho en sus países en los últimos tres años. El porcentaje es superior al que se obtuvo en 1995 en una edición similar de la encuesta (fue 65%). Más alarmante aún, dos de cada cinco señalaron que ellos o un miembro de su familia habían sido objeto de un delito en los últimos 12 meses (Klinsberg 1999: 1).

Por otra parte, hay una clara tendencia sociodemográfica que vincula la comisión de actos violentos con hombres jóvenes. La mayor propensión de este grupo no ha sido satisfactoriamente explicada, y está asociada a un amplio rango de causas, que van desde las características psicosociales de la adolescencia, los patrones de socialización patriarcal y las determinaciones biológicas, hasta carencias de oportunidades para la educación y el acceso al empleo, la distribución desigual del ingreso y de los recursos, la influencia de una cultura consumista, la tolerancia de la violencia y la alta impunidad de los delitos, y la disponibilidad de armas de fuego (Moser y Shrader 1999).¹ Los jóvenes violentos

¹ “El estado actual de la comprensión de la causalidad de la violencia está fragmentado y es impreciso. Pocos estudios cuentan con el rigor metodológico para establecer la causalidad, y por consiguiente muchos informes se basan en conjeturas descriptivas o en análisis incompletos relacionados con las asociaciones entre las condiciones y la violencia económicas, sociodemográficas o culturales. Lo que es más, las teorías de los determinantes de la causalidad tienden a reflejar la disciplina profesional que informa el debate; la compartimentalización tanto del conocimiento como de la praxis perpetúa una comprensión unidimensional de la violencia y limita los esfuerzos de encarar en forma efectiva los sustentos multicausales de la conducta violenta” (Moser y Shrader 1999: 5).



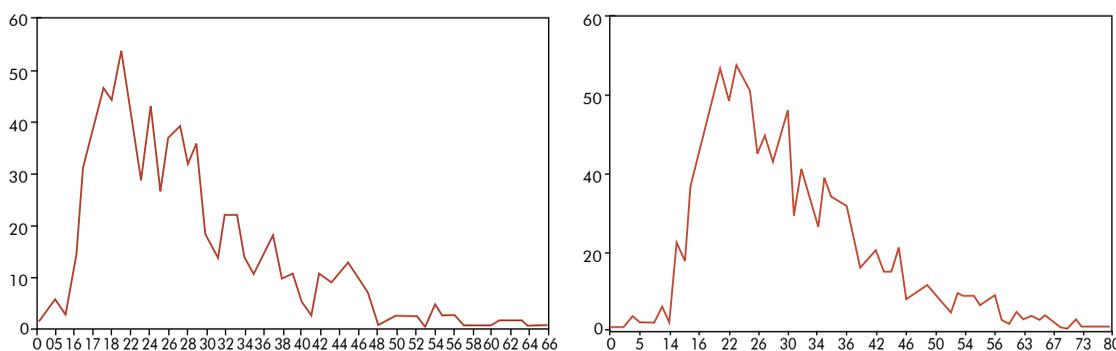
[...] tienden a cometer una variedad de delitos; además, a menudo presentan también otros problemas, tales como el ausentismo escolar, el abandono de los estudios y el abuso de sustancias psicotrópicas, y suelen ser mentirosos compulsivos y conductores imprudentes y estar afectados por tasas altas de enfermedades de transmisión sexual (Krug et al. 2003: 27).

En cualquier caso, la percepción general es que “Muchas veces los sorprende [a los pobladores pobres de zonas urbanas] las edades de los delincuentes y/o drogadictos, [que] cada vez son más chicos”, como confirma un estudio del Banco Mundial sobre pobreza en distintos países de América Latina (Cichero, Feliú y Mauro 1999: 26). Según Rubio (1998: 2), la violencia en adolescentes y jóvenes y la comisión de actos delictivos se relacionan, aunque funcionan con dinámicas independientes entre sí:

Para la violencia económica, el posible factor de reproducción sería la delincuencia juvenil. Para la violencia homicida son claros los síntomas de epidemias locales que se retroalimentan. Este fenómeno [...] sugiere una asociación entre estos y la violencia más estrecha de lo que se ha venido suponiendo.²

La gráfica 2.1 ilustra esta asociación:

Gráfica 2.1: Edades de las víctimas de homicidio (izquierda) y edades de homicidas (derecha) en América Latina



Fuente: Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública-Universidade Federal de Minas Gerais, en Beato (2001).

Así, los jóvenes —especialmente los hombres que pertenecen a familias con bajos ingresos, desempleados y que residen en zonas periféricas de las ciudades— son vistos automáticamente como violentos y potenciales infractores, una apreciación negativa que se agudiza a medida que la inseguridad ciudadana se convierte en una preocupación central para los formadores de opinión pública, medios de comunicación, políticos y organismos especializados. De esta manera, el tema de la violencia juvenil —en el marco de la seguridad ciudadana— se ha constituido en un problema político de prioritaria atención en las agendas gubernamentales y en los programas de los candidatos a cargos de elección pública, que genera también el interés de los centros de investigación, los organismos no gubernamentales, las agencias de cooperación y las instituciones financieras multilaterales.

En cualquier caso, las distintas acciones e interpretaciones de los diferentes actores permiten el reconocimiento de por lo menos tres enfoques diferentes pero complementarios, que

² Al hablar de epidemias locales que se retroalimentan, se hace referencia al modelo estándar de contagio simple usado por los epidemiólogos para las enfermedades. El modelo se centra en la interacción entre las víctimas, los victimarios y sus comportamientos, en lugar de enfocarse únicamente en el móvil de la violencia y el supuesto de una víctima pasiva. La hipótesis más general puede ser sintetizada como “la violencia genera mayor violencia”. Más adelante, al analizar la dinámica de los factores de riesgo presentes en la comunidad, se volverá sobre este aspecto.



justifican la inversión pública en la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, y que nos permiten levantar un breve estado situacional de la problemática en América Latina. Nos referimos a la violencia en adolescentes y jóvenes como un asunto de *derechos humanos*, como un problema de *salud pública* y, finalmente, como un obstáculo para el *desarrollo económico*.

2.1 Violencia juvenil y derechos humanos

En principio, se trata de una cuestión crucial en materia de derechos humanos, pues la violencia relacionada con adolescentes y jóvenes no sólo atenta contra el derecho fundamental de la vida, sino que está estrechamente vinculada con múltiples violaciones a otros derechos. Según un estudio de Cardia, Adorno y Poletto (2003) que analiza los homicidios en adolescentes y jóvenes de São Paulo, las tasas más altas se correlacionaban con aquellos barrios que presentaban niveles más bajos en el grado de acceso a derechos como educación, nutrición apropiada, vivienda, salud, seguridad personal, protección de la familia y posibilidades de trabajo para el conjunto de la población, combinados con una gran concentración de población adolescente y joven.

El no ejercicio de estos derechos aumenta la exposición a distintas formas de violencia, patologías y accidentes, lo cual genera una mayor probabilidad de morir durante la juventud con relación a otros grupos de edad, como niños y adultos (Hopenhayn y Miranda 2004, Dowdney 2005).³ El estudio cualitativo sobre pobreza en la Argentina, financiado por el Banco Mundial, ilustra bien este aspecto a partir del testimonio de los habitantes de barrios marginales en Buenos Aires: “La inseguridad es permanente, cotidiana [...] la violencia del desamparo, la falta de apoyo y cobertura; no hay trabajo, no hay para comer, condición general que provoca crisis social, degenerando en bandas de ladrones y asesinos, drogadictos” (Cichero, Feliú y Mauro 1999: 26).

A partir de los datos disponibles sobre violencia juvenil en América Latina, el análisis de las políticas que tratan de prevenirla y combatirla, y los recursos humanos e institucionales empleados, Bernales, Albán y Otálora (2001) plantean una hipótesis sobre el vínculo entre modernización excluyente, ciudadanía y violencia juvenil, la que podemos sintetizar en su idea central de que

[...] el incremento de la violencia en América Latina surge y se expresa en un contexto de crisis valorativa y social con características en algunos aspectos de anomia, que afecta principalmente las normas morales y legales que regulan la conducta humana, ocasionando su desviación de aquellos patrones socialmente válidos para la convivencia pacífica. Una de las manifestaciones genéricas de la crisis se expresa como un decrecimiento de las condiciones de vida de la población, lo cual facilita los comportamientos violentos. Otra, más precisa, indica que la crisis normativa valorativa ha afectado también a instituciones básicas como la familia, la escuela, los partidos, los sindicatos e, inclusive, la Policía, donde un porcentaje —no muy grande pero significativo— se involucra en graves faltas disciplinarias y en delitos comunes (Bernales, Albán y Otálora 2001: 70).

Tal crisis sería producto de un proceso de modernización que reproduce la ubicación periférica de América Latina en el fenómeno contemporáneo de la globalización, y es poco eficaz para resolver los problemas de la pobreza y la exclusión, originando, por lo tanto, factores de tensión social y violencia. Siguiendo con Bernales,

³ Un aspecto sobre el que la evidencia es fragmentaria pero resulta de primera importancia, es el de las inequidades generacionales en las probabilidades de morir durante la juventud, es decir, durante una etapa vital en que las causas de muerte son mayormente prevenibles. Todos los indicios disponibles sugieren que los pobres están más expuestos a patologías, accidentes y violencia, por lo que sus índices de mortalidad son mayores. Según cálculos propios a partir de datos de la OPS (*Estadísticas de salud de las Américas 2003*), la relación promedio de jóvenes fallecidos de 15 a 24 años por adultos fallecidos de 25 a 44 años es de 0,5173. Colombia (0,7438), Venezuela (0,7434), Panamá (0,5612) y Uruguay (0,5519) son los países donde mueren más jóvenes con relación a las defunciones en el grupo de adultos.



Este tipo de exclusión social afecta principalmente a los jóvenes, dejándolos en una situación de desprotección casi absoluta y por consiguiente más expuestos a la exclusión social. En una situación como ésta, las manifestaciones de violencia no dejarán de expresarse pronto. Este es, a nuestro juicio, uno de los puntos de partida que podrían explicar la génesis de la violencia juvenil [...] Estos elementos, sumados a situaciones de extrema pobreza, han concurrido en no pocos casos a la producción de la violencia y a una relativa impotencia para combatirla con eficacia (Bernales, Albán y Otálora 2001: 67-68).

La magnitud de la problemática genera presiones sobre la gobernabilidad ante la percepción de un ambiente generalizado de inseguridad colectiva, que induce a muchos gobiernos a tomar decisiones favorables a costosas políticas represivas y punitivas (encarcelamiento, suspensión de hábeas corpus, etcétera):

En todo el mundo, las autoridades tienden a actuar solo después que han ocurrido actos de violencia patente, para luego invertir recursos durante un breve lapso en programas destinados a grupos de personas pequeños y fácilmente identificados. Un clásico ejemplo de ello es la adopción de enérgicas medidas policiales periódicas en zonas con alto grado de violencia, por lo general después de un incidente muy divulgado (Krug et al. 2003: 265).

Estas acciones inmediatas, generalmente contra grupos cuyos derechos están seriamente menoscabados por factores culturales y por efecto de la estructura política-económica de las sociedades, pueden beneficiar —a veces se las realiza con esa intención— acciones policiales ilegales y el surgimiento de grupos paramilitares, que contribuyen todavía más a crear violencia e incrementan la inseguridad en los barrios marginados.⁴

Para más, la falta de resultados de tales acciones no sólo termina dejando serias dudas respecto a la habilidad de las instituciones democráticas para tratar efectivamente con el problema de la violencia, sino que causa un impacto político muy negativo en las nuevas generaciones, reforzando los elementos de un contexto en el cual el reconocimiento jurídico de los derechos ciudadanos de los y las jóvenes no pasa de ser “un abstraccionismo que no necesariamente se condice con la realidad” (Bernales, Albán y Otálora 2001: 47), en el marco de sociedades caracterizadas por una cultura democrática poco consolidada y un precario desarrollo institucional. Esto determina efectos disolventes en el capital social, legitimando la desconfianza hacia las instituciones y la regulación de la vida en sociedad (Buvinic, Morrison y Shifter 1999: 14).

2.2 Violencia juvenil y salud pública

Desde el punto de vista de la salud pública, el informe *La juventud en Iberoamérica: Tendencias y urgencias* de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (Hopenhayn y Miranda 2004) señala que mientras la probabilidad de morir de los jóvenes latinoamericanos a fines de la década de 1990 revelaba una reducción notable en países como Bolivia, Colombia, el Perú y países centroamericanos, con relación al comienzo de la década, el perfil epidemiológico de la población juvenil se había modificado sensiblemente, manteniendo la tendencia a disminuir pero con una creciente participación de las causas externas en la morbilidad juvenil de la región. Esta situación paradójica se deriva de una mejor salud juvenil en términos de provisión, pero un insuficiente reconocimiento de su perfil epidemiológico específico.

Es sabido que el ciclo de la juventud es aquel en que son muy bajas las probabilidades vegetativas o “endógenas” de enfermar gravemente o morir. Pero por otra parte, existe un perfil de morbilidad juvenil que se origina en la mayor prevalencia de accidentes, agresiones físicas, uso nocivo de drogas,

4 Incluso las actuaciones eficaces y eficientes de la policía, como parece ser en el caso de Nueva York, pueden, sin embargo, traer aparejadas acciones represivas focalizadas en los sectores más marginados y excluidos, reforzando concepciones sociológicas y criminológicas que tratan de justificar “científicamente” la atribución de características discriminadoras contra los adolescentes y jóvenes de determinados barrios o con ciertos rasgos físicos o culturales (Barrionuevo s/f).



enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y precoces, y otros, que no encuentran un sistema integrado de atención en los servicios de salud. De manera que los jóvenes viven un contraste entre buena salud y riesgos sanitarios poco cubiertos (Hopenhayn y Miranda 2004: 18).

Así, la evolución de la mortalidad juvenil durante los últimos 15 años ha mantenido una tendencia a descender desde hace 50 años debido al avance de la ciencia médica, la ampliación de la cobertura de servicios básicos y sanitarios, y el incremento de la capacidad individual para prevenir y enfrentar las enfermedades. Sin embargo, estos avances han tenido una distribución heterogénea, ya que se han ampliado las diferencias según tramos de edad y género, siendo mayor esta disminución en el rango de edades de 10 a 15 años, ya que en los otros rangos de edad —15 a 20, 20 a 25 y 25 a 30 años— son más frecuentes las causas de muerte vinculadas a conductas o estilos de vida correlacionados con la comisión de actos violentos o accidentes.

Los actuales roles sociales derivados del género originan riesgos y adversidades diferenciales en razón de su inadecuación con los drásticos cambios culturales, sociales y económicos de las sociedades latinoamericanas. La urbanización e industrialización aceleradas, las transformaciones en el desarrollo institucional y el impacto de la globalización sobre las estructuras productivas y sociales afectan tanto a hombres como a mujeres jóvenes como grupo de riesgo que comparte las dificultades de acceso a la escolaridad y el empleo, aunque los hombres presentan un mayor riesgo psicosocial que las mujeres por su mayor vulnerabilidad con relación a las adicciones, la sexualidad, el sistema penal y la carencia de redes de apoyo.

Krauskopf sintetiza así estas diferencias:

[...] entre las situaciones que afectan más al grupo masculino se pueden mencionar: el consumo intensivo de alcohol y otras drogas, la conducción de vehículos a edades tempranas y sin utilización de los elementos de protección [...] [conducir] en estado de ebriedad o propensión a peleas físicas, particularmente como portadores de armas blancas o de fuego, los accidentes, homicidios y suicidios. Es un hecho bastante generalizado, de que son mayores los intentos de suicidios en las mujeres y que los suicidios efectivos son más frecuentes en los hombres. Entre las mujeres jóvenes su vulnerabilidad parece asociada a su sexualidad, particularmente cuando son abusadas, maltratadas y explotadas (Krauskopf 2002: 4).

Así, siendo importantes las causas externas —numérica y proyectadamente— en la mortalidad juvenil de ambos sexos, aquellas relacionadas directamente con formas de violencia son mayores en los hombres, pues de cada 100 fallecimientos masculinos, 77 son atribuibles a causas violentas. En tanto, entre las mujeres, 38 de cada 100 defunciones son resultado de estas causas violentas, y 62 de causas mórbidas (Hopenhayn y Miranda 2004: 136).

En conjunto, las muertes atribuidas a causas externas en los hombres jóvenes superan en todos los países a las muertes por enfermedades transmisibles y genético-degenerativas, invirtiendo tanto la tendencia con respecto a las mujeres de la misma edad como la de los demás grupos de edad, en hombres o mujeres. Según la CEPAL,

El abultado peso de la mortalidad juvenil por causas externas obedece principalmente a dos factores, a saber, la alta frecuencia relativa de muertes accidentales (principalmente de tránsito) y muertes por violencia (agresiones externas y suicidios). Como se señaló, ambas afectan más intensamente a los hombres, lo que se refleja en el mayor peso que tienen estas causas de muerte entre ellos (Hopenhayn y Miranda 2004: 139).

Esto aportaría indicios para explicar el crecimiento de la brecha de mortalidad entre hombres y mujeres jóvenes, estas últimas beneficiadas por las disparidades de género en



cuanto a la frecuencia relativa de muertes asociadas también con conductas o estilos de vida. Así, al comparar según cohortes y géneros, se evidencian diferencias particularmente agudas y desfavorables para los hombres en los rangos de edad entre 15 y 30 años, quienes están mucho más expuestos a la mortalidad por causas externas, es decir, suicidios, homicidios y accidentes (Hopenhayn y Miranda 2004: 42). Así, y con relación a las muertes por causas externas, los hombres jóvenes aportan — en comparación con las mujeres— casi 86% del total de defunciones por esta causa en la región, presentándose las tasas más altas de participación masculina en Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela. En cambio, la Argentina, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y el Perú tienen la mayor participación de mujeres en muertes por causas externas (véase la tabla 2.1).

Tabla 2.1: Distribución de la mortalidad juvenil por causas externas según sexo en América Latina (en porcentajes)

Países	Todas las causas		Todas las causas externas		Accidentes de tránsito		Homicidios		Suicidios	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Argentina (1997)	67,6	32,4	78,5	21,5	74,6	25,4	88,6	11,4	66,1	33,9
Brasil (1998)	75,4	24,6	86,4	13,6	78,1	21,9	92,0	8,0	72,2	27,8
Chile (1999)	75,8	24,2	85,3	14,7	77,6	22,4	91,9	8,1	81,6	18,4
Colombia (1998)	80,6	19,4	87,9	12,1	81,4	18,6	92,6	7,4	64,6	35,4
Costa Rica (2001)	74,8	25,2	88,3	11,7	91,4	8,6	81,2	19,8	78,3	21,7
Ecuador (2000)	59,9	40,1	76,3	23,7	73,3	26,7	88,6	11,4	52,9	47,1
El Salvador (1999)	63,3	36,7	74,9	25,1	75,0	25,0	88,2	11,8	37,9	62,1
México (2000)	73,8	26,2	86,0	14,0	84,3	15,7	89,7	10,3	81,7	19,3
Nicaragua (2000)	66,5	33,5	77,4	22,6	83,0	17,0	86,6	13,4	59,4	40,6
Panamá (2000)	69,7	30,3	84,3	15,9	73,6	26,4	95,6	4,4	73,1	26,9
Perú (2000)	65,7	34,3	75,2	24,8	76,1	23,9	87,0	16,0	51,6	48,4
R. Dominicana (1998)	61,6	38,4	83,5	16,5	81,1	18,9	79,8	20,2	82,7	17,3
Uruguay (2000)	74,5	25,6	83,5	16,5	81,1	18,9	79,8	20,2	82,7	17,3
Venezuela (2000)	83,1	16,9	90,7	9,3	78,7	21,3	94,9	5,1	81,4	18,6
Total	74,7	25,3	85,7	14,3	79,5	20,5	91,9	8,1	70,1	29,9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la OPS, Estadísticas de salud de las Américas, 2003. En <<http://www.paho.org>>.

De las diferentes causas, el homicidio explica casi 50% de las muertes de jóvenes por causas externas en América Latina, que representa el doble de las causas de muerte por accidentes y seis veces los suicidios (véase la tabla 2.1). En el conjunto de las causas externas de muerte, los homicidios aportan la mayor diferencia de los hombres con respecto a las mujeres, llegando a 92%. Los países donde es más marcado este sesgo de género en los homicidios son Brasil, Colombia, Panamá y Venezuela. Para las mujeres, el homicidio duplica el promedio latinoamericano en Costa Rica, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La causa externa de mortalidad que más afecta a las mujeres es el suicidio, atribuyéndose 30% de las defunciones; destacan los casos de Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Perú. Sin embargo, en América Latina, como se ve en la tabla 2.2, los hombres jóvenes registran aproximadamente 1,3 veces más suicidios que las mujeres de la misma edad; existen casos en los que esta diferencia se cuadruplica, como en Chile, Costa Rica, México,



Uruguay y Venezuela. Sólo en El Salvador y el Perú las tasas de suicidios de las mujeres son más altas que las de los hombres. Con una tendencia regional a disminuir como causa (Hopenhayn y Miranda 2004), Chile, Nicaragua, Perú y Uruguay son los países donde la tasa de suicidios es más elevada que la de homicidios en el conjunto de las causas externas de muerte.

Tabla 2.2: Población juvenil fallecida por causas externas según sexo en América Latina (en número de personas)

Países	Todas las causas externas		Accidentes de tránsito		Homicidios		Suicidios		Otras causas ^a	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Argentina (1997)	2.265	619	512	175	321	41	204	105	1.228	298
Total Argentina	2.884		687 (23,82%)		362 (12,55%)		309 (10,71%)		1.526 (52,92%)	
Brasil (1998)	29.959	4.699	5.928	1.665	16.087	1.402	462	1.199	6.744	1171
Total Brasil	34.658		7.593 (21,90%)		17.489 (50,47%)		1.661 (4,80%)		7.915 (22,83%)	
Chile (1999)	1.015	176	189	55	96	8	156	35	574	78
Total Chile	1.191		244 (20,49%)		104 (8,73%)		191 (16,04%)		652 (54,74%)	
Colombia (1998)	11.981	1.646	1.614	370	8.365	673	562	307	1.440	296
Total Colombia	13.627		1.984 (14,56%)		9.038 (66,32%)		869 (6,38%)		1.736 (12,74%)	
Costa Rica (2001)	266	38	134	13	50	12	33	9	69	4
Total Costa Rica	304		147 (48,35%)		62 (20,39%)		42 (13,81%)		73 (17,45%)	
Ecuador (2000)	1.181	368	237	86	453	58	106	94	386	129
Total Ecuador	1.549		323 (20,85%)		511 (33,0%)		200 (12,91%)		515 (33,24%)	
El Salvador (1999)	1.041	348	210	70	636	85	98	160	97	34
Total El Salvador	1.389		280 (20,15%)		721 (51,90%)		258 (18,57%)		131 (9,38%)	
México (2000)	10.330	1.681	3.050	567	2.690	308	1.040	249	3.550	557
Total México	12.011		3.617 (30,11%)		2.998 (24,96%)		1.289 (10,73%)		4107 (34,19%)	
Nicaragua (2000)	763	223	145	30	191	30	180	123	247	40
Total Nicaragua	986		175 (17,75%)		221 (22,41%)		303 (30,73%)		287 (29,11%)	
Panamá (2000)	222	41	56	20	85	4	21	8	59	9
Total Panamá	263		76 (28,90%)		89 (33,84%)		29 (11,03%)		68 (26,23%)	
Perú (2000)	1.723	569	365	114	120	23	70	86	1.168	366
Total Perú	2.292		479 (20,90%)		143 (6,24%)		156 (6,80%)		1.534 (66,06%)	
R. Dominicana (1998)	714	175	315	78	174	24	21	16	204	57
Total R. Dominicana	889		393 (44,21%)		198 (22,27%)		37 (4,16%)		261 (29,36%)	
Uruguay (2000)	246	48	49	11	33	8	63	13	101	16
Total Uruguay	294		60 (20,41%)		41 (13,94%)		76 (25,85%)		117 (39,80%)	
Venezuela (2000)	5647	590	834	252	2.566	137	263	60	1.984	141
Total Venezuela	6.237		1.086 (17,41%)		2.703 (43,34%)		323 (5,18%)		2.125 (34,07%)	
Total por sexo	66.635	11.979	13.638	3.506	31.867	2.813	3.279	2.464	17.851	3.196
Totales América Latina	78.614		17.144 (21,82%)		34.680 (44,11%)		5.743 (7,30%)		21.047 (26,77%)	

^a Incluye, además de las causas especificadas, eventos de intención no determinada, ahogamientos y accidentes que destruyen la respiración, entre otras causas de muerte violenta.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la OPS. Estadísticas de salud de las Américas, 2003. En <<http://www.paho.org>>.



Una aproximación indirecta a la dimensión de la violencia interpersonal contra adolescentes y jóvenes en América Latina puede ser también proporcionada por los datos sobre mortalidad por lesiones intencionales. La tabla 2.3 establece una comparación con otras regiones, en donde es apreciable no sólo la más elevada incidencia de estas lesiones en la mortalidad juvenil a nivel mundial sino el sesgo de género, que también es el más alto —la mortalidad de los hombres por lesiones intencionales es 13,38 veces mayor que la de las mujeres—:

Tabla 2.3: Mortalidad causada por lesiones intencionales; por sexo, edad juvenil y región de la OMS (2000-tasa por 100.000 habitantes)

Región	Total	Hombres todas las edades	Mujeres todas las edades	Hombres 15-29 años	Mujeres 15-29 años
Total mundial	28,8	40,5	17,3	44,0	20,1
África	60,9	94,6	29,6	80,9	36,1
Estados Unidos, Canadá y Bahamas ^a	17,2	27,6	7,1	41,8	8,2
América Latina y el Caribe	34,3	62,1	7,6	101,7	11,5
Asia sudoriental	22,8	31,3	14,3	31,7	18,2
Europa	32,0	52,5	12,5	53,7	11,3
Mediterráneo oriental	21,6	27,4	15,5	29,1	19,1
Pacífico occidental	24,3	26,5	22,5	22,7	24,5

^a Las estadísticas de la OMS diferencian por países de alto ingreso y países de medio y bajo ingreso; en las Américas, sólo estos tres países pertenecen al grupo de alto ingreso.

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos del Proyecto de la Carga Mundial de Morbilidad de la OMS para 2000, versión 1 (Krug et al. 2003).

Parte de estas lesiones se produce debido a violencia interpersonal en la familia y la pareja, aunque es difícil determinar con precisión su dimensión. En las encuestas de juventud, el tema de la violencia intrafamiliar sólo aparece explícitamente tratado en el caso de Bolivia, donde del total de adolescentes y jóvenes encuestados, 33,4% reconoció haber sido víctima de agresiones físicas dentro de su casa, siendo los preadolescentes quienes más castigo físico reciben en sus hogares. Por otra parte, en un estudio realizado en Chile, los y las jóvenes manifiestan que con frecuencia se presentan casos de conducta violenta en sus hogares: 10% en el caso de violencia física de padres a hijos, 5,7% en el caso de violencia física entre cónyuges, 12,8% en el caso de violencia psicológica entre padres e hijos, y un 11,3% en el caso de violencia psicológica entre cónyuges (Hopenhayn y Miranda 2004: 99-100).⁵

Entre otros factores de riesgo identificados en la violencia sexual, ser joven implica un mayor peligro de violación, como demuestran los estudios mencionados por Krug et al. 2003 —Acierno et al. (1999), Greenfeld (1998) y Heise, Pitanguy y Germain (1994)— para varios países —entre estos Chile, México y el Perú—, relacionado con la violencia en

5 "Sin embargo, al preguntarle a los niños en un estudio más reciente, los datos muestran una realidad más agresiva. El castigo más frecuente mencionado por niños y adolescentes es 'no me dejan salir' (63%), le siguen en importancia 'no me dejan ver TV' (36%) y 'me pegan' (27%). Esta última cifra contrasta con el hecho de que en el estudio anteriormente mencionado solo un 10% de los adultos reconocen la existencia de violencia física dentro del hogar" (Hopenhayn y Miranda 2004: 100).



las escuelas y las universidades, así como con la explotación sexual de las mujeres. Otros estudios vinculan la edad joven con la pobreza y la falta de instrucción, que aumenta la dependencia económica de la pareja y la violencia sexual en el lugar de trabajo (Krug et al. 2003). El estudio sobre pobreza en el Perú menciona esta situación en los testimonios recogidos entre mujeres jóvenes migrantes en Lima:

Las mujeres jóvenes empleadas como “domésticas”, por su lado, sufren de otro tipo de abuso. Una chica de Cerro Blanco contó tímidamente: “Yo me fui a trabajar en vacaciones, pero sólo duré 15 días porque no me gustaba. Siempre me miraba el patrón y me hacía sentir mal con las cosas que decía... 80 soles al mes me iba a pagar, pero no me dio ni la mitad... Estaba enojado” (Blackburn 1999: 36-37).

Los datos de *The International Crime Victim Survey in Countries in Transition: National Reports* (1998), según un muestreo, permiten comparar casos reportados de violencia sexual —violaciones y abusos— contra mujeres menores de 16 años, siendo notable una diferencia en contra entre las ciudades latinoamericanas y las de otras regiones; si bien pueden darse explicaciones atenuantes, quizá relacionadas con el acceso a la justicia y valores culturales que podrían incidir en la tasa de denuncia, también hay que considerar la alta probabilidad de subregistro, ya que generalmente los casos de violencia sexual en la familia o la pareja no son denunciados; de hecho, un factor de riesgo para la violencia sexual contra las mujeres es estar casada o tener pareja (Krug et al. 2003).

Tabla 2.4: Comparación por ciudades del porcentaje de mujeres menores de 16 años que reportaron agresiones sexuales durante los cinco años anteriores (1992-1997)

Región	Ciudades reportadas	Tamaño de la muestra	Promedio (% muestra)
América Latina	Buenos Aires, La Paz, Rio de Janeiro, Bogotá, San José, Asunción	5.586	4,53
Europa Oriental y Eurasia	Tirana, Budapest, Diuoliai, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Vilnius, Ulaanbaatar, Zuuinmod	4.157	3,975
África	Gaborone, El Cairo, Johannesburgo, Gran Túnez, Kampala, Harare	5.940	2,47
Asia	Beijing, Bombay, Yakarta, Surabaya, Manila	6.100	1,625

Fuente: elaboración propia sobre la base de Krug et al. 2003.

Sorprendentemente, las encuestas nacionales de juventud no contienen datos que vinculen la violencia en adolescentes y jóvenes con su salud sexual y reproductiva, ni con relación a cómo las diversas manifestaciones de la violencia doméstica afectan su desarrollo psicológico y emocional. Sin embargo, la encuesta de Bolivia evidencia situaciones extendidas de violencia contra las mujeres en edades tempranas: alrededor de 7% de las mujeres señalaron haber sido violadas (Hopenhagen y Miranda 2004: 156). Por otro lado, la encuesta sobre la salud de adolescentes en el Caribe mostró que uno de cada ocho adolescentes, entre 16 y 18 años de edad, había sido abusado sexualmente,



encontrándose que las mujeres tenían una probabilidad dos veces mayor que los hombres de sufrir esta violencia (Weaver y Maddaleno 1999). Y en Lima, el estudio de Cáceres, Vanoss y Hudes (2000), citado por Krug et al. 2003, halló que la cantidad de mujeres jóvenes que decían haber sido iniciadas sexualmente por la fuerza era casi cuatro veces mayor que la de varones jóvenes (Krug et al. 2003).

Los estudios sobre pobreza mencionan situaciones halladas en los diálogos y talleres con los participantes que confirman esta realidad, aunque también enfatizan las dificultades para profundizar en el tema, tratándose de estudios que dependen esencialmente de la confianza que tengan los sujetos para narrar sus experiencias.⁶ Sin embargo, el estudio de pobreza en Brasil, realizado en barrios marginados de Recife, Itabuna y São Paulo, menciona que las agresiones contra las mujeres son comunes, tanto en la familia como en el ámbito de la comunidad y el vecindario, particularmente en los casos de las familias con jefatura femenina, las que “[...] tem a maior probabilidade de sofrerem abuso sexual, maus tratos e agressões [...] as mulheres que vivem sozinhas são estupradas em suas residências. As adolescentes também são consideradas como as mais propensas a serem assediadas na escola” (Melo 2000: 36-37).

2.3 Violencia juvenil y desarrollo

Finalmente, la violencia, además de sus efectos sobre la convivencia ciudadana y la salud, se reconoce —por su magnitud en la región— como un obstáculo macroeconómico,⁷ pues afecta en forma adversa a los activos del capital material, humano, social y natural, incrementando los gastos de los servicios de salud y asistencia social, reduciendo la productividad, disminuyendo el valor de la propiedad, desorganizando una serie de servicios esenciales, incrementando los costos de la inversión y disminuyendo los empleos, y, en general, alterando la gobernabilidad institucional y la salvaguarda de los derechos de propiedad, socavando las bases sociales ligadas al crecimiento económico (Eyzaguirre 1998; Cruz et al. 1998; Piquet Carneiro y Phebo 1998; CISALVA 1998; Rubio 1998; Fundación Mexicana para la Salud, 1998; Briceño-León y Pérez Perdomo 1999; Buvinic, Morrison y Shifter 1999; Londoño y Guerrero 1999, y Moser y Shrader 1999).

Para América Latina, Londoño y Guerrero (1999) estimaron los costos por la violencia como equivalentes al 12,1% de PIB, lo que significa casi 145.000 millones de dólares anuales, que adicionalmente implican costos distributivos —a causa de delitos contra la propiedad y pagos por extorsión o secuestro— del orden de 2,1% por 25.000 millones de dólares, más de lo que consiguen realizar los gobiernos de la región a través de los impuestos y el gasto público. Con respecto a la salud, los autores indican que la atención médica por causa de la violencia insume costos por 2.000 millones de dólares, mientras que en el orden educativo la destrucción de recursos humanos por muerte prematura o discapacidad es también significativa. Expresada en cifras, la magnitud del gasto es igual que la inversión en educación primaria de la región. En cuanto a los gastos en seguridad,

Las pérdidas materiales asociadas con la violencia son elevadas y tienen tres componentes de aproximadamente igual importancia. Los gastos de seguridad y justicia por parte del gobierno representan recursos del orden de 1.6 puntos del PBI. Los gastos directos en seguridad por parte de los

6 “En cuanto al abuso sexual de los niños, el estudio detectó pocos casos. El tema sin duda requiere de más tiempo de investigación. Dos casos fueron mencionados, ambos en Laderas del Chillón (Lima) —uno de un hombre quien abusó de su hijastra adolescente; otro de otro hombre (vecino de la madre de la víctima) quien abusó de una niña—. Los agresores no fueron denunciados, por temor a represalias peores” (Blackburn 1999: 23).

7 “El objetivo que implica el análisis de costos macroeconómicos es el de determinar el umbral de inversión por encima del cual se hace económicamente inviable dedicar recursos a reducir o impedir el crimen” (Moser y Shrader 1999: 8).



hogares y de las empresas llegan a representar un porcentaje casi tan alto como los públicos, lo cual es un hecho sorprendente (Londoño y Guerrero 1999: 23).

Los efectos de la violencia sobre la actividad económica y el bienestar son significativos, al afectar negativamente los niveles de inversión y productividad hasta por un valor de 1,8% del PIB. Sin embargo, el deterioro de las oportunidades de consumo y trabajo representa un costo de 5,3% del PIB, lo cual señala que los efectos indirectos de la violencia sobre la actividad económica y el bienestar resultan mayores que los efectos directos sobre la salud y los bienes (Londoño y Guerrero 1999). En resumen, la violencia impone un costo socioeconómico enorme en términos de desarrollo, particularmente entre los pobres urbanos, pues “Cuanto más activos puedan adquirir las personas, los hogares y las comunidades y cuanto mejor los puedan administrar, tanto menos vulnerables serán. Cuanto más se deterioren sus activos, tanto mayor será su inseguridad y en consecuencia, sus niveles de pobreza” (Moser y Shrader 1999: 8-9).

Los costos intangibles de la violencia se generan por lo general en las relaciones de pareja y en la familia —a veces en forma “invisible”, aunque no por ello menos insidiosa—, lo cual se refleja en días laborales o de estudio perdidos a causa de lesiones o malestares psicológicos asociados al maltrato. Los estudios de corte cualitativo sobre pobreza con metodologías participativas realizados por el Banco Mundial en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú coinciden en confirmar altos niveles de violencia familiar en sus diferentes formas —psicológicas, físicas y sexuales— que afectan a todos los miembros de la familia, aunque las víctimas directas son casi siempre mujeres y niños, y los perpetradores, los esposos, padres o padrastros. Además, asocian la violencia juvenil con el consumo de drogas y alcohol, y a la pobreza como “reacción” a fenómenos de desocupación y subempleo (véase Cichero, Feliú y Mauro 1999, GNT/NUR 1999; Blackburn 1999; Martínez 1999; y Arboleda, Petesch y Blackburn 2004). Concretamente, el estudio sobre pobreza urbana en el Ecuador afirma que

[...] las soluciones encontradas a estos problemas [de desempleo] han sido la inserción de las mujeres al trabajo asalariado o informal y la delincuencia [en los hombres] [...] estos cambios han modificado profundamente las relaciones entre hombres y mujeres, y han contribuido a aumentar la inseguridad de los jóvenes y sobre todo de las mujeres jóvenes [...] las más afectadas con los problemas de violencia que sufren los barrios urbanos estudiados (Martínez 1999: 93).

2.4 Conclusiones

Por razones diversas, la apretada síntesis expuesta da una idea de la situación de los y las jóvenes latinoamericanos con relación a la violencia, la que se hace más compleja a medida que se profundizan las diferencias entre los países de la región y se evidencian los sesgos de género. En general, los datos estadísticos y los análisis de los expertos permiten concluir que la juventud constituye un grupo de riesgo en salud, cuya vulnerabilidad deriva —en buena parte— de situaciones sociales y económicas producto de la exclusión social y de la falta de oportunidades, las que afectan negativamente sus comportamientos y decisiones, pues “[...] los jóvenes no conocen de lo que va a pasarles más adelante... piensan que solo van a vivir esos días que están ahí, ya no les importa lo que va a pasar más tarde en el futuro, para ellos no hay futuro [...] (Informe Esmeraldas. Entrevista a hombre joven)” (Martínez 1999: 52).

Sin embargo, considerando las notorias diferencias de desarrollo relativo entre los países de la región —y por tanto el tipo de oportunidades y horizontes vitales que ofrecen a sus jóvenes—, es posible suponer que existen múltiples causas subyacentes que no se vinculan



en forma manifiesta con factores asociados exclusivamente al grado o estilo de desarrollo económico y social; en algunos casos, también están motivados por conflictos sociales y políticos, así como por factores idiosincrásicos, concernientes a las culturas nacionales o subnacionales, y relativamente autónomos del proceso de desarrollo económico y social.

Así, como anota la CEPAL, la incidencia de la violencia en adolescentes y jóvenes latinoamericanos involucra también a jóvenes de clase alta y media, los que disponen de condiciones sanitarias y médicas óptimas de salud, así como de oportunidades y recursos educativos y de ocio, lo que sin duda refuerza la hipótesis a favor de determinados elementos idiosincrásicos y socioculturales que no guardan relación directa con factores de tipo económico y social (Hopenhayn y Miranda 2004). En ambos casos, es evidente que la magnitud y el impacto de la violencia en el perfil de morbilidad y mortalidad juvenil expresa un cúmulo de problemas sociales cuya repercusión psicológica apenas se ve indirectamente reflejada en las estadísticas y los estudios mencionados.

3. Causas de la violencia en adolescentes y jóvenes de América Latina



3

Causas de la violencia en adolescentes y jóvenes de América Latina

Las pautas de comportamiento, incluida la violencia, cambian en el curso de la vida de las personas. Sin embargo, los estudios parecen confirmar que la agresividad durante la niñez, junto con la presencia de determinadas condiciones y situaciones en la vida de las personas, señala una mayor probabilidad de comportamiento violento en la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, y más allá. El *Informe mundial sobre violencia y salud* habla de un “camino de desarrollo” que

persistirá toda la vida [como] una mayor tendencia subyacente hacia el comportamiento agresivo y violento. En otras palabras, quienes son relativamente más agresivos a cierta edad también tienden a ser relativamente más agresivos más adelante, aunque los grados absolutos de su violencia pueden variar [por lo tanto] Conocer cuándo y en qué condiciones se presenta [...] el comportamiento violento conforme se desarrolla la persona puede ayudar a planificar intervenciones y políticas de prevención orientadas a los grupos de edad más críticos (Krug et al. 2003: 33).¹

La comprensión de las causas de la violencia en adolescentes y jóvenes ha sido encarada como parte de la convicción de que es posible prevenirla y controlar su ocurrencia, tal y como se ha logrado actuar sobre otros problemas de salud como las complicaciones relacionadas con el embarazo, los accidentes de trabajo o las enfermedades infecciosas. Por supuesto, es esencial emprender las acciones de prevención en las fases más tempranas posibles del ciclo vital. Esto requiere el más amplio concurso de profesionales, científicos, políticos y diversos *stakeholders* para identificar los factores —individuales o sociales— que producen o evitan la violencia, y actuar en aquellos que podrían ser eliminados, reducidos o reforzados, con el objetivo de prevenir los efectos de este fenómeno.

El campo de la salud pública —que se ocupa de proporcionar el máximo bienestar para el mayor número posible de personas mediante la prevención de enfermedades y lesiones, así como ampliando y mejorando los servicios de atención a las poblaciones— dispone de un conjunto de conceptos y técnicas que incorporan una perspectiva interdisciplinaria, que requiere la acción colectiva y coordinada entre sectores con visiones, objetivos y recursos distintos —como la educación, la salud, los servicios sociales, la justicia y la política— para intervenir sobre problemas cuya complejidad excede el ámbito de la salud individual, como la violencia, “[...] resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales. Comprender la forma en enfoque de salud pública dirigida a prevenirla” (Krug et al. 2003: 27).

¹ Sin embargo, es necesario matizar la posible impresión de que una vez “violento”, se es violento por el resto de la vida. Las investigaciones parecerían revelar lo opuesto: la Encuesta Nacional de la Juventud realizada en Estados Unidos —basada en una muestra nacional de jóvenes que tenían 11 a 17 años en 1976, cuyo seguimiento se efectuó hasta que alcanzaron edades entre los 27 y los 33 años— mostró que si bien una proporción pequeña de los jóvenes continuaron cometiendo actos de violencia hasta llegar a la edad adulta, más de las tres cuartas partes de los que habían cometido actos graves de violencia desde su adolescencia dejaron de realizarlos alrededor de uno a tres años después (Krug et al. 2003). Lo anterior refuerza el valor de la capacidad de resiliencia individual y de la presencia de factores protectores, que pueden generarse a través de acciones efectivas de prevención.



En vista de la naturaleza del fenómeno de la violencia como problema de salud pública, se ha adoptado un “enfoque epidemiológico” (Guerrero 1998) que busca no tanto establecer una “causa” de la violencia como identificar los factores que se asocian con su emergencia y/o que actúan simultáneamente en su presencia. En este enfoque, la causalidad es una relación de probabilidad en la que mientras más factores se presenten simultáneamente, mayor es la posibilidad de que el fenómeno se produzca (FEDESARROLLO 1996). En el caso que nos ocupa, la violencia en adolescentes y jóvenes, las características individuales, las experiencias familiares, el acceso a armas de fuego, el uso de alcohol y de drogas, la exposición a la violencia en los medios de comunicación, así como factores sociales, económicos y políticos, se correlacionan y desempeñan un papel primordial en la prevalencia y las manifestaciones de la violencia, asociadas a conductas de riesgo. Comprender las causas de la violencia en adolescentes y jóvenes con un enfoque de salud pública significa identificar estas causas y los factores correlativos de este fenómeno, los factores que aumentan o disminuyen el riesgo de violencia, y los que podrían modificarse mediante la intervención.

El primer *Informe mundial sobre violencia y salud* recurre a un modelo ecológico—introducido a fines de la década de 1970 para la comprensión del maltrato infantil y posteriormente ampliado a otros problemas, como la violencia juvenil y de pareja— para comprender la naturaleza polifacética de la violencia y la correlación entre factores individuales y contextuales, “[...] considerando la violencia como el producto de muchos niveles de influencia sobre el comportamiento” (Krug et al. 2003: 27), que resulta útil para entender la dinámica relacional entre las múltiples causas que inciden en la violencia juvenil en una perspectiva más compleja y sistémica.

El modelo comprende la existencia de niveles individuales, relacionales, comunitarios y sociales, mutuamente interrelacionados, entre los que destacan la multicausalidad de la violencia y la interacción entre los factores de riesgo que operan dentro del individuo y en la familia, así como en los ámbitos sociales, económicos y culturales, en distintas etapas de la vida. En el presente informe, vamos a concentrarnos especialmente en los factores propios de los niveles de tipo relacional y comunitario, por estar éstos directamente vinculados al objeto de los términos de referencia del estudio, sin desconocer sus interacciones complejas con los factores de nivel individual y social.

3.1 El nivel individual

Comprende los factores biológicos y la historia personal, que influyen sobre el comportamiento violento y que permiten evaluar la probabilidad de que un sujeto sea víctima o perpetrador de actos de violencia. En el caso de la violencia de adolescentes y jóvenes, los estudios relevados por el primer informe de la OMS sobre violencia y salud permiten llegar a las siguientes conclusiones generales sobre la predictibilidad de los factores personales asociados con características biológicas y psicosociales.

3.1.1 Características biológicas

Se piensa que las lesiones y complicaciones en el parto, que quizá producen daño neurológico, podrían conducir a la violencia. En cambio, las complicaciones del embarazo no fueron un factor significativamente predictivo de ésta. Es interesante señalar que las complicaciones del parto se asociaron fuertemente con violencia futura cuando alguno de los progenitores tenía antecedentes de enfermedad psiquiátrica, si bien los datos no son concluyentes al no repetirse los resultados en estudios comparados de varios países,



por lo que “[...] puede ser que el embarazo y las complicaciones del parto permitan predecir la violencia solo o principalmente cuando ocurren en combinación con otros problemas dentro de la familia” (Krug et al. 2003: 27-35).

Con relación a lo anterior, las pruebas cognoscitivas y neuropsicológicas demostraron ser instrumentos confiables para establecer diferencias entre niños violentos y no violentos —con independencia de factores como la situación socioeconómica, el nivel educativo de los padres o su eventual separación o divorcio—, aunque esta conexión resultó más marcada entre niños de familias pobres o indigentes. Así, invariablemente, en todos los estudios se ha encontrado que la escasa inteligencia —según mediciones del cociente de inteligencia— y/o los niveles bajos de progreso en la escuela —pruebas de aprovechamiento escolar— se asocian con la violencia juvenil (Krug et al. 2003).²

Otro factor biológico parece ser las frecuencias cardíacas bajas, estudiadas sobre todo en hombres adolescentes y jóvenes, y que se asocian con la búsqueda de emociones y el deseo de correr riesgos. Ambas características pueden predisponer a los muchachos a la agresión y la violencia, en sus intentos por aumentar la estimulación y el grado de excitación.

3.1.2 Características psicosociales

Entre los principales factores de la personalidad que pueden predecir la violencia juvenil están la hiperactividad, la impulsividad, el control deficiente del comportamiento y los problemas de atención que se presentan correlacionados con la comisión de actos violentos antes de los 18 años de edad. Igualmente, estos niños —con dificultades cognitivas, psiquiátricas o neurológicas— son más propensos a recibir maltratos por parte de los adultos en sus familias. En cambio, factores vinculados con la inhibición —como la cautela y el evitar emociones fuertes— y una emotividad negativa —como la nerviosidad y la alienación— a la edad de 18 años están inversamente correlacionados con condenas por violencia. Estos resultados no han sido consistentes en las mujeres (Biehl 2001).

Según Hawkins, el abuso de sustancias entre los 6 y 11 años es un factor predictivo de la violencia juvenil y adulta, mientras no lo es si el consumo se da entre los 12 y 14 años (Biehl 2001). Igualmente, la embriaguez es un importante factor situacional inmediato que puede precipitar la violencia, encontrándose que cerca de las tres cuartas partes de los delinquentes juveniles violentos y alrededor de la mitad de las víctimas juveniles por lesiones en riñas y peleas estaban ebrios en el momento del incidente (Farrington 1993 y Wikström 1985, en Krug et al. 2003).

Llorente, Chau y Salas (2005) encontraron diferencias significativas en las edades de inicio del consumo de drogas entre adolescentes infractores y no infractores en Colombia, pero no en el consumo de alcohol; también hallaron que la frecuencia de la ingesta de sustancias (alcohol y drogas) era mucho mayor en los adolescentes infractores:

² Según el informe, “La impulsividad, los problemas de atención, la escasa inteligencia y el bajo progreso educativo pueden estar vinculados con deficiencias en las funciones ejecutivas del cerebro, ubicadas en los lóbulos frontales”, que afectan funciones claves para la permanencia y la satisfacción en el sistema escolar, como “la atención y concentración sostenidas, el razonamiento abstracto y la formación de conceptos, la fijación de metas, la previsión y planificación, la percepción y vigilancia efectivas del propio comportamiento, y las inhibiciones con respecto a comportamientos inapropiados o impulsivos” (Krug et al. 2003: 36).



En el consumo de alcohol se tiene que las diferencias entre jóvenes infractores y controles cuando los menores reportan haber consumido a muy temprana edad (5-7 años) son mínimas. Pero a partir de los 9 años, se empieza a abrir una brecha entre ambos grupos con respecto a la proporción de los menores que señalan haber consumido, la cual tiende a cerrarse hacia los 17 años [...] De este modo, pese a las diferencias, se aprecia una tendencia similar entre ambos grupos de jóvenes en cuanto al aumento de la proporción de los que consumen alcohol en la medida en que se escala en la edad. En el caso del consumo de drogas, en cambio, no se presenta el mismo patrón. Las diferencias observables [...] entre los dos grupos son más marcadas no sólo en términos del desfase en la edad de iniciación (8 años en los infractores versus 13 en los controles), sino también en cuanto a la creciente brecha entre ambos grupos en la medida en que aumenta la edad en que empiezan a consumir estas sustancias. Así, mientras que a los 13 años el 31% de los infractores y el 1% de los controles ya han consumido drogas, a los 17 años, el 60% de los infractores manifiesta haberlo hecho frente al 4% de los controles. Por otra parte, también hay que destacar las diferencias respecto de la frecuencia en el consumo de estas sustancias. Aunque hay un marcado contraste en el caso del consumo de alcohol, la diferencia más relevante se observa en cuanto al abuso de drogas (Llorente, Chaux y Salas 2005: 25).

3.2 El nivel de las relaciones

Los factores individuales de riesgo de violencia juvenil descritos anteriormente se vinculan con factores de riesgo ubicados en el segundo nivel del modelo ecológico, que comprende las interacciones cotidianas en el nivel de las relaciones sociales más cercanas a los adolescentes y jóvenes.

La información recogida por Hopenhayn y Miranda (2004) indica que a pesar de algunas diferencias no muy significativas, hombres y mujeres jóvenes comparten la característica de contar con un núcleo afectivo íntimo bastante reducido, constituido por la familia y un par de otras figuras cercanas —básicamente los amigos y la pareja, que constituyen su principal entorno social de contención—, y un núcleo bastante más lejano, conformado por figuras que hacen parte del entorno cotidiano, como profesores, vecinos, compañeros u otros familiares, un sacerdote. Al aumentar la edad, se incrementa la preferencia por conversar acerca de los problemas y las expectativas personales con la pareja y los amigos. Así, se piensa que es mayor la influencia de las familias durante la niñez, mientras que en la adolescencia, los amigos y el entorno extrafamiliar de relaciones adquieren una influencia cada vez más importante.

Para Adorno, gran parte de la violencia en América Latina se produce en este nivel de relaciones interpersonales, sin relación con la criminalidad cotidiana, donde son frecuentes las tensiones y los conflictos intersubjetivos con familiares, amigos y conocidos, por lo general en los mismos lugares de residencia, de trabajo o de recreación:

[...] cujo desfecho acaba, muitas vezes até acidental e inesperadamente, na morte de um dos contendores, [resultante de] reciprocidades rompidas, acerca de expectativas não preenchidas quanto ao desempenho convencional de papéis como os de pai, mãe, mulher, filho, estudante, amigo, trabalhador, provedor do lar, etc. (Adorno 2003: 17).

En esta misma descripción entrarían manifestaciones como las violencias domésticas, las que se producen en las “*galeras e bailes funks*” —es decir, en las “*barras*” de adolescentes y jóvenes, y en los lugares de baile—, y los enfrentamientos entre “*gangues e quadrilhas*” —bandas y pandillas— rivales (Adorno 2003).

Este análisis parece encontrar confirmación en distintos estudios. Concretamente, por ejemplo, el estudio sobre violencia en Lima financiando por el BID, establece que

[...] en los niveles socioeconómicos más bajos [...] la proporción de población víctima de agresión es ligeramente superior a la correspondiente a los niveles más altos —aunque las diferencias no son significativas—, es más frecuente que las agresiones provengan de personas conocidas. La presencia de grupos como vecinos y amigos entre los agresores, e incluso de familiares, da cuenta de un patrón de violencia donde las agresiones provienen del entorno social de la víctima y no responden a lo que



podría llamarse crimen organizado [...] Además, un alto porcentaje de agresiones proviene de amigos (Eyzaguirre 1998: 15).

En síntesis, los amigos, la pareja y los miembros de la familia tienen el potencial de configurar el comportamiento de un individuo y su gama de experiencias, contribuyendo a formar su personalidad y a reforzar resiliencias o vulnerabilidades con relación a la participación en actos de violencia, sea como víctima o perpetrador. Los factores de riesgo de violencia en adolescentes y jóvenes que han sido encontrados en el nivel de las relaciones dependen, según la edad, de la influencia de la familia y de los compañeros.

3.2.1 Influencia de la familia

Con relación a la familia, el informe de la CEPAL sobre juventud en América Latina, al analizar la información de las encuestas nacionales a jóvenes realizadas en Bolivia, Chile y México, encuentra que

[...] a diferencia de la desconfianza generalizada que los jóvenes manifiestan frente a otras instituciones —y en general, frente al mundo de los adultos— esto no se da en relación con los padres, lo que indica la importancia de estos y de la familia como ámbito de interés y espacio de desarrollo juvenil. Más aún, señala que la familia se mantiene como un entorno afectivo —y modelo de referencia— fundamental para los jóvenes (Hopenhayn y Miranda 2004: 94).

Una relación afectiva cercana entre padres e hijos en contextos comunitarios con altos niveles de violencia y delincuencia es un importante factor protector, como encontraron Vitaro, Brendgen y Tremblay (2000), citado en Llorente, Chaux y Salas (2005) para Estados Unidos: quienes tenían vínculos cercanos con sus padres, no desarrollaron comportamientos violentos cuando tenían amigos vinculados con actividades criminales, mientras que quienes no los tenían, presentaban una mayor propensión hacia la asociación con las pandillas (Llorente, Chaux y Salas 2005). En forma similar, para el caso latinoamericano, Rubio (2003), en sus estudios sobre jóvenes centroamericanos, halló el mismo tipo de evidencia sobre la relación entre la supervisión por parte de los padres y la vinculación de los jóvenes a las maras.

Sin embargo, distintas investigaciones evidencian un contraste entre la valoración que adolescentes y jóvenes hacen de la familia como base de la cobertura afectiva y espacio de confianza y de diálogo, junto con la manifestación de dificultades en la convivencia, que incluyen la comisión de actos violentos mantenidos en secreto o incluso aceptados como “normales”:

Es sabido que la violencia intrafamiliar es un problema social de grandes dimensiones, que tradicionalmente [refiriéndose a América Latina] se ha considerado como algo “privado”, ajeno al debate público, por lo que ha permanecido oculto y escasamente estudiado. Sin embargo, desde fines de los años ochenta se vienen realizando diversos estudios que, frente a la visión idealizada de la familia, han puesto al descubierto “la caja negra” familiar, donde se registran la violencia y los abusos (Hopenhayn y Miranda 2004: 99).

En los casos de la violencia infligida por la pareja y del maltrato de niños, la interacción diaria y la relación continua con un agresor aumentan las oportunidades para que se produzcan actos violentos reiterados. Así, investigaciones mencionadas por Krug et al. (2003: 36-37) han relacionado la exposición a la violencia en el hogar con ser víctima o perpetrador de actos violentos en la adolescencia, incluyendo conducta antisocial o delictiva y comportamiento suicida, independientemente de variables como el sexo, el grupo étnico y la edad. McCord (1979), citado por Krug 2003, encontró que tres variables relacionadas con el ambiente familiar en la niñez —la supervisión de la crianza del niño, el afecto de la madre y la presencia de conflictos entre los padres— tenían valor



predictivo para una cuarta parte de la varianza en condenas por crímenes violentos, una vez eliminadas las variables de condición social (Biehl 2001).

Por otra parte, estudios mencionados por Llorente, Chauv y Salas (2005) sugieren que la reproducción de la violencia intrafamiliar de una generación a otra está influenciada por el tipo de violencia al que se estuvo expuesto en la infancia, encontrando que aquellos individuos que en su niñez estuvieron expuestos a peleas de golpes entre sus padres son más propensos a tener relaciones violentas con sus propias parejas que quienes fueron víctimas de malos tratos por parte de sus padres. El mismo estudio de estos investigadores colombianos parece apuntar en esa dirección: en su investigación sobre historias de vida de adolescentes colombianos que han cometido infracciones graves —lesiones, homicidios y actos delictivos violentos—, una temprana y permanente exposición a la violencia intrafamiliar se correlacionaba con una mayor probabilidad de reproducirla fuera del ámbito doméstico, particularmente en los casos de hombres jóvenes víctimas de maltrato físico severo por parte de padres o padrastros.

Finalmente, hay que anotar que el abuso sexual en la niñez y en la adolescencia —que tiene un sesgo de género desfavorable a las mujeres— se correlaciona con otros tipos de victimización a otras violencias, aumentando hasta el doble el riesgo de sufrir otras violaciones a lo largo de la vida, así como de experimentar problemas sexuales y mentales diversos, y padecer actos de violencia doméstica con la pareja (Tjaden et al. 2000; Fleming et al. 1999; Acierno et al., 1999; Crowell y Burgess, 1996. En Krug et al. 2003). Así, mientras el abuso sexual parece tener mayor impacto sobre problemas como la depresión o la ansiedad, el maltrato físico o la negligencia parecen estar más relacionados con el desarrollo de problemas como la delincuencia y la violencia.

En general, se puede decir que las investigaciones en distintos países confirman la existencia de patrones recurrentes de maltrato en las familias, que refuerzan la idea de una transmisión intergeneracional de la violencia. Así, diferentes estudios realizados con mujeres víctimas de violencia doméstica demuestran la transmisión intergeneracional de la violencia intrafamiliar, consistente con el “ciclo intergeneracional de la violencia doméstica”, según el modelo propuesto por Pollack (2002), en que (1) la probabilidad de que un hombre sea violento con su pareja depende de que haya crecido en un hogar violento, (2) la probabilidad de que una mujer permanezca unida a una pareja violenta depende de que ella haya crecido en un hogar violento, y (3) las personas que crecieron en hogares violentos tienden a unirse con personas que también crecieron en hogares violentos (citado en Llorente, Chauv y Salas 2005).

La estructura familiar es también un factor importante para predecir la violencia posterior en adolescentes y jóvenes. Estudios citados por el Informe mundial sobre violencia y salud —Farrington 1998, Henry 1996 y Wadsworth 1978— indican que los niños de familias monoparentales están expuestos a mayor riesgo de violencia. Otras variables de la estructura familiar que aumentan la probabilidad de violencia posterior son tener muchos hermanos, la maternidad en la adolescencia y la separación de los padres durante los primeros 10 años de vida (Nagin, Pogarsky y Farrington 1997; Brennan, Mednick y John 1989; Morash y Rucker 1989; Wadsworth 1978). Otros modelos teóricos de predicción de la violencia citados por Moreno (1999) identifican como variables claramente asociadas con la violencia conyugal y familiar, el nivel socioeconómico —a menos recursos, más violencia—, el sexo —las mujeres tendían a maximizar la violencia y los varones a minimizarla—, la edad —más violencia en las parejas jóvenes y contra



los hijos más jóvenes— y la experiencia de malos tratos durante la infancia —los más maltratados—.

Indudablemente, muchos de estos factores se vinculan con los efectos de las transformaciones sociales y económicas de las décadas de 1980 y 1990 en América Latina, que aumentaron la pobreza y la precarización de las relaciones laborales, lo cual influyó en la relación entre padres e hijos, y ocasionó nuevos y mayores conflictos intrafamiliares, pues “[...] muchos adultos varones, jefes de familia, se ven confinados en sus hogares con la autoestima trizada y su autoridad familiar cuestionada porque ya no cumplen el rol de proveedores. Como consecuencia, [...] la autoridad familiar será motivo de disputas y manifestaciones” (Hopenhayn y Miranda 2004: 100).³ Otros estudios también resaltan esta relación:

Hombres y mujeres sostienen que antes había más respeto en la familia que hoy, y los hombres sobre todo enfatizaron la pérdida de respeto de los hijos hacia el padre. Esta situación está provocada por la falta de plata y hace que muchos hombres decidan abandonar la familia. Cuando están sin trabajo se ponen agresivos y allí suelen tomar alcohol y golpear (Cichero, Feliú y Mauro 1999: 47).

Estos factores socioeconómicos pueden influir negativamente en los estilos de crianza que los estudios de Wells y Rankin (1998), citados en Krug et al. 2003, identificaron como factores precursores de la violencia cuando se caracterizan por un patrón errático de disciplinamiento —alternadamente liberal y estricto— y actitudes crueles, pasivas o negligentes por parte de los padres. Biehl (2001) confirma como precursores la conducta excesivamente punitiva y la falta de consistencia conductual en los padres. De igual manera, hijos de padres no preparados —como en el caso de padres adolescentes— corren un mayor riesgo de ser víctimas de experiencias perjudiciales para la salud, tales como abuso físico, sexual y mental, privación económica y educativa, y negligencia, sufriendo una mayor probabilidad de ser víctimas de abusos y/o ser más proclives a tener conductas violentas en etapas posteriores de la vida (Cornell 1999).

Muchos de estos factores, conjugados con la falta de apoyo social y las dificultades económicas, pueden afectar el comportamiento emocional y social de los niños: “Las pocas oportunidades de recibir apoyo y probablemente los menores recursos económicos en estas situaciones quizá sean las razones de que a menudo se deteriore la crianza y aumente el riesgo de que los jóvenes incurran en actos de violencia” (Krug et al. 2003: 37). Investigaciones hechas en Lima (Perales y Sogi 1995) y São Paulo (Gianini, Litvoc y Neto 1999), citadas por Krug et al. 2003, han asociado la escolaridad de la madre y la alta densidad habitacional con la violencia juvenil, y el riesgo de ser víctimas de la violencia fue significativamente mayor entre los jóvenes de clase socioeconómica baja por comparación con los de clase alta, concordando con resultados obtenidos en países desarrollados como Estados Unidos, Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia (Krug et al. 2003: 37).

Parece, pues, evidente que el estrato socioeconómico bajo de la familia se asocia con una mayor probabilidad de vinculación en actos de violencia para adolescentes y jóvenes, como víctimas o como perpetradores. Sin embargo, pese a que consistentemente los estudios empíricos han encontrado una correlación entre violencia intrafamiliar y

³ El mismo estudio refiere, para el grupo de mujeres jóvenes, tensiones intergeneracionales que asocian “[...] la problemática de la edad y por otro [...] la realidad que les toca vivir [...] mencionan ‘peleas con los padres por falta de comprensión’, ‘no tenemos descanso, estudiamos y trabajamos los fines de semana’” (Cichero, Feliú y Mauro 1999: 33), lo que sin duda conmociona los roles tradicionales y las diversas expectativas familiares con relación a sus distintos integrantes, aumentando las posibilidades de que se produzcan conflictos.



comportamientos criminales y violentos por fuera del ambiente doméstico, la evidencia sobre esta asociación es menos nítida que la hallada con relación a la reproducción de la violencia intrafamiliar, lo que sugiere que “[...] la relación entre haber sido víctima de violencia intrafamiliar y el desarrollo de comportamientos delictivos y violentos por fuera del ámbito doméstico, no es automática y probablemente existen múltiples factores que median y moderan esta relación” (Llorente, Chaux y Salas 2005: 5).

3.2.2 Influencia del grupo de pares

Las influencias de los compañeros durante la adolescencia se consideran en general positivas e importantes para configurar las relaciones interpersonales, pero también pueden tener efectos negativos. En el caso de la violencia interpersonal entre los jóvenes, las investigaciones revelan que ellos tienen muchas más probabilidades de involucrarse en actos violentos cuando sus amigos promueven y aprueban ese comportamiento. Por ejemplo, tener amigos delincuentes, que porten armas o que consuman drogas se correlaciona positivamente con el comportamiento violento (Krug et al. 2003).⁴

En forma similar, el estudio realizado por Dowdney en 10 países sobre participación de adolescentes en grupos armados organizados —a partir de la sistematización de los resultados y conclusiones de investigaciones nacionales que incluyeron a Brasil (Dowdney 2003), Colombia (Ramírez 2004), El Salvador (Carranza 2004), Ecuador (Loor 2004) y Jamaica (Mogensen 2004)— encontró que, por regla general, “[...] la amistad precede a la pertenencia a una banda [...] La presentación a miembros de los grupos armados por parte de amigos o familiares es un patrón recurrente en todos los países incluidos en este estudio” (Dowdney 2005: 67). Un estudio sobre casi 1.000 adolescentes infractores en Bogotá encontró resultados similares respecto a la iniciación en el manejo de armas de fuego:

[...] otra diferencia importante entre ambos grupos [de control y experimental] respecto del manejo de armas de fuego, tiene que ver con la persona que les enseñó a usarlas. Así se tiene que, mientras casi la mitad (42%) de los controles reportaron haber aprendido con un miembro de su familia (principalmente tíos y primos), menos del 20% de los infractores señalaron haber aprendido a usar armas en especial con el papá y con el hermano. De tal modo la gran mayoría de los infractores manifestó haber aprendido con un amigo del barrio (54%), seguido de un pandillero (16%) (Llorente, Chaux y Salas 2005: 35).

El mismo estudio de Dowdney describe otro tipo de influencia a través de amigos, relacionada con el tiempo que se pasa en las calles de los barrios donde hay una alta exposición a la violencia y presencia de pandillas juveniles. Éstas terminan cumpliendo un rol que el autor denomina en su estudio “familias de sustitución”, ya que las *gangues* (Brasil), *maras* (El Salvador), *bandas* (Colombia), *naciones* (Ecuador) o *corner gangs* (Jamaica), por ejemplo, proporcionan estructuras de apoyo y reglas claras a los niños y adolescentes, reglas que ellos no encuentran en sus hogares:

Los problemas hogareños conducen a menudo a los niños y adolescentes a pasar más tiempo en la calle [...] muchos de los grupos armados investigados tienen allí una presencia fuerte y dominante. Como resultado, las amistades hechas dentro del contexto callejero pueden llegar a ser más influyentes sobre los niños que los miembros de la familia, debido a que los compañeros de igual condición acompañan más que la familia el crecimiento de los niños (Dowdney 2005: 75).

4 La pertenencia subjetiva a un grupo de amigos es una referencia importante para que adolescentes y jóvenes transiten desde la dependencia familiar hacia la autonomía, ampliando sus opciones, experiencias y formas de participación social, cumpliendo funciones que van desde el apoyo afectivo y la evasión hasta la apropiación de roles sexuales, el logro de una identidad socialmente conveniente y el aprendizaje de normas y valores de convivencia. En el caso de adolescentes o jóvenes en situaciones de marginalidad, la fractura en el reconocimiento social y la carencia de un lugar propio y seguro conlleva la búsqueda de una visibilidad más trasgresora o violenta (Krauskopf 2002).



La importancia del grupo de amigos en el comportamiento violento del adolescente es confirmada por numerosos investigadores. Para Krauskopf, una de las más notables especialistas de la región, los comportamientos de riesgo en adolescentes y jóvenes relacionados con su salud —como fumar, manejar carros imprudentemente, beber o vincularse a actividades que pueden ser peligrosas o ilegales— funcionan como ritos de paso generados en la matriz de una subcultura juvenil alrededor de la tribu de amigos, que se potencia cuando los adolescentes no encuentran oportunidades de probar su paso a la adultez, llegando a constituir una socialización alterna y marginal, con frecuencia disruptiva y anómica:

En estas condiciones la juventud se hace vulnerable a la obtención de gratificaciones a través de conductas indiscriminadas —de corto alcance, inmediatas y accesibles— para afirmar su autoestima, buscar sensaciones de éxito en el riesgo mismo, encontrar acompañamiento emocional en actividades peligrosas que no prevén consecuencias, o anesthesiarse (drogas, actividades masivas, respuestas que los aíslan de la realidad) para no sentir la frustración aplastante (Krauskopf 2002: 9).

Otros estudios sobre la participación grupal de adolescentes y jóvenes en actividades violentas ratifican la hipótesis de Krauskopf. Por ejemplo, las riñas en que se involucran adolescentes y jóvenes tienen distintas causas y consecuencias si se producen en solitario o con el grupo de amigos. Son más graves estas últimas, pues tienen una probabilidad más alta de que se usen armas de fuego y se produzcan lesiones físicas de consideración.

Según la investigación de Agnew (1992), tales peleas comienzan como incidentes menores que luego se intensifican, y la involucración de los adolescentes es para “ayudar a los amigos”, no porque personalmente estuvieran enojados. Por otro lado, la Encuesta Nacional de la Juventud efectuada en Estados Unidos corrobora que un móvil importante para desencadenar la violencia en adolescentes o jóvenes es la venganza por ataques anteriores (Krug et al. 2003), y Downey (2005) menciona que el haber presenciado la muerte de amigos o miembros de la familia fue dado como razón por los adolescentes para explicar su participación en grupos armados como una forma de vengarse o de obtener protección.

Sobre el suicidio, sus características específicas otorgan también un rol relevante a las relaciones con los pares y familiares. En un estudio con adolescentes menores de 16 años de edad que habían intentado suicidarse, se encontraron evidencias que sustentaban que este comportamiento estaba vinculado con dificultades en la relación con los padres, problemas con amigos y aislamiento social (Hawton, Fagg y Simkin 1996, citado en Krug et al. 2003). También Maris (1981) encontró que quienes consumaron el suicidio participaban menos en sus comunidades, no tenían amigos y habían sufrido una declinación progresiva de sus relaciones interpersonales que los condujo a un estado de aislamiento social total. Particularmente en el caso de mujeres jóvenes, Wenz (1977), citado en Krug et al. 2003, identificó la anomia —el sentimiento de alienación de la sociedad causado por la percepción de la ausencia de un marco social de apoyo— como un determinante, junto con el aislamiento.

3.3 El nivel de la comunidad

El tercer nivel del modelo ecológico comprende los contextos espaciales y sociales de la comunidad en que se inscriben y desarrollan las relaciones sociales, y busca identificar las características de estos ámbitos que se constituirían en factores que pueden predecir la participación en actos de violencia. Las situaciones y factores de riesgo asociados a la comunidad son comunes a todos o a la mayoría de los entornos en los cuales la



respuesta violenta de o contra adolescentes y jóvenes constituye el comportamiento más probable en razón de la ausencia de factores protectores.

Una investigación que Hein (2005) realizó en el 2003 con 1.500 adolescentes entre 12 y 18 años de escuelas públicas en Santiago mostró que aquellos jóvenes que reportaron conductas de riesgo asociadas con la violencia y la delincuencia —como robar, dañar o destruir propiedad pública o ajena, participar en peleas de pandillas o atacar a alguien para causarle daño, entre otras— tienden a ser frecuentemente victimizados, es decir, a exponerse más o a recibir respuestas agresivas del entorno, lo que reforzaría la hipótesis de que estas conductas de riesgo surgirían especialmente en contextos barriales hostiles y tendrían un sentido de adaptación.

De esta manera,

[...] si un niño está imposibilitado de dar respuestas diferentes a un factor de riesgo en particular, debido al hecho de tener opciones limitadas [...] tiene problemas en su hogar, pero no tiene otros parientes, ni amigos de la familia o maestros de escuela [...] si un niño es atacado o maltratado pero no tiene la posibilidad de dirigirse a la policía u otra institución adulta para pedir protección o justicia, es mucho más probable que responda [con violencia] a ese factor de riesgo uniéndose a un grupo armado que ofrece protección y/o la posibilidad de venganza (Dowdney 2005: 77).

En otras palabras, la fragmentación y la segregación social, así como la ruptura de la estructura familiar, contribuyen a la generación de las pandillas y a la inserción de los jóvenes en ellas, “ya que los pandilleros son personas que no contaron con los recursos ni las atenciones sociales necesarias para que sus vidas se orientaran por las vías productivas y de desarrollo para ellos mismos y para su comunidad” (Wielandt 2005: 26).

3.3.1 Influencia del vecindario

Se ha observado que los eventos de violencia no son aleatorios, y su dinámica puede depender del punto de partida y de la historia previa de las comunidades donde acontecen. El vecindario, como comunidad, es una variable que se correlaciona con la exposición al riesgo de adolescentes y jóvenes; el ser víctimas o perpetradores de actos violentos, así como el cometer delitos, puede ser consecuencia de un ambiente social de aceptación de la violencia (Krauskopf 2002, McAlister 2000).

Las recurrentes manifestaciones de violencia en un vecindario se transforman a medida que aumenta su frecuencia, produciendo cambios en su intensidad y modalidad. Así, de una violencia más espontánea y expresiva se pasa a una más instrumental y organizada, en la que se mejora la disponibilidad y letalidad de las armas utilizadas. Por ejemplo, un alto índice de crimen en la vecindad puede generar en sí más violencia, especialmente entre niños y adolescentes, ante su mayor exposición a la influencia de modelos en el proceso de aprendizaje social: “Un aumento en el crimen violento disminuye las inhibiciones contra la conducta violenta, tanto a través del efecto de la demostración [como de] la erosión de las normas sociales y de la cohesión de la comunidad que regula las relaciones interpersonales” (Buvinic, Morrison y Shifter 1999: 18).⁵

Factores del vecindario que contribuyen a un aumento en la probabilidad de violencia interpersonal son aquellos que debilitan la cohesión social y reducen la participación

5 Esta hipótesis se basa en la teoría sociocognitiva de Bandura. Según este psicólogo, los niños aprenden y evalúan sus destrezas sociales observando e interactuando con familiares, amigos adultos, profesores, otros niños de su edad, y, en general, con personas de su entorno, incluyendo los modelos de conducta que observan en los medios de comunicación (cfr. Thornton et al. 2000, McAlister 2000).



social, como la frecuente movilidad residencial de sus habitantes y su heterogeneidad de orígenes. Por otro lado, la capacidad de respuesta a una violencia creciente por parte de las instituciones públicas es casi siempre lenta, cuando no negativa. Significa que en las primeras fases del “contagio” de un vecindario por la violencia, la eficacia operativa del aparato policial tiende a disminuir. Finalmente, la percepción de los problemas por parte de los propios habitantes del vecindario siempre está rezagada con relación a la intensidad de su ocurrencia, y la propensión a la denuncia disminuye ante un incremento de la violencia. Evidentemente, esta propensión disminuye todavía más si existe un historial de desconfianza hacia la autoridad pública y la participación comunitaria es débil.

En el caso de adolescentes y jóvenes, la superposición de los factores de riesgo mencionados en el vecindario, junto con otros que en su conjunto actúan como detonantes situacionales —alta tasa de expansión de la población infanto-juvenil, altos niveles de desempleo en adultos, carencia o deficiencia de las infraestructuras comunitarias e inexistencia de espacios de encuentro público y comunitario,⁶ ausencia de instituciones de protección social del Estado, disponibilidad de armas de fuego y de sustancias psicoactivas, presencia de pandillas juveniles ligadas al narcotráfico—, se relacionan con tasas superiores al promedio en los homicidios, lesiones y delitos en este grupo, así como con prácticas violentas no delictivas, como agresiones verbales y amenazas, incluidos altos niveles de hostigamiento sexual hacia las mujeres —especialmente adolescentes y jóvenes— en escenarios de carácter público abierto como calles, aceras, plazas, parques, canchas, etcétera (Cruz 2004, Krug et al. 2003, Biehl 2001, Weaver y Maddaleno 1999, Minayo y Souza 1997).⁷ De esta manera, se produce

6 Como factores característicos de la infraestructura de barrios reportados con altas tasas de homicidios y lesiones, un estudio reciente en San Salvador destaca “[...] el mal estado de calles y aceras de vías principales y secundarias, así como la mala iluminación, la falta de estacionamientos, la ausencia o mala señalización vial y en el caso de asentamientos precarios, el deficiente sistema de drenajes que puede ser causante de inundaciones [...] [hallando vínculos con] prácticas culturales como el irrespeto a las señales de tránsito, la alta velocidad a la cual se conduce o la apropiación de espacios públicos para usos individuales, las cuales son percibidas como amenazas por los transeúntes o habitantes de una localidad (Baires et al. 2005).

7 Testimonios recogidos en los estudios sobre pobreza en América Latina sirven para ilustrar la forma en que son sentidas estas variables por los pobladores pobres de las barriadas de varias ciudades latinoamericanas:

En el Perú (Blackburn 1999: 28):

“La inseguridad física fue mencionada repetidamente como parte del sufrimiento del pobre [...] En el área urbana, los robos de casa [...] y los asaltos callejeros [en los cuales la violencia es común], así como la violación de jóvenes que dejan sus casas, y otros crímenes cometidos por pandillas o bandas organizadas son —según los entrevistados— parte de la vida de todos los días, sobre todo en Lima. ‘Aquí no hay buena luz en las calles en la noche, y no puedes caminar porque te atacan’ (mujer joven de Laderas del Chillón) [...] Las organizaciones barriales son más débiles que sus equivalentes en el área rural”.

En Bolivia (GNT-NUR 1999):

“La seguridad personal en la ciudad tiene que ver con la delincuencia y la violencia, en el área rural con el peligro de enfermedades graves. Para todos la inseguridad es un factor paralelo a una mala calidad de vida [que] se vincula a los derechos de las personas: derecho a la propiedad, a la seguridad personal, al trabajo, a organizarse, etc. [...] Otro tema importante mencionado de varias maneras y desde diferentes ópticas es el de la seguridad/inseguridad [...] la delincuencia, que además se considera creciente en las ciudades más grandes; los robos son el delito más mencionado, aunque también se habla de pandillas juveniles” (14); “Los temores de los [pobres] urbanos se centran en el aumento de la violencia, aunque el empleo también es una preocupación grande” (23).

En la Argentina (Cichero, Feliú y Mauro 1999):

“Las diferencias respecto a la mayor inseguridad [...] se extienden también a nivel comunitario. Y los barrios más carenciados por no tener recursos materiales para enfrentar la inseguridad, ni apoyo de los gobiernos o instituciones” (26); “La violencia, incluso la física, se presenta en forma más remarcada en el ámbito comunitario en el tema de robo, asalto y violaciones, situaciones donde existen probabilidades de asesinato” (27); “La violencia, en todas su formas, si bien es mencionada, se percibe como fenómeno de la pobreza urbana y no rural” (29); “La violencia es muy fuerte, uno tiene miedo de salir de la casa a cualquier hora’. ‘Por cualquier cosa te hieren o te matan’. La inseguridad, al igual que la [deficiente] infraestructura comunitaria, resultó mencionada por todos los grupos, hombres y mujeres de distintas edades” (35); “La violencia comunitaria está asociada a la ciudad, con zonas urbanas, ‘nosotros somos los de la isla [zona rural], tenemos menos problemas, somos pobres pero felices” (46).

En el Ecuador (Martínez 1999: 26):

“Debido tal vez a la dinámica de los barrios marginales, las mujeres dicen que siempre han participado activamente en la vida barrial [...] Son las mujeres quienes al parecer han tomado las riendas para demandar por el agua, el alcantarillado,



una importante consecuencia social, producto de la fusión entre desigualdad y segregación, que enlaza los peores indicadores socioeconómicos con servicios sociales ineficientes, cuyos efectos tienen relación directa con una mayor vulnerabilidad de los adolescentes y jóvenes frente a la violencia.

Para el caso de Colombia, al examinarse las características de los barrios donde se criaron y vivían adolescentes infractores violentos y no infractores, se indagó por las formas de desorden social, como riñas callejeras, presencia de borrachos en las calles, vandalismo y uso de drogas ilícitas en el espacio público, y presencia de habitantes de la calle. También se consideraron las condiciones de seguridad en el barrio; cuál era la percepción de seguridad; si se escuchaban disparos o había asesinatos, atracos callejeros y robos a establecimientos comerciales y casas; y presencia de actores armados, como grupos de limpieza y pandillas. Se halló que

[...] aunque los dos grupos tuvieron un entorno barrial con características similares, se presentaron algunas diferencias en la percepción de los entrevistados acerca de lo que sucedía a diario en su vecindario [...] Los resultados de las pruebas de diferencias en las medias muestran que existen diferencias estadísticamente diferentes de cero en todas las variables consideradas dentro de los factores de desorden social. Así, los infractores percibieron mayores problemas en el barrio donde crecieron en cuanto al uso de drogas ilegales en las calles, a la presencia de borrachos y de indigentes en las calles, al vandalismo y a las riñas callejeras, que lo que hicieron los del grupo control (Llorente, Chau y Salas 2005: 37-39).

Parece aplicarse aquí la teoría de las “ventanas rotas” de Wilson, que relaciona un entorno de deterioro de la infraestructura barrial —edificios abandonados, calles oscuras y sucias, etcétera— y social —peleas callejeras, habitantes de la calle, prostitutas, pandillas— con el desarrollo de la violencia y la delincuencia en adolescentes. No obstante, esta relación de causalidad es falsa, en la medida en que ambas variables tienen una misma causa en las condiciones de pobreza y el grado de control que la comunidad ejerce sobre los comportamientos de sus miembros. Por ejemplo, la investigación realizada en São Paulo por Da Gama confirma que los barrios marginales y periféricos son de una gran diversidad, lo que no autoriza la imagen generalmente proporcionada por la literatura especializada y los medios de comunicación, que homogeneiza los vecindarios pobres como violentos.

Esto conlleva importantes consecuencias en la definición de políticas de prevención de la violencia, que cuando no se apoyan en una correcta ponderación de los factores y variables sobre las que deben intervenir pueden contribuir a aumentar la segregación de los vecindarios pobres y reforzar factores de riesgo que incrementan la probabilidad de la ocurrencia de actos violentos. Lo anterior demanda, sin duda, un esfuerzo adicional importante para identificar, antes que barrios enteros,

los servicios de salud: ‘Aquí decidimos más las mujeres porque somos las que más participamos’. En general se puede observar que las organizaciones barriales siguen funcionando para demandar servicios y mejoras y estas son principalmente movilizadas por las mujeres. El combate contra la delincuencia ha sido también una preocupación de las mujeres [...] Por el contrario en los hombres [...] se puede observar que están cada vez más desvinculados del trabajo comunitario: ‘Jugar el fútbol’, ‘conversar con los amigos’, ‘salir a tomar’ son actividades que se describieron como comunitarias”.

En Brasil (Melo 2000):

“A centralidade da questão da violência e da segurança pública [se encontrou] em todas as comunidades consultadas [...] Uma mulher idosa da Vila União declarou que ‘o quadro de violência atualmente piorou muito [...] algumas brigas que poderiam ser resolvidas, terminam hoje em mortes...’ Um grupo de mulheres relaciona os homicídios a falta de emprego e, ao mesmo tempo, as ocupações informais com uma renda satisfatória. O depoimento a seguir, de uma jovem mulher, sintetiza o argumento: ‘aumentou a violência. Hoje por qualquer coisinha se mata, qualquer rabo de olho é uma morte. Isso acontece porque não tem emprego e nem ocupação que dê renda’ (7) No Morro da Conceição, os jovens afirmaram que a falta de segurança foi ‘o principal problema da comunidade’: [...] ‘a gente não podia sair daqui pra ali, que era assaltado; dia de sábado e domingo se saísse para um aniversário, para uma festinha, e se quisesse voltar mais tarde era assaltado..., você ficava arriscado a morrer’” (36).



espaços da periferia, [donde] há uma intensa concentração de indicadores negativos, que sugerem a existência de pontos críticos com condições sociais precárias. Todos esses dados indicam que a distribuição de grupos sociais na metrópole é muito mais complexa e heterogênea do que parece (Da Gama et al. 2003: 117).

3.3.2 Integración y capital social

El grado de integración y los niveles de capital social dentro de una comunidad afectan las tasas de violencia juvenil. El capital social es un concepto que valora la integración de las comunidades y se refiere a las reglas, normas, obligaciones, reciprocidades y confianzas que existen entre las relaciones interpersonales y hacia las instituciones sociales y políticas.⁸ Al mismo tiempo, uno de los factores que determinan el desarrollo social y humano de una sociedad es la forma en que ésta integra el potencial de las nuevas generaciones, facilitando a los y las jóvenes —que constituyen un reservorio, y a la vez un determinante, para mantener y acrecentar el capital social— las alternativas y libertades para elegir, construir y realizar planes de vida.

La violencia es un factor disolvente del capital social, como consecuencia del aislamiento al que se someten las víctimas, convirtiéndose en una pauta de relacionamiento basada en el “[...] miedo generalizado, dando lugar también a una ausencia fundamental de normas de cooperación y comunicación, lo que a su vez destruye el capital social” (Buvinic, Morrison y Shifter 1999: 13).

En algunos sitios se percibe tensión entre los vecinos: “Lo increíble es que ya nos robamos entre los vecinos. Un día entran a tu casa [y] te sacan todo y al otro día pasan por la calle y te saludan, como si nada hubiera pasado” [...] Perciben un clima de violencia permanente dentro de sus comunidades y fuera de ella, provocando una situación de temor “hasta de salir de la casa” (Cichero, Feliú y Mauro 2000: 60).

La violencia en las comunidades no sólo restringe la movilidad física en la localidad particular, sino que afecta la prestación de servicios sociales, destruye la propiedad privada y pública, y reduce la inversión, disminuyendo de este modo las oportunidades laborales y educacionales. Esto afecta directamente el capital social —mayor desconfianza resultante de la destrucción de la infraestructura, las instalaciones de esparcimiento y las oportunidades de educación—, aumentando las probabilidades de comportamiento violento, especialmente entre los jóvenes (Moser y Holland 1997 en Krug et al. 2003; Moser y Shraeder 1999).

En la población adolescente y juvenil que habita las barriadas populares de las ciudades latinoamericanas y del Caribe, la violencia actúa simultáneamente como causa y consecuencia de la precariedad socioeconómica en que viven los jóvenes:

Un informe reciente de Colombia indica que el 25 por ciento de los colombianos que trabajaban de noche habían dejado sus trabajos como consecuencia de la violencia y el 14 por ciento de los estudiantes nocturnos habían abandonado sus estudios por la misma razón. Las maestras que se ven amenazadas por las pandillas de varones jóvenes a menudo faltan al trabajo. Las escuelas en los vecindarios azotadas por la violencia de las pandillas cierran temprano cuando los niveles de tensión son altos, de forma tal que los niños no se vean atrapados en un tiroteo. Además, la violencia deteriora a la mano de obra como activo cuando reduce el acceso a los empleos [...] Los residentes de ciertas comunidades violentas vieron una relación causal entre la discriminación que experimentaban en las entrevistas de trabajo, que llevó a una falta de empleo, frustración y, en algunas instancias, a guerra de pandillas [...] cuando los políticos controlan los contratos de trabajo y resultan peleas por los empleos escasos (Moser y Shraeder 1999: 10).

⁸ Siendo relativamente novedoso en las ciencias sociales el concepto “capital social”, se debe considerar que es el resultado de la integración de categorías anteriores, establecidas fundamentalmente por la sociología y la antropología, que integra en su definición elementos que contribuyen a valorar un mayor o menor capital social en las comunidades, que básicamente se entendería como el análisis de la solidaridad y reciprocidad comunitaria, de las estructuras y redes sociales, de las instituciones y de las motivaciones —racionales— de las decisiones individuales (Durstun 2000).



Parece evidente la relación entre violencia y capital social, aunque no sea posible establecer la causalidad entre una y otro, es decir, si los bajos niveles de capital social causan la violencia o es la violencia la que destruye el capital social. A partir de un índice para medir el capital social basado en una encuesta de salud mental realizada en más de 50.000 hogares por el Ministerio de Salud de Colombia —que incluía variables relativas a la cohesión familiar, la confianza en los amigos y vecinos, la voluntad de ayuda en caso de robo, y la propensión al trabajo comunitario—, Rubio (1996) concluye que el capital social presenta una asociación simple, clara y negativa con la tasa de homicidios, que se mantiene aun cuando se controle estadísticamente el efecto de otras variables. Por otro lado, Wilkinson, Kawachi y Kennedy (1998, en Krug et al. 2003) apuntaron que los bajos índices de capital social que reflejan la escasa cohesión social y altos grados de desconfianza interpersonal e institucional estaban vinculados con tasas más altas de homicidios y mayor desigualdad económica, antes que con bajos ingresos y pobreza.

El capital social progresa con los logros escolares. La tesis de movilización cognoscitiva propuesta por Sudarsky en su estudio sobre capital social en Colombia concluye que es el “currículum latente, es decir, el que se imprime por la asistencia misma a la escuela el que hace la mayoría de la diferencia” (Sudarsky 1998: 36) en el capital social de las comunidades. Este hallazgo es particularmente relevante tanto para apoyar la idea de que los jóvenes pueden contribuir a generar mayor capital social por tener más años de educación como la importancia de la asistencia de los jóvenes a la escuela.

En apoyo a esta idea, el estudio de Ayres (1998, en Krug et al. 2003) muestra que los jóvenes que viven en lugares que carecen de capital social tienden a mostrar un rendimiento escolar deficiente y son mayores las probabilidades de que abandonen por completo la escuela. Esto se relaciona con los resultados del estudio de Rubio (1996) ya mencionado, que encontró en los factores asociados con la delincuencia juvenil una relación inversa entre ingresos familiares, frecuencia de arrestos de jóvenes y abandono del sistema escolar. Así mismo, la Encuesta Caribeña de Salud mostró que los adolescentes que tenían problemas de aprendizaje en la escuela estaban más propensos a pelear con armas y a tratar de suicidarse (Weaver y Maddaleno 1999).

Lo anterior respalda los vínculos entre la escuela y la contención de la violencia en adolescentes y jóvenes. Sin embargo, los sistemas públicos de enseñanza en América Latina —sobrecargados de responsabilidades y afectados por las exigencias de la modernización, con dificultades objetivas de cumplir la adaptación forzosa y forzada de las reformas impuestas por las agencias multilaterales— reaccionan favoreciendo la aplicación defensiva de los sistemas pedagógicos, y la estigmatización y descalificación de las actitudes y razonamientos juveniles. De esta manera se refuerzan las tendencias de la escuela como mecanismo de acreditación, control y segregación, y no tanto como promotora de la movilidad social y de la innovación, la integración social y la autoestima, llevando a que se ignoren los problemas sentidos por los jóvenes en relación con los proyectos educativos, “poniendo a una amplia población juvenil en riesgo de ser eliminada del sistema educativo por dificultades de aprendizaje, por problemas de indisciplina, ausentismo, bajo rendimiento y sanciones” (Krauskopf 2002: 14).

Finalmente, no pueden desconocerse los efectos perversos de la apertura económica y la liberalización de la economía con relación a la educación y sus efectos en el capital social. Según Green, Dickerson y Arbache (2001), “os salários crescem com a educação, mas é notável que para cada grupo de renda média o salário declinou entre 1981 e



1999. O declínio do salário foi menor entre os trabalhadores analfabetos e maior entre aqueles com níveis intermediários de educação completa” (en Camarano 2001: 33).

El efecto disolvente sobre el capital social de estos resultados es impactante, pues frustra las expectativas de los adolescentes de mejorar sus condiciones de vida obteniendo mejores niveles de escolaridad que sus padres. Y no sólo esto: el desempleo prolongado o la sobrevivencia en el mercado informal de trabajo de los adultos les hace perder legitimidad como modelos del futuro, mostrando a los jóvenes qué poco sentido tiene someterse a las reglas y normas sociales.

3.4 El nivel social

El cuarto y último nivel del modelo ecológico atiende los factores sociales más generales que determinan las tasas de violencia. Se incluyen aquí los factores que generan la tolerancia de la violencia como medio para la gestión de los conflictos sociales, reducen las inhibiciones contra ésta, y reproducen o conservan las estructuras de dominación entre segmentos de la sociedad, grupos sociales y países.

Los factores que forman parte de este nivel no constituyen causas directas de la violencia en adolescentes y jóvenes —como prueban los estudios transversales o ecológicos que se han realizado— pero son útiles para identificar asociaciones importantes. Por ejemplo, es un dato que la liberalización de las economías latinoamericanas en las décadas de 1980 y 1990 ha acentuado las polarizaciones sociales y sus efectos, con una desigualdad que se expande más aceleradamente y en mayor magnitud que en cualquier otra parte del mundo, así como pronunciadas desigualdades en el acceso a la tierra y otros bienes de capital, en la posibilidad de obtener créditos y en el campo educativo. Como es notorio, la convivencia de privaciones agudas por la pobreza combinada con amplias brechas sociales crea un clima social de alta conflictividad potencial.

3.4.1 Cambios demográficos y sociales

Algunas investigaciones asocian los cambios demográficos y sus efectos con un aumento de la violencia juvenil, debido a la combinación entre crecimiento de la población por efecto de la emigración, los procesos rápidos y desordenados de urbanización, y la carencia o ineficiencia de las políticas sociales (Ortega 1992, en Krug et al. 2003). También las crisis económicas y los ajustes estructurales e institucionales de las economías ocasionan bajas en los salarios reales, aumento en la concentración de los ingresos y de la propiedad, desempleo y desprotección de los trabajadores, y deterioros en la inversión pública y en la calidad y cobertura de los servicios sociales; todo esto se relaciona con el incremento en las tasas de violencia en adolescentes y jóvenes (Schneidman M. 1996; Lauras y López 1992, en Krug et al. 2003).

Estudios sobre la violencia juvenil a partir del análisis de los datos censales en los barrios con tasas más altas de homicidios corroboran una estrecha relación entre cambios demográficos y cambios sociales, que permiten afirmar que “[Donde] As taxas de homicídio são maiores [...] ocorre uma superposição de carências, combinada com grande concentração de população jovem, aquele grupo da população que, em geral, é mais vulnerável a se envolver em situações de violência” (Cardia, Adorno y Poletto 2003). El estudio sobre pobreza en Brasil, por ejemplo, encontró convergencias significativas entre los temas que más preocupan a las comunidades pobres:



O desemprego foi apontado como o principal problema que afeta as comunidades. A falta de moradia digna e a falta de saneamento foram também citados como problemas urgentes, juntamente com a precariedade de serviços referentes a atenção à saúde. O terceiro bloco de problemas refere-se à segurança pública, polícia e drogas. Estes itens foram discutidos separadamente entre os grupos consultados. Se fossem enquadrados em uma só categoria, teriam sido, provavelmente, o problema mais citado ao lado da violência (Melo 2000: 40).

Da Gama et al. (2003) encontró que las tasas más altas de homicidios en adolescentes y jóvenes en los 24 distritos del municipio de São Paulo coincidieron con distritos donde confluían los siguientes indicadores sociales:

- Tasas de crecimiento poblacional y concentración de niños y jóvenes entre 0 y 19 años superiores a la media de la ciudad.
- Concentración de la mayor parte de la población con menores ingresos, como asalariados de baja calificación, trabajadores informales y desempleados.
- Concentración de la mayor cantidad de hogares con jefatura femenina.
- Concentración del mayor número de jefes de familia con baja escolaridad.
- Condiciones de salud y de vivienda más precarias que en el promedio de la ciudad.

¿Cómo convergen estas carencias con situaciones de violencia? Una población de adolescentes y jóvenes que crece rápidamente implica una mayor presión por servicios sociales en general —especialmente escuelas, trabajo y transporte público, sin hablar de cultura, deportes y recreación—, la que no es atendida por el sector público por carencia de recursos, ni por el sector privado, que no percibe capacidad local para pagar por los servicios que eventualmente podría prestar.

Estas carencias afectan la sociabilidad juvenil y generan dificultades para que los jóvenes conformen familias estables y autónomamente establecidas, lo que implica —en la mayoría de los casos— cohabitar con sus núcleos familiares de origen, aumentando la densidad por vivienda y favoreciendo las tensiones familiares:

A falta de espaço físico, acompanhada da falta de privacidade, em um contexto de desemprego ou de instabilidade (e portanto imprevisibilidade) de rendimento, pode gerar muita disputa familiar. Isto ocorre particularmente quando esta falta de espaço também se dá nos espaços externos à moradia (Cardia, Adorno y Poletto 2003: 4).

Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos y organizacionales que se han dado en el sector productivo han contribuido a una expansión del empleo y de los ingresos en un grupo muy reducido de los asalariados. Esto ha ampliado la brecha en el grupo de trabajadores con distintos niveles educativos y ha reforzado la segmentación estructural del mercado laboral entre núcleos formales o modernos, con buenas condiciones de trabajo, y otros de baja productividad, con condiciones precarias, principalmente en lo que se refiere a la estabilidad laboral, los niveles de remuneración y productividad, las posibilidades de capacitación y actualización, la duración de los períodos de desempleo, la rotación de oficios y empleadores, la cobertura de la seguridad social, el ambiente de trabajo y la existencia de contratos de trabajo (Klinsberg 1999).

El incremento del número de jefes de familia sin ingresos fijos es resultado no sólo del desempleo sino también del crecimiento del mercado de trabajo en forma desorganizada, es decir, informal, irregular y no previsible. A su vez, esto es producto de la reestructuración de la economía, que eliminó varias ocupaciones —incluso las menos especializadas, que servían de puerta de entrada a los jóvenes con bajas calificaciones—, generando en el mercado de trabajo modificaciones dramáticas que tienen impacto sobre la violencia:



Se no passado a população parecia 'se virar' melhor [arreglarse] frente ao problema de moradia, não podemos ignorar em que medida a existência de um mercado de trabalho formal, que dava acesso aos direitos trabalhistas desempenhava, tanto no acesso à moradia e à saúde, quanto no pensar o futuro (uma aposentadoria por exemplo) e até na redução de violência potencial (Cardia, Adorno y Poletto 2003: 2).

Al mismo tiempo, el trabajo menos calificado no sólo aumenta la pobreza, sino que hace caer las ofertas de empleo y disminuir los salarios medios, dada la mayor oferta de fuerza de trabajo poco calificada y el incremento del número de trabajadores empleados a tiempo parcial. Los jóvenes suelen ser los más afectados por este proceso, en tanto estructuralmente concentran los contingentes más amplios de desempleados y de participación en el mercado informal de trabajo: cuando aumenta la privación económica, crece la violencia, no sólo por la pérdida del trabajo en sí, sino porque "afeta a estructura social das comunidades: os adultos perdem o emprego e a autoridade sobre os mais jovens, não dispondo de meios para convencê-los de que é possível aspirarem por uma mobilidade social ascendente" (Camerano et al. 2001: 36).

La situación termina por generar una fractura en el capital social que transmiten las familias, y que tiene tanta importancia como la educación en el destino laboral de los jóvenes, produciendo un "circulo virtuoso para los jóvenes que provienen de hogares con jefes de familia empleados, de buen nivel de ingresos y capacitados; versus un circulo vicioso para los jóvenes de hogares con jefes desempleados, de bajo nivel de ingresos y bajo nivel educativo" (Barrionuevo s/f: 4).⁹

3.4.2 Desigualdad de ingresos y pobreza

Distintas investigaciones han revelado del entorno macroeconómico y social sobre la violencia en adolescentes y jóvenes, a través de las interrelaciones entre crecimiento económico, desigualdad de ingresos y violencia criminal (Fajnzylber, Lederman y Loayza 1999; Unnithan y Whitt 1992; Gartner 1990; Messner 1988. En Krug et al. 2003. Blau y Blau 1992. En Buvinic, Morrison y Shifter 1999. FEDESARROLLO 1996. Zhang 1994. En Barrionuevo, s/f). Así, se encontró que la desigualdad de ingresos favorecía el incremento de las tasas de homicidios, mientras el crecimiento del PIB coincidía con reducciones en éstas. También que el efecto positivo del crecimiento era neutralizado cuando se daba junto con aumentos en la concentración de ingresos, y por lo tanto, incremento de la desigualdad. Otros estudios, realizados en el Perú y Colombia, representativamente, no han encontrado evidencias significativas que autoricen establecer una relación entre pobreza y violencia ni entre pobreza y homicidios (FEDESARROLLO 1996, Reyna y Toche 1999).

Al parecer, también la desigualdad juega un papel importante en la distribución de los impactos de la violencia, que serían más negativos para los segmentos más pobres de la población. Para el caso de Colombia, Rubio afirma que aunque en algunas oportunidades la proporción de víctimas de la violencia en los estratos socioeconómicos altos sea mayor, las pérdidas estimadas —las transferencias redistributivas de la violencia— son mayores aun en términos absolutos para los estratos de menores ingresos, lo que origina una causalidad por mucho tiempo ignorada entre la pobreza y la violencia: "Por la incapacidad

⁹ Investigaciones con jóvenes africanos y asiáticos (Dignen 1998, UNICEF 1997, Rarrbo 1995, OMS 1995, Lauras y López 1992, Diallo 1992) confirman los vínculos entre "el rápido crecimiento demográfico y la urbanización acelerada [que] crearon desempleo y condiciones habitacionales de extrema precariedad, que a su vez condujeron a la frustración extrema, la ira y la acumulación de tensiones entre los jóvenes. Como resultado, era más probable que los jóvenes cometieran delitos menores y actos de violencia, en particular bajo la influencia de los compañeros" (Krug et al. 2003: 40).



económica para suplir privadamente las deficiencias en los servicios públicos de seguridad y justicia, los hogares de bajos ingresos serían más sensibles a las consecuencias de la violencia que aquellos de los estratos altos” (Rubio 1998: 21).

Se puede concluir que la violencia estaría más en función de la desigualdad de ingresos que de la proporción de personas pobres en las comunidades, si bien en el caso de la pobreza

[...] aumentan las nociones de deprivación y frustración, lo que puede constituir fuertes antecedentes de comportamiento violento [...] En el caso de la violencia social, la pobreza puede gatillar la violencia, especialmente cuando se asocia con una pronunciada desigualdad de ingresos, una alta tasa de desempleo y un nivel bajo de educación entre los jóvenes (Buvinic, Morrison y Shifter 1999: 17).

3.4.3 Desarrollo institucional y protección social

El *Informe mundial sobre violencia y salud* menciona como factores que inciden en la probabilidad de emergencia de actos violentos, las “normas culturales que apoyan la violencia como una manera aceptable de resolver conflictos [...]; normas que refuerzan el dominio masculino sobre las mujeres y los niños; normas que respaldan el uso de la fuerza excesiva policial contra los ciudadanos; normas que apoyan los conflictos políticos” (Krug et al. 2003: 14-15).

Estas normas están relacionadas —en forma más amplia— con el desarrollo institucional de las sociedades latinoamericanas, es decir, con el grado de suficiencia del sistema jurídico-institucional para que la sociedad resuelva sus problemas colectivos de modo que se garantice el crecimiento económico y social sostenible, las libertades básicas, la vigencia del Estado de Derecho y el aseguramiento de los derechos humanos. La dimensión institucional de la gobernabilidad, en cuanto marco jurídico y políticas de protección social, es un factor que determina en alto grado la probabilidad de una mayor o menor violencia; en particular el grado en que una sociedad hace cumplir las leyes existentes sobre la violencia al detener y encausar a los delincuentes, puede actuar como factor disuasivo contra la violencia, como demuestra el estudio de Fajnzylber, Lederman y Loayza (1999, citado en Krug et al. 2003), quienes encontraron que el ejercicio del buen gobierno puede tener repercusiones sobre la violencia, en particular la que afecta a los adolescentes y jóvenes (Krug et al. 2003).

Se puede juzgar, entonces, lo que sucede en aquellos casos en los que el Estado juega un papel directo o indirecto de apoyo a las actividades de los grupos armados ilegales. Según Dowdney (2005), quien estudió la participación de adolescentes y jóvenes en grupos armados ilegales en diez países —incluyendo Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador y Jamaica—, en todos los casos había instituciones estatales y/o políticos involucrados con los grupos ilegales, desde el trabajo de las bandas que actuaban en colaboración con la policía y los políticos —para fraudes electorales, venta de votos y asesinatos políticos— hasta la venta directa de armas, los sobornos, la extorsión y la reventa de drogas incautadas.

Así, mientras en Brasil, “[...] a polícia foi considerada como a pior das instituições, e aquela que mais urgentemente precisa melhorar” (Melo 2000: 26), el estudio sobre pobreza en Buenos Aires menciona que para los pobladores de los barrios estudiados “[...] los ladrones están protegidos por la policía, no los persigue, salen enseguida de la cárcel, etc.; los delincuentes tienen que pagar a la policía para trabajar. Muchas veces la falta de seguridad no es solo respecto de los delincuentes sino también de la policía, ‘No



solo no nos cuida, sino que te persigue y te maltrata... y a los que roban no” (Cichero, Feliú y Mauro 1999: 26).

La insatisfacción con la policía, el sistema judicial y las cárceles aumenta el empleo de modalidades ilegales de justicia, tanto en la comunidad como en la propia policía. En Medellín, un estudio completo de la Corporación Región (1997) mostraba tal proliferación de bandas y milicias populares, que cada barrio pobre de la ciudad parecía contar con su propio grupo de jóvenes armados, quienes cumplían toda una gama de funciones, desde la vigilancia hasta labores comunitarias y de representación política para el acceso a recursos públicos, pasando por la administración de justicia y la ejecución de penas y sanciones. Un denominador común en todas ellas era una total desconfianza hacia los organismos de seguridad y de justicia del Estado. En barrios populares de Lima, “Debido a la poca presencia —y poca efectividad— de la policía, los vecinos de los barrios estudiados suelen apoyar a sus pandillas para protegerse de otras que vienen de otros barrios” (Blackburn 1999: 57).¹⁰

Encuestas hechas en varias ciudades de América Latina muestran que el apoyo dado a la “limpieza social” está directamente relacionado con la desconfianza que se tiene en la policía y el sistema judicial (Piquet et al. 1997. En McAlister 2000). Minayo y Souza (1999) encontraron que la policía figuraba entre los principales grupos perpetradores de violencia contra los jóvenes, en especial tratándose de las clases socioeconómicas más bajas y de los negros; su actuación incluía formas como la violencia física, el abuso sexual, la violación y el cohecho. Otros estudios, con diferente metodología y en otros contextos, confirman sus hallazgos. Las entrevistas a pobladores de sectores urbanos marginados en Lima mencionan que

“La policía se excede y golpea por igual a pandilleros y a muchachos que se reúnen sanamente a conversar”. La consecuente pérdida de legitimidad de la policía en el barrio ha generado ocasiones en que los pandilleros “los agarraron [a los patrulleros] a pedradas”, incluso haciéndolos retroceder, y esto con el apoyo de gran parte de la población (Blackburn 1999: 56),

Y en el estudio sobre pobreza urbana en Brasil, los jóvenes enfatizan estas percepciones negativas aún con más contundencia:

“[...] eles chegam junto e mandam a gente levantar os braços e abrir as pernas, só que já vai dando porrada nas tuas pernas. Depois chama de vagabundo e pede os documentos e nem sequer olham directo”. Eles acrescentaram que as agressões policiais não aconteciam tão freqüentemente no passado [...]” (Melo 2002: 36).

Igualmente, Sanjuán (1998) señaló que la emergencia de culturas de la violencia entre los jóvenes marginados de Caracas se relacionaba fuertemente con la percepción de que la justicia dependía de la clase socioeconómica. Confirmando lo anterior, en Buenos Aires los habitantes de un barrio marginal, hablando de la inseguridad, refieren que “[...]”

¹⁰ Cuando los grupos armados ilegales que garantizan la seguridad se multiplican al punto de que su territorio de dominio se reduce a un mínimo —por ejemplo al barrio— la situación a la que se llega es que la seguridad es, precisamente, el principal factor de violencia en esos barrios, en especial si hay influencia del narcotráfico y aceptación comunitaria de la fórmula “cuidar una zona y delinquir en otra”, como sucede en las ciudades colombianas. El efecto de una situación con tales características no puede ser sino el de una competencia despiadada entre los distintos grupos, que literalmente eliminan a los más pequeños para crear, cada vez, unidades más amplias de dominio territorial basado en un creciente poderío militar, político y financiero. Pareciera que la situación actual de Medellín es, en buena parte, una “pacificación” de esta clase, en que la actual reducción de las tasas de homicidio representa la connivencia del poder público con las organizaciones paramilitares vencedoras, reformulando la famosa definición weberiana del “monopolio” estatal de la violencia, compartido con el paraestado, que emerge victorioso de una prolongada y compleja guerra de pandillas. Obviamente, las implicaciones son nefastas en tres dimensiones: gobernabilidad, buen gobierno y desarrollo institucional; capital social y democracia; y economía y desarrollo social.



los sectores ricos [pagan] servicios privados de seguridad o incluso a la misma policía para que les preste un mejor servicio [...]” (Cichero, Feliú y Mauro 1999: 26). No es de extrañar, pues, que en el estudio sobre pobreza en América Latina se compruebe que, a pesar de la baja confianza que las comunidades depositan en la policía y la justicia, consideran que es la institución más necesaria actualmente en los barrios pobres.

Sin embargo, la desconfianza respecto a la policía permea todas las clases sociales, pues este distanciamiento también se observa en los estratos socioeconómicos altos, aunque prevalecen las mismas diferencias de género, etnia y edad halladas en los barrios populares. Según una investigación comparativa acerca de las percepciones sobre la policía en Belo Horizonte,

...mulheres acima de 50 anos, homens adultos com emprego, casados e pais de família, a presença da polícia na comunidade representa segurança contra pessoas que são ameaça constante à tranqüilidade do bairro —viciados em drogas, traficantes, bandidos, homicidas— que, pelo poder da arma e da ostentação do “estilo de vida fácil” [...] corrompendo crianças e adolescentes para a entrada no mundo do crime e tráfico, ou diminuindo suas chances de sobrevivência [...] Para outros indivíduos (considerados alvo privilegiado da atenção policial, geralmente adolescentes, desempregados, homens com algum envolvimento anterior com a polícia, suspeitos ou com passagem pela polícia) os policiais não são bem vistos na comunidade, sendo identificados como aqueles que tiram a paz das pessoas (Souza 2002: 39-40).

La protección social es otro aspecto importante en el buen gobierno, e incide indirectamente —pero de manera relevante— en la probabilidad de padecer o perpetrar actos de violencia en la adolescencia y la juventud, a través de la vulnerabilidad de esta población —es decir, las desventajas cuantitativas o cualitativas de los activos o recursos que disponen las personas, las familias y las comunidades para aprovechar oportunidades de integración y movilidad social o contrarrestar riesgos de exclusión y empobrecimiento—. En esta perspectiva, los servicios que conforman la protección social del Estado “serían un subconjunto de los activos circulantes [...] inmerso a su vez en condicionantes o determinantes estructurales dados por las características del momento económico, social, demográfico y político” (Arriagada 2001: 3). En cambio, la desconfianza social y la precaria relación entre jóvenes y gobiernos municipales se acentúa cuando el único contacto de la comunidad con las autoridades es a través de los cuerpos policiales y militares: “Esto se ve fortalecido porque la debilidad del Estado se expresa en que muy rara vez éste se acerca a la comunidad a través de unidades preventivas y dedicadas a la familia y a la juventud” (Wielandt 2005: 26).

El acceso, la calidad y la equidad de la distribución de los activos dependen inmediatamente de las políticas públicas y de los niveles de gasto social público que definen la correlación de fuerzas políticas, y ellos explican los niveles de bienestar social en cada país y las diferencias en el desarrollo entre países. Con relación a los adolescentes y jóvenes latinoamericanos, el tipo de activos que más resienten su aprovechamiento de oportunidades son la educación y la vivienda, y en menor grado la salud. Todos ellos tienen incidencia como factores sociales cuyo déficit incrementa el riesgo de violencia en adolescentes y jóvenes.

Existe acuerdo general en que los problemas de cobertura y calidad que afectan el sistema educativo tienen como raíz la inequidad, ya sea con relación a variables intraescolares —diferencias sociales de acceso, infraestructura, recursos disponibles para el aprendizaje y logro de resultados— y/o extraescolares —edad de ingreso al sistema, bajo clima educacional de los hogares de jóvenes de menores recursos, y segregación social a través de la escuela—, así como con condiciones de vida previas al ingreso al sistema escolar (Reimers 2000). En la educación,



Los jóvenes de hogares pobres en su mayoría no acceden a este nivel [ciclo secundario de educación] [...] los problemas de retención que afectan a este ciclo pueden ser puestos de manifiesto a través del porcentaje de jóvenes de 13 a 17 años que no estudia, ni trabaja [...] esta situación compromete a cantidades importantes de jóvenes [...] y se conforma un fenómeno mayor a la pobreza, constituido por jóvenes que no trabajan ni estudian y eventos de embarazo adolescente que motivan la interrupción del ciclo (Arriagada 2001: 15-17).

Estudios de Moser (1998), citados en Arriagada 2001, demuestran que la carencia de activo habitacional está relacionada con el ciclo de vida de los hogares, de manera que en ausencia de planes habitacionales especiales, los hogares en formación o crecimiento —formados por jóvenes— son el grupo más afectado por el déficit habitacional; carecen, así, de uno de los activos más necesarios por su funcionalidad para el manejo de riesgos y el aprovechamiento de oportunidades.

Si se consideran las características irregulares de los asentamientos urbanos marginados, así como las deficiencias de los servicios públicos en estos barrios —que son las únicas viviendas a las que pueden acceder los jóvenes—, se deduce la exposición a la pérdida de capital social y a las posibilidades de valorización y circulación de los activos físicos para los jóvenes pobres. Lo anterior, sumado a las inequidades en la educación, hace evidente una combinación de vulnerabilidades en los jóvenes que afecta negativamente la generación de ingresos y la acumulación de recursos, lo que a su vez repercute sobre la vulnerabilidad de los hijos de estos nuevos hogares (Arriagada 2001).

Así, los estudios en América Latina señalan que los mayores niveles de gasto público social coinciden, comparativamente, con mejores indicadores de crecimiento económico, pobreza, urbanización y avance en la transición demográfica: “Los países de menor GSpc [gasto social público], en su mayoría, corresponden a las situaciones de mayor rezago social, estando afectados tanto por menor oferta de servicios sociales, como por factores más adversos al desarrollo” (Arriagada 2001: 6).

En consecuencia, la inversión pública —como proporción del PIB en áreas asociadas a la protección social y la seguridad económica de grupos poblacionales vulnerables a situaciones de competencia abierta en el mercado de trabajo y de activos, proporcionando bienes y recursos sin costo o a precios subsidiados— ha sido asociada con tasas de homicidios comparativamente más bajas, especialmente en las franjas etarias de adolescentes y jóvenes, como concluyen los estudios de Briggs y Cutright (1994), Pampel y Gartner (1995) y Messner y Rosenfeld (1997) (en Krug et al. 2003).

3.4.4 Influencias culturales

La cultura, como conjunto de costumbres, normas y valores que conforman una sociedad, contribuye a determinar las probables respuestas que pueden tener las personas a situaciones cambiantes en el entorno. Los factores de tipo cultural pueden afectar los índices de actos de violencia en una sociedad, por ejemplo, favoreciendo y reforzando su utilización como procedimiento “natural” para resolver conflictos, o confirmando la violencia como práctica normal para afirmar la dominación sobre grupos considerados de estatus inferior, como las mujeres o los hijos. Así, las culturas y sociedades que no logran proporcionar y reconocer opciones no violentas para resolver los conflictos parecen tener tasas mayores de violencia juvenil.

Es un hecho que muchas sociedades aceptan el castigo corporal de los niños, inculcando la idea de una pretendida efectividad de la violencia en la disciplina. Igualmente, los estereotipos de género refuerzan la noción del “derecho” del marido a controlar el



comportamiento de su pareja, y este control se ejerce a través del uso de la violencia doméstica, física o psicológica. En las comunidades, la participación en las organizaciones comunitarias y de autoayuda es importante para la cohesión de los pobladores y el desarrollo de su identidad y sentido de pertenencia, e incide, así, en los niveles de exposición a la violencia.

La influencia de la cultura es también relevante en la efectividad de los programas de prevención e intervención de la violencia. Así, a pesar de la existencia de instituciones y de marcos legales, el factor cultural muchas veces impide que se cumplan sus metas y propósitos. De esta manera, a pesar de la presencia de comisarías y juzgados especiales establecidos para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia, la asimetría en las relaciones de género ocasiona una ambigüedad notable entre una mayor conciencia de los derechos de las mujeres y la continuidad de la violencia masculina en las relaciones interpersonales, como se infiere del testimonio cínico de un hombre joven en el estudio de pobreza en Brasil: “Antigamente a mulher apanhava sentada; hoje ela levanta para apanhar de pé” (Melo 2000: 80).¹¹

Las condiciones de pobreza y desigualdad en la región pueden convertirse en un factor que contribuya aún más seriamente a la violencia social y doméstica, al interactuar con representaciones de roles sociales, generando un entramado de vacíos, riesgos, desconciertos e incongruencias que es necesario reconocer en la socialización juvenil, aunque aquí el género desempeña un papel diferenciador importante. Así, las percepciones sobre los efectos del desempleo en la familia y la violencia en jóvenes, son diferentes: “Para los hombres, la falta de trabajo da como resultado el ocio y la frustración, lo que da como resultado la violencia de las pandillas. Para las mujeres, el desempleo conduce a la dependencia económica de los hombres, y de allí al abuso” (Moser y Shrader 1999: 10-11). Martínez menciona específicamente una relación “[...] entre el control y manejo del dinero y la masculinidad [...] El problema de la falta de dinero si bien afecta a la economía de la familia incide directamente en la representación del ser hombre” (Martínez 1999: 93), apareciendo el acto violento como una forma de afirmar una representación social caduca que ya no dispone de otros medios simbólicos para expresarse.

Otro factor que influye sobre los valores culturales es el efecto de una prolongada violencia social. Sociedades que han pasado por períodos recientes de conflicto armado o continúan sumergidas en éste —como El Salvador, Guatemala y Colombia— son más vulnerables a la violencia, ya que la guerra prolongada atenúa las inhibiciones contra el uso de la violencia, aumenta las expectativas de ganancias y beneficios por la participación en actos violentos, afecta el desempeño institucional de los sistemas policiales y judiciales, así como compromete la efectividad de los medios no violentos —formales e informales— para tramitar conflictos. En estos países, la violencia posconflicto ha asumido como rasgo la constitución de grupos violentos caracterizados por la participación de adolescentes y jóvenes organizados en forma de pandillas. La sobreposición de carencias económicas y culturales, sumada al desarraigo causado por los desplazamientos de las guerras y la vivencia cotidiana de la violencia —particularmente ligada al delito y fundamentalmente

¹¹ Las intervenciones legislativas realizadas en muchos países han conseguido ampliar la definición de violación y reformar los procedimientos para dictar sentencias y admitir pruebas. Aún así, como se evidencia en el estudio de Du Mont y Myhr TL (2000), las evaluaciones comprometen sus resultados, ya que los fiscales generalmente pasan por alto estas normatividades recientes, especialmente en lo que se refiere a la flexibilización del requisito de corroboración de la víctimas y la omisión de las pruebas forenses, que inhiben las denuncias de las mujeres, particularmente cuando son más jóvenes (Krug et al. 2003).



al narcotráfico—, se conjuga con la precariedad de los vínculos sociales y coadyuva al deterioro de las inhibiciones de la conducta violenta.

Por otro lado, las normas sociales sobre el uso de la violencia como medio para lograr un objetivo han sido asociadas estrechamente con la prevalencia de la violación sexual y la violencia doméstica contra las mujeres.¹² Como muestra Ramos (1998) para los países centroamericanos, las sociedades que se encuentran inmersas en conflictos sociales violentos y en las que la ideología de la superioridad masculina está más arraigada presentan una tendencia al aumento de las distintas formas de violencia, entre ellas la sexual. El estudio de la CEPAL sobre juventud parece confirmar este hecho, al relacionar las altas tasas de homicidios de mujeres jóvenes en El Salvador y Nicaragua con el efecto y la diseminación de la cultura machista y su acentuada violencia contra las mujeres (Hopenhagen y Miranda 2004). Por otra parte, uno de los rasgos que diferencian de manera significativa a las culturas en las que no se maltrata a la mujer es que los hombres resuelven sus conflictos con otros hombres de manera no violenta, en contraposición con la evidencia de que los hombres que maltratan a sus parejas son más propensos a involucrarse en riñas y disputas violentas fuera del hogar, como se probó en tres ciudades colombianas (Llorente, Chaux y Salas 2005).

En el caso de la violencia juvenil, Bedoya y Jaramillo (1991) —respecto a Medellín, Colombia— se refieren a la difusión de una cultura de la violencia, en la que los adolescentes son influenciados por un entorno que acepta y promueve el rápido y fácil enriquecimiento a través de cualquier medio; de esta manera, las brechas entre las expectativas de consumo simbólico a través de la oferta de prestigio y reconocimiento social que otorga la posesión y el uso de un consumo material vedado a la mayoría, junto con la difusión de formas ilícitas de obtención de recursos monetarios y la mala distribución de la riqueza, nutre, en las periferias urbanas de la región, una subcultura juvenil en la cual la violencia es parte de la convivencia. Salazar va a popularizar la idea de una “cultura de la muerte” entre algunos jóvenes de sectores populares en Medellín, Bogotá y Caracas, en la que se reducen las distancias entre el vivir y el morir, constituyéndose la violencia en una respuesta a la falta de esperanzas en la vida. Para este autor, “Son los jóvenes destruyendo su propio entorno, su propia generación y los referentes de su identidad perdida” (Salazar 1996:13).

En los comportamientos de estos adolescentes y jóvenes han tenido una gran influencia los medios de comunicación, que difunden modelos, representaciones, normas y valores que, con frecuencia, refuerzan el uso de la violencia. Al mismo tiempo, hay una clara sobreexposición de los niños y adolescentes a la televisión y el cine, así como a formas más actuales, como los videojuegos e Internet. Varios estudios han revelado la asociación entre la introducción de la televisión con los aumentos en la escala de actos violentos. Aunque la evidencia es discutible y no se ha comprobado su influencia en el largo plazo, la exposición a la violencia mostrada en la televisión aumenta las probabilidades de comportamientos agresivos inmediatos, según Huesmann y Eron (1986). Además, al difundir los patrones de consumo de los ricos, los medios acentúan el sentido de carencia en los pobres, y los predisponen a un justo sentimiento vindicativo (Krug et al. 2003).

12 En muchos casos de conflicto armado, la violación sexual —mayormente ejercida contra mujeres, aunque también contra hombres— se usa como un arma de guerra, habiéndose comprobado que las más afectadas eran mujeres menores de 25 años de edad, cuyo número cuadruplica el de las mujeres víctimas mayores de esa edad (Swiss 1998. En Krug et al. 2003).



3.5 Conclusiones

La existencia de factores de riesgo en los diferentes niveles del modelo ecológico no implica una falta de interacción entre éstos. En el nivel individual, las anomalías biológicas y fisiológicas, junto con la vivencia de abuso físico en la infancia y adolescencia, crean una predisposición para el comportamiento violento. Familias y vecindarios con bajos niveles de ingreso pueden agravar tal predisposición individual a la violencia y las probabilidades de victimización, ante el incremento de la frustración y la ansiedad. Las desigualdades sociales y el estancamiento económico generan situaciones que disparan los actos violentos. A su vez, la violencia retroalimenta culturas permisivas y más tolerantes con los abusos o los delitos, fomentando una suerte de “capital social perverso” (Rubio 1996).

Entre los diferentes niveles del modelo ecológico se establecerían, de esta manera, *circuitos de riesgo* (Weinstein 1992) en los que el joven que ha ingresado a uno de ellos añadiría vulnerabilidades de distinto origen que aumentarían su exposición a los factores de riesgo asociados con la violencia, los que hemos enumerado en forma sucinta, priorizando aquellos para los que hay evidencia en estudios e investigaciones de la región.

En el análisis desarrollado, se ha intentado demostrar que la violencia en adolescentes y jóvenes forma parte de un complejo problema que envuelve diferentes grados de generalidad y especificidad, diversos niveles de factores e intereses sociales diversos. En conclusión, actualmente los adolescentes y jóvenes constituyen la población más vulnerable a los procesos de una modernización que ha supuesto un mayor riesgo “estructural” de fractura social, en términos de Beck (1998), que aumenta las probabilidades de que ellos se involucren como víctimas o perpetradores de actos violentos.

El hecho de que en las comunidades más afectadas por la violencia en adolescentes y jóvenes exista una percepción de impotencia ante el fenómeno —expresada como “[...] a maioria dos problemas podem vir a melhorar no futuro com exceção da violência, drogas e desemprego [...] justamente os problemas que os indivíduos consideram não ter capacidade de interferir na sua resolução” (Melo 2000: 42) — avala la idea de que, si bien los adolescentes y jóvenes constituyen el grupo primario en el cual se debe intervenir, los adultos que interactúan con ellos, así como el círculo de personas que afectan e influyen sobre sus vidas, deben convertirse en un grupo importante que hay que considerar en el momento de planificar las intervenciones de prevención y tratamiento. Esto incluye al gobierno, a las comunidades a las que pertenecen los jóvenes, a las organizaciones afines con su situación, a las familias, a los amigos, a los maestros y profesores, a los trabajadores sociales, a los políticos y a los empresarios, entre otros.

4. Intervenciones de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes



4

Intervenciones de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes

4.1 Las resistencias contra la prevención

A la vista de la naturaleza multicausal y polimórfica de la violencia en los adolescentes y jóvenes, así como del impacto de las dimensiones cualitativas y cuantitativas que tiene ésta sobre la sociedad, parece inevitable suscribir tres grandes conclusiones:

- La necesidad de enfrentar los problemas de salud en la adolescencia y la juventud —y entre ellos, el de la violencia— en el marco institucional y con el enfoque de prevención, dado que el perfil de morbilidad de este grupo está asociado a conductas de riesgo.
- La importancia que tiene la prevención de la violencia juvenil para la convivencia ciudadana y el desarrollo social de la región, lo que implica sostener una visión más amplia de los enfoques y las acciones de su tratamiento en un marco prioritariamente jurídico y policial.
- Las intervenciones en este terreno deben estar fundamentadas en enfoques multidisciplinarios, partiendo de la participación coordinada y activa de todos los sectores afectados e interesados.

Por otra parte, es importante destacar las numerosas evidencias científicas sobre el carácter fundamentalmente aprendido de la violencia —bien sea a través del abuso físico o la exposición a la violencia doméstica o de la comunidad durante la infancia, la influencia de los medios de comunicación, la presencia de determinados valores culturales y las desigualdades socioeconómicas—, que en presencia de determinados factores situacionales o estructurales —como la existencia de armas de fuego en el vecindario o una recesión en la economía nacional— explicarían la decisión individual de enfrentar violentamente los conflictos que emergen de la convivencia social o la vulnerabilidad para convertirse en víctima de la violencia.

Así, en la literatura especializada pueden reconocerse tres derivaciones básicas de la violencia como conducta aprendida:

- El carácter histórico-social de la violencia, como resultado de respuestas socialmente aprendidas en determinadas circunstancias que abarcan los diferentes niveles del modelo ecológico de la violencia.
- La posibilidad de prevenir el comportamiento violento de las personas, sea mediante el aprendizaje de nuevos repertorios de conductas o eliminando los factores ambientales —situacionales o estructurales— que “causan” la violencia.



- La eficacia o ineficacia de las intervenciones para prevenir la violencia, de lo que se desprende la necesidad de aprender sobre lo que se hace para prevenir la violencia con el fin de mejorarlo.

Tomando en cuenta todo esto, la OMS ha recomendado privilegiar las inversiones en la prevención antes que en el tratamiento y/o rehabilitación de las consecuencias de la violencia. Considerando los costos económicos de ésta, es posible afirmar que inversiones modestas en la prevención pueden producir beneficios mucho más importantes y duraderos que los tratamientos de rehabilitación de las víctimas o que la implementación de medidas represivas. Sin embargo, como lo señalan estudios y especialistas, lo cierto es que los programas de prevención y rehabilitación todavía son limitados, no disponen del financiamiento que requieren o simplemente no existen.

Para Dowdney, se trata de una combinación entre el enfoque y la metodología de los programas de prevención con la dinámica institucional del Estado, es decir, de implementaciones a largo plazo y resultados de difícil cuantificación. Esto va contra la urgencia de los gobiernos, que por encontrarse durante poco tiempo en el poder, por lo general están poco interesados en implementar programas con efectos de largo plazo, con efectividad fuera de su período en el poder, y más bien optan por “las tácticas policiales [que] tienen un impacto más inmediato y cuantificable: es fácil y eficaz mostrar a los votantes que hay más policías en las calles, más detenciones y más penas de prisión” (Dowdney 2005: 129). Sin embargo,

Los resultados de este modelo de acción, de alto contenido represivo y escaso contenido preventivo, no han sido positivos. No se ha logrado disminuir la criminalidad —de hecho, la tasa de homicidios ha crecido en la región— ni la creciente sensación de inseguridad en la población de las principales ciudades. Los sistemas judiciales y los cuerpos policiales no gozan de la confianza de la población, incluso en algunos casos se percibe a estos últimos como una amenaza para la comunidad (Arriagada y Godoy 1999).

Hein (2003) expone, para el caso de Chile —pero podemos considerarlo común al resto de la región—, una serie de desconocimientos, prejuicios o “mitos” sobre la prevención de la violencia, que hipotecan desfavorablemente las decisiones a favor de este enfoque. El primero de ellos es el desconocimiento general acerca de las inversiones en control y represión comparadas con la inversión en prevención. Siendo las primeras más fáciles de identificar y cuantificar, Hein plantea —basándose en un cálculo intencionadamente conservador— que los costos de la represión y el control de la violencia en Chile son, por lo menos, siete u ocho veces mayores que los gastos en prevención en el presupuesto nacional.

Existe también el prejuicio —muy extendido entre sectores sociales “progresistas”— que hace de la política social y el entorno “macro” la única prevención posible de la violencia en la sociedad. Al respecto, Hein (2005) cita los estudios de Rutter y Smith (1995), que registran el aumento constante en las tasas de homicidios y lesiones en Europa entre 1950 y 1970, durante el período de consolidación y máximo desarrollo del *welfare state*, con un crecimiento económico sostenido y niveles cercanos al pleno empleo. Por otro lado, el estudio de Rosof, Pontell y Tillman (1998) —también citado por Hein— estimó que, en Estados Unidos, los costos para delitos no violentos son 50 veces superiores que los destinados a delitos con violencia, los que se asocian mayormente a problemas sociales de desempleo o abandono escolar en la adolescencia y la juventud. Concluye Hein que aunque sea innegable relacionar las políticas de prevención con las políticas sociales, no toda política social puede ser considerada como preventiva, pues significaría criminalizar sus verdaderos objetivos y estigmatizar a buena parte de sus beneficiarios.



Finalmente, Hein sostiene —en este punto, contra lo afirmado por Dowdney— que la complejidad de las estrategias de prevención, sus altos costos y el largo plazo que lleva alcanzar sus metas constituyen un mito. Para probarlo, menciona intervenciones exitosas evaluadas en países desarrollados, no superiores a dos años de implementación, y que, con buenos sistemas de monitoreo, comienzan a evidenciar resultados antes de que finalice su implementación.

La teoría del *path* institucional de North (Rubio 1998) podría contribuir a explicar esta paradoja. Según North, si el *phatos* es predominantemente violento, las instituciones reproducen esa violencia —por ejemplo, un grupo mafioso— y, a su vez, se refuerza el poder y el “éxito” de estas instituciones. En esta dinámica social, las lógicas distintas, como las de la prevención, encontrarán resistencias e intereses de tipo tanto cultural —respecto a los valores y costumbres— como político.

De igual manera, no se puede desconocer la funcionalidad de la violencia —convertida en un asunto delictivo y de la “naturaleza” humana— para el sistema: no sólo, como con exactitud decía Marx (1984 [1848]), produce profesores de criminología, libros, facultades universitarias, estudios policiales, y su correspondiente industria de uniformes y armamentos, sistemas y aparatos de seguridad, sino que vende periódicos, películas y noticieros, a la vez que ofrece una táctica de primer orden para fines políticos de dominación, puesto que aglutina consensos, estimula la agresividad colectiva, legitima autoritarismos y niega derechos, distrae la atención sobre otros problemas, hace del miedo un programa electoral, etcétera (Taylor, Walton y Young 1980).¹

Se puede concluir que a pesar del escepticismo acerca de los resultados de la prevención ante el hecho real de que el problema de la violencia en adolescentes y jóvenes depende, en última instancia, de factores estructurales socioeconómicos de muy compleja remoción, es precisamente tal tarea la que necesita —como precondition, y para ser acometida en un marco democrático y de derecho— una sustantiva reducción de los actuales niveles de violencia en la sociedad.

Siguiendo este orden de ideas, no solamente no sería despreciable la contribución humanitaria a que haya familias más integradas, comunidades más protectoras y ciudades más seguras, sino que la actuación preventiva en los niveles inferiores del modelo ecológico de la violencia constituiría un paso indispensable para crear condiciones favorables al surgimiento y la consolidación de fuerzas políticas capaces de eliminar las causas más estructurales y determinantes de la violencia. Poner este conocimiento en práctica es una meta central del enfoque de la salud pública en la violencia juvenil.

4.2 ¿Qué se sabe sobre la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes?

Cabe anotar que la existencia de visiones y actitudes pesimistas sobre la prevención no se debe solamente a factores políticos, económicos y culturales, sino también a que las estrategias de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes han carecido, generalmente, de planteamientos basados en evidencia objetiva y científica, y se han apoyado más en preconcepciones ideológicas sobre lo que “debería funcionar”. De hecho, la falta de resultados en la aplicación de estrategias fallidas, o bien la dificultad

¹ A manera de ejemplo, como plantea Carranza (2004) para el caso salvadoreño, el tema de las maras fue central en las pasadas elecciones de Honduras, que reeditaron su habitual manipulación como propaganda política en las elecciones centroamericanas. Pareciera que el candidato que se muestra más contundente en prometer liberar a la sociedad de esta violencia tiene asegurada su elección.



para demostrar las relaciones entre la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes y las intervenciones diseñadas y controladas, han conducido a la cínica opinión de que “nada sirve” (Cornell 1999).

De hecho, el *Informe mundial* de la OMS presenta unas lecciones aprendidas a partir de la sistematización de experiencias de prevención, evaluaciones y estudios científicos:

- La inversión “aguas arriba” produce resultados “aguas abajo” —la importancia de la prevención primaria sobre los otros tipos de prevención y tratamiento de la violencia—.²
- Es necesario comprender el contexto y su influencia sobre el comportamiento violento, tanto en sus factores de riesgo como en sus factores protectores.
- Hay que aprovechar los vínculos entre los distintos tipos y niveles de violencia para diseñar intervenciones coordinadas y de mayor impacto sinérgico.
- Es preciso identificar a los grupos vulnerables y las diferentes situaciones que enfrentan, para desarrollar intervenciones pertinentes basadas en esas situaciones y que toman en cuenta las características de esos grupos.
- Hay que combatir las ideas que desestiman el problema de la violencia como algo que es inevitable y siempre existirá en la sociedad, razón por la cual no vale la pena preocuparse por la supresión de los factores que la producen.
- Se debe comprometer a quienes toman las decisiones en el nivel político y no sólo trabajar con los actores presentes en los ámbitos micro o meso del problema.

Más específicamente, diferentes autores han elaborado y compilado resultados de estudios e investigaciones para demostrar la existencia de una sustancial y creciente evidencia científica acerca de intervenciones eficaces y eficientes en la reducción de la violencia en varias de sus formas, incluida la que se presenta en adolescentes y jóvenes, y si bien la mayoría ha sido producida en los países más desarrollados, no sólo algunas de éstas también se han realizado en los otros países, sino que hay conclusiones y aprendizajes que pueden ser aplicables en distintos contextos.³

Con el fin de disponer de la información general recogida a partir de los diferentes estudios y evaluaciones internacionales sobre estrategias que han dado resultado en la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, aprovecharemos la clasificación que presenta la OMS en el primer Informe mundial sobre la violencia y la salud, que tiene la ventaja de basarse en los niveles del modelo ecológico de la violencia, ya expuesto.⁴ Así, pueden encontrarse estrategias para los niveles individuales, relacionales,

2 “Las intervenciones de salud pública se clasifican tradicionalmente en tres niveles de prevención:

- Prevención primaria: intervenciones dirigidas a prevenir la violencia antes de que ocurra.
- Prevención secundaria: medidas centradas en las respuestas más inmediatas a la violencia, como la atención pre-hospitalaria, los servicios de urgencia o el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual después de una violación.
- Prevención terciaria: intervenciones centradas en la atención a largo plazo con posterioridad a los actos violentos, como la rehabilitación y reintegración, e intentos por reducir los traumas o la discapacidad de larga duración asociada con la violencia.

Estos tres niveles de prevención se definen por sus características temporales; es decir, si tienen lugar antes de que se produzca el acto violento, inmediatamente después o a un plazo más largo” (Krug et al. 2003: 15).

3 En el informe hemos utilizado las sistematizaciones y estados del arte sobre prevención de la violencia de Sherman et al. (1997), Cornell (1999), Thornton et al., (2000), McAlister (2000) y Mihalic et al. (2001), así como en los artículos de Weaver y Maddaleno (1999) y Biehl (2001), además del *Informe mundial sobre salud y violencia* de la OMS.

4 La anterior clasificación de estrategias de prevención por niveles del modelo ecológico de la violencia puede “cruzarse” con la propuesta por McAlister (2000), que identifica cuatro grandes enfoques para clasificar las estrategias de prevención, según se dirijan a intervenciones sobre los factores ambientales (del 1 al 3) o a la modificación de los comportamientos y actitudes de los individuos (4):



comunitarios y sociales.⁵ Para el estudio, nos interesan especialmente las intervenciones con la familia —en el nivel de las relaciones— y las estrategias del nivel comunitario, por lo que pondremos énfasis particular en éstas.⁶ Sin embargo, considerando la trama de factores —tanto de riesgo como protectores— que inciden en la etiología de la violencia en adolescentes y jóvenes, atenderemos también, aunque más superficialmente, los otros niveles del modelo ecológico.

4.2.1 Estrategias en el nivel individual

Están centradas generalmente en aumentar la influencia de los factores protectores asociados con las aptitudes, las actitudes y las creencias individuales.

En términos de efectividad, los diversos estudios y evaluaciones señalan la ventaja de iniciar acciones desde la edad preescolar y escolar primaria. Así, el refuerzo preescolar fomenta “desde el principio en los niños pequeños el desarrollo de las aptitudes necesarias para mejorar el éxito escolar, y por consiguiente aumentan la probabilidad de obtener resultados académicos exitosos en el futuro”, lo que incrementa su rendimiento escolar y su autoestima (Blueprints 2001, Kellermann et al. 1998).

Las intervenciones centradas en generar aptitudes y competencias sociales parecen ser muy efectivas en la prevención de la violencia juvenil. Nos referimos especialmente a aquellas dirigidas a preadolescentes y adolescentes en ámbitos escolares (programas *school-based*), que se orientan a mejorar la interacción con los compañeros y por lo general se concentran en el desarrollo de competencias sociales, la promoción de actitudes amistosas y cooperativas, así como la vigilancia y reducción de los comportamientos intimidatorios entre compañeros (Blueprints 2001, McAlister 2000, Guerra y Williams 1996, Tolan y Guerra 1994, Richards y Dodge 1982). También parecen resultar más eficaces cuando se aplican a los niños de los centros preescolares y escuelas primarias, en lugar de a los estudiantes de colegios secundarios.

Hay intervenciones que parecen efectivas, aunque requieren todavía un mayor acopio de datos experimentales para comprobar su efecto de reducción sobre el comportamiento violento en la adolescencia y la juventud: prevención del embarazo no deseado en la adolescencia, mejoramiento del acceso a programas de atención prenatal y posnatal, programas de refuerzo académico, incentivos para adolescentes y jóvenes en alto riesgo

- 1) La reducción de la disponibilidad de armas de fuego y de otros instrumentos para respuestas excesivamente violentas (nivel comunitario y social).
- 2) La disminución de los niveles de intensidad o de exposición a situaciones que generan los conflictos que devienen en violencia (nivel comunitario y social).
- 3) La transformación de las consecuencias del comportamiento violento y las del comportamiento no violento, de forma que en el primer caso sean negativas, y positivas en el segundo (nivel comunitario y social).
- 4) El aprendizaje para modificar procesos psicosociales, especialmente en actitudes y habilidades de comunicación (nivel individual y de relaciones).

Según el autor, “Las tres primeras opciones requieren políticas o programas para cambiar restricciones y oportunidades en el entorno en el que se desarrolla el comportamiento. La cuarta requiere sólo comunicación en forma de campañas educativas y persuasivas para padres, colegios y comunidades” (McAlister 2000: 35).

5 Acerca de la efectividad de las intervenciones preventivas, nos acogeremos principalmente a los estudios que cita el *Informe mundial sobre violencia y salud* de Krug et al. 2003, destacándolos en letra cursiva. También, considerando la importancia del estudio, nos apoyaremos en las *Guías para la prevención de la violencia* de la Universidad de Colorado —las *Violence Prevention Blueprints*—, para cuya elaboración se revisaron las evaluaciones de más de 500 programas de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, seleccionando prácticas que cumplieran con tres criterios de alta efectividad: logro de un efecto disuasivo en la violencia, efectos sostenidos en el tiempo y posibilidad de replicabilidad. Las diferenciaremos con la palabra *Blueprints*, cuya fuente es Mihalic et al. 2001. Otras fuentes distintas de las dos anteriores se escribirán sin cursiva.

6 Cuando se haga referencia a las experiencias seleccionadas y sistematizadas, se pondrá entre paréntesis el número que les corresponde en el anexo, para facilitar la consulta del lector.



de violencia para que permanezcan en la institución escolar, y entrenamiento vocacional para jóvenes (Kellermann et al. 1998; Williams, Guerra y Elliot 1997).

Finalmente, intervenciones que no parecen ser efectivas en la reducción de la violencia juvenil, o incluso la aumentan, son: la orientación individual, el adiestramiento en el manejo seguro de armas de fuego, la combinación con programas de libertad asistida que incluyen reuniones periódicas con presos para describir la crueldad de la cárcel, la disminución de la edad de imputabilidad para delincuentes juveniles, los programas de internación en instituciones psiquiátricas o correccionales, los programas de campamentos militares y programas que proporcionan información sobre el abuso de las drogas o de alcohol (U. S. Department of Health and Human Services 2001, Weaver y Maddaleno 1999).

4.2.2 Estrategias en el nivel de las relaciones

Otro grupo de intervenciones tiene como estrategia influir sobre las relaciones habituales de adolescentes y jóvenes en su familia y con sus amigos, tratando de actuar sobre los factores de riesgo asociados con los conflictos familiares, las presiones sociales del grupo de amigos y la ausencia de modelos adultos positivos para los adolescentes.

Se ha encontrado que los programas de visitas domiciliarias a las familias en riesgo durante el período de la primera infancia —entre 0 y 3 años de edad— producen considerables efectos a largo plazo para reducir la violencia en adolescentes y jóvenes. Además, parece ser que los beneficios son mayores cuanto antes se inicien las visitas y éstas se prolonguen por más tiempo. El objetivo es proporcionar, a través de personal especializado, capacitación, apoyo y orientación, así como monitorear y derivar a organismos externos para dar asistencia a madres con bajos ingresos, a familias que esperan a su primer hijo y a familias en las que los niños tienen mayores riesgos de sufrir maltratos (Thornton et al. 2000 Kellermann et al. 1998). Juega aquí un papel importante la calidad de la intervención: muchos padres de familia pueden requerir asistencia especial, particularmente cuando son muy jóvenes y primerizos. Al respecto, no se observó esta estrategia de intervención temprana en las distintas experiencias seleccionadas para la sistematización, por lo menos no en relación con objetivos de prevención de la violencia, aunque es sabido que diversas instituciones lo hacen desde el ámbito de la salud sexual.

Igualmente, son efectivas las intervenciones que mejoran los conocimientos y las habilidades en las técnicas de crianza de hijos adolescentes y jóvenes, y trabajan sobre las relaciones familiares, empoderando a los padres en la solución de los problemas familiares, induciendo métodos más coherentes de disciplina y mejorando sus capacidades de autocontrol, atendiendo al hecho de que los niños víctimas de malos tratos tienen una probabilidad más alta de incurrir en actos de violencia a partir de su adolescencia y hasta la edad adulta (Hein 2003 citado en Hein et al. 2005; Blueprints 2001; McAlister 2000; Thornton et al. 2000; Cornell 1999; Farrington y Welsh 1999; Greenwood et al. 1996; McCord y Tremblay 1992; Patterson, Capaldi y Bank, 1991).⁷ Hay varias intervenciones efectivas analizadas que trabajan con padres de familia en la

⁷ “Las intervenciones deben aumentar el sentido de autocontrol y eficiencia de los padres, darles confianza en la interrelación con sus hijos y hacerlos sentir responsables, de una forma positiva, de los progresos en la conducta de sus hijos (Prinz y Miller 1996). Una forma de empoderar a los padres es proporcionándoles la información que les ayudará a comprender y a reaccionar adecuadamente ante la conducta de sus hijos [...] cómo criar a sus hijos y comunicarse con ellos de manera efectiva, negociar las normas familiares y las consecuencias, aprobar y recompensar a los hijos por una conducta que fomenta su adaptación a la sociedad así como disciplinar sin violencia” (Thornton et al. 2000: 56).



perspectiva de “escuela de padres”, casi siempre en combinación con otras estrategias, como es el caso de Casa Alianza (16) de Managua, Nicaragua, que además proporciona apoyo psicoterapéutico.

Otras investigaciones han permitido comprender la importancia de las intervenciones dirigidas a la familia que capacitan a los padres en sistemas de crianza que buscan mejorar la paternidad y lograr que sea más equilibrada con respecto al género, con el objetivo de prevenir la violencia sexual. Son más eficientes al adoptar un enfoque de desarrollo que, durante la etapa de la adolescencia y la juventud, incorpora conversaciones entre padres e hijos sobre mitos acerca de la violación, la forma de establecer límites a la actividad sexual, y la ruptura de los vínculos entre relaciones sexuales, violencia y coacción.

Schwartz (1991) menciona evaluaciones exitosas de estas intervenciones en países desarrollados, pero se carece de pruebas similares en América Latina (Krug et al. 2003). Sin embargo, se encontraron evidencias de efectividad en la intervención del proyecto Creciendo en Participación y Protagonismo por una Sociedad sin Violencia (8), de Rosario, Argentina. Un elemento importante de la prevención primaria y secundaria que el proyecto realiza es la asesoría de profesionales a padres y madres de familia en temas específicos de crianza con equidad de género. El proyecto ha sido recientemente seleccionado y premiado por el Concurso de Buenas Prácticas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos-Hábitat.

Conviene tener en cuenta que tanto para prevenir la violencia sexual como la violencia interpersonal en adolescentes y jóvenes por medio de estrategias dirigidas a la capacitación de los padres, distintos estudios recomiendan no concentrarse únicamente en mejorar los conocimientos de los padres desatendiendo el contexto de la intervención. En América Latina, se trata la mayoría de las veces de padres y madres muy jóvenes, y en situaciones de pobreza. Las intervenciones más efectivas experimentalmente evaluadas son aquellas que han incluido el entrenamiento a padres de hijos adolescentes y jóvenes en “destrezas para la vida”, que les permitan enfrentar problemas tales como aislamiento social, los conflictos conyugales y las dificultades económicas, partiendo de la hipótesis de que padres con capacidad para hacer frente a la vida tendrán mejores recursos para involucrarse en una crianza más efectiva de sus hijos (Henggeler et al. 1996; Borduin et al. 1990. En Thornton et al. 2000). Esto coincide con las evidencias halladas en las intervenciones sistematizadas.

Intervenciones que hemos considerado exitosas —como las de la organización comunitaria Child First (3) de Spanish Town, en Jamaica— trabajan en la prevención de conductas de riesgo con 700 niños y adolescentes vulnerables, para lo cual implementan una estrategia de asesoría a los padres de familia acerca de cómo mejorar sus ingresos, les facilitan capacitaciones y orientación laboral, y les proporcionan información sobre ofertas laborales (3). Otras intervenciones, que hemos estimado como efectivas, se han diseñado para proporcionar empleo, en el marco del mismo proyecto, a los jóvenes y a los padres de familia. Así lo hacen Luta pela Paz (15), de Rio de Janeiro, parcialmente financiada a través de un gimnasio abierto a la comunidad que genera unos 100 puestos de trabajo, y la ONG Viva Rio (26), de la misma ciudad, cuyos coordinadores de proyectos y la mayor parte del personal remunerado —más de 900 personas en el 2004— son habitantes de las *favelas* en donde interviene.

Parece, en cambio, que los programas dirigidos a adolescentes y jóvenes vinculados a pandillas o en riesgo de vincularse no demuestran efectividad, al no considerar que muchos de sus beneficiarios puedan ser también padres y madres de familia, o que tengan



responsabilidades hacia terceros. Justificadamente, mientras toman parte en actividades culturales y deportivas de prevención, algunos opinan lo mismo que un joven peruano vinculado al proyecto Patrulla Juvenil (18), de la Dirección de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Perú, que después de haber participado en un concurso de *graffiti* declaraba: “Es hora de que nos den oportunidades, señor. Yo tengo una hijita, Miguel también, y Alfredo, un varoncito. Tenemos que darles de comer, ¿por qué nadie nos ayuda?”. “Es la protesta de José”, señalaba el periodista que había escrito la nota (18).

Los programas de *mentoring* —basados en la hipótesis de que una relación amistosa de apoyo con un adulto (por lo general otro miembro de la comunidad o una persona que actuaba a través de la educación compensatoria con tutores⁸), que se desempeñe como un modelo positivo y un guía para tomar decisiones difíciles, contribuye a generar resiliencia en adolescentes y jóvenes en riesgo— se han mostrado eficaces contra la violencia, y han contribuido a mejorar los factores protectores —como la asistencia y el aprovechamiento escolar—, a disminuir la probabilidad de consumir drogas en la adolescencia, mejorar las relaciones familiares, y reducir la frecuencia de conductas de riesgo asociadas con la violencia y socialmente toleradas en el entorno del adolescente (Hein 2003 citado en Hein et al. 2005; Blueprints 2001; U. S. Department of Health and Human Services, 2001; Thornton et al. 2000; Cornell 1999; Grossman y Garry 1997; Sherman et al. 1997; Aniyar 1998). Sin embargo, esta intervención no es recomendable con adolescentes en situaciones de alto riesgo —por ejemplo, que tengan problemas severos de tipo emocional o conductual (que usan drogas frecuentemente, han tenido intentos de suicidio o están vinculados a pandillas)—, así como con jóvenes que han demostrado no estar comprometidos, teniendo en cuenta que el éxito de la intervención de tutoría supone una relación a largo plazo (Thornton et al. 2000).

También se han usado con éxito intervenciones terapéuticas en las familias—fundamentalmente con enfoques multisistémicos⁹— para prevenir la violencia en adolescentes y jóvenes. Los objetivos de la terapia se orientan a mejorar la comunicación familiar y las interacciones entre padres e hijos, así como a la identificación y aprovechamiento de los recursos comunitarios —como intervenciones que promueven la participación de los padres en la escuela—. Parece ser que a pesar de sus altos costos, la terapia familiar ha sido probadamente eficaz en modificar dinámicas familiares disfuncionales, y ha contribuido de manera significativa y a largo plazo en la disminución de los actos de violencia en adolescentes y jóvenes (Hein 2003, ver comentarios; Blueprints 2001; U. S. Department of Health and Human Services, 2001; Thornton et al. 2000; Cornell 1999; Aos et al. 1999; Henggeler et al. 1998; Sherman et al. 1997; Shadish 1992; Klein, Alexander y Parsons 1977).

Como intervenciones no eficaces o incluso contraproducentes para reducir la influencia de los factores de riesgo en el nivel de las relaciones de adolescentes y jóvenes, están en general aquellas basadas en enfoques de pares (*peer mediation approach*), como la mediación o el asesoramiento de compañeros para ayudar a otros a resolver conflictos y reorientar a adolescentes y jóvenes con alto riesgo de violencia y conducta antisocial hacia

8 Por razones obvias, para realizar este tipo de intervenciones es fundamental la capacitación del tutor, así como los criterios para seleccionarlo; además de tener determinado perfil de habilidades sociales y comunicacionales, se incrementa la efectividad de la intervención si los tutores comparten características con los adolescentes y jóvenes tutelados, tales como intereses comunes, género, antecedentes culturales y socioeconómicos, y proximidad geográfica e itinerarios compatibles (Sipe y Roder 1999, NWREL 1998, OJJDP 1998, Sipe 1996, Freedman 1993. En Thornton et al., 2000)

9 Este enfoque terapéutico parte de la premisa de considerar a la familia como una unidad interconectada, en la cual los integrantes —padres, hijos, hermanos y otros miembros— interactúan entre sí y con los factores externos —trabajo, escuela, condición de la vivienda, vecindario— para crear una dinámica familiar progresiva y compleja, que reacciona de acuerdo con los principios de la teoría general de los sistemas.



actividades ordinarias (U. S. Department of Health and Human Services 2001; McAlister 2000; Kellermann et al. 1998). Al respecto, nos ha parecido que programas como los implementados por Homies Unidos (11), de San Salvador, carecen de evidencia de ser efectivos en la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, lo que se muestra en la enorme diferencia entre sus propósitos, sus objetivos y sus logros, más allá de ser una institución exitosa en sus relaciones de alianza y en el lobby político. De hecho, parece reunir varios *handicaps* que cuestionan su eficacia: acompañamiento a través de pares, tutelaje poco calificado, jóvenes en situaciones de alto riesgo. La experiencia contrasta con la del Polígono Industrial Don Bosco (19), también de San Salvador, que trabaja con adolescentes y jóvenes en prevención terciaria, e incluye apoyo educativo a los padres de familia y supervisión familiar mediante un *staff* psicopedagógico, en su componente de libertad asistida para jóvenes con medidas judiciales y seguimiento a la salida de los jóvenes de la institución.

Otras intervenciones no muy efectivas parecen ser aquellas basadas en la enseñanza de habilidades de crianza a adolescentes —hombres y mujeres— en la escuela secundaria, en las que Zoline y Jason (1985, citado en Krug et al. 2003) encontraron que, aunque producían cambios importantes en los conocimientos y las expectativas, los efectos eran sensiblemente menores en los comportamientos y habilidades (Weaver y Maddaleno 1999). Esto coincide con enfoques centrados únicamente en proporcionar capacitaciones, sensibilizaciones e información sobre conductas de riesgo a través de talleres, sin otra medida complementaria, como es el caso del Consejo Nacional de Juventud, en Guatemala (6), en cuyo trabajo no hemos encontrado evidencias de efectividad.

4.2.3 Estrategias en el nivel de la comunidad

Las intervenciones en el nivel comunitario procuran modificar los factores presentes en el entorno en el que interactúan los adolescentes y jóvenes, desde la acción de determinadas instituciones en el ámbito del vecindario hasta la provisión o mantenimiento de la infraestructura urbana. La estrategia de trabajo en barrios y vecindarios no es nueva, pues desde la década de 1950 este enfoque aparece en Holanda, Bélgica y Gran Bretaña asociado a problemas de empleo, educación y actividades socioculturales, pero sólo a partir de los años 1980 empieza a aplicarse en la reducción de la violencia, con una táctica calificada como “ofensiva”, pues

En los barrios más problemáticos, con estructuras sociales desintegradas, la conciencia colectiva es insuficiente para instalar una estructura de prevención defensiva. La lucha [contra la violencia, la delincuencia y la inseguridad] necesita un enfoque mucho más integral, que abarque, también, un mejoramiento en las condiciones de vida y en la calidad ambiental [...] Esta clase de iniciativas de prevención se puede considerar ofensiva, porque ataca tanto a los daños (vandalismo, delincuencia, etc.) como a las causas de la delincuencia y de la inseguridad (jóvenes sin ocupación, mala imagen del barrio, etc.) (Folch y Valdivieso 1998: 1).

Los programas más exitosos en los barrios de inmigrantes de Holanda, Bélgica y Gran Bretaña parecen concentrar sus acciones en tres categorías de proyectos, a veces ejecutadas conjuntamente en un mismo lugar: (1) proyectos que buscan generar encuentros y canales de comunicación entre la población, las autoridades municipales y la policía; (2) iniciativas centradas en los adolescentes y jóvenes, que procuran ofrecer alternativas para el uso del tiempo libre, habilitando sedes y lugares para que puedan reunirse; (3) finalmente, una última categoría de proyectos tiene como objetivo aumentar el control social informal (Folch y Valdivieso 1998).

En algunos barrios pobres de Cali (Colombia), con tasas de homicidios y delincuencia superiores al promedio, programas con medidas de transformación del entorno —como



la legalización de las propiedades, el mejoramiento de las viviendas, la habilitación de mercados internos y de microempresas, la instalación de servicios médicos, la dotación y el equipamiento de escenarios para las prácticas deportivas y la recreación, y el mejoramiento de la iluminación— redujeron el ingreso de adolescentes y jóvenes a las pandillas, en comparación con barrios que no tuvieron acceso al programa (McAlister 2000). Lamentablemente, en comparación con las estrategias en los niveles individuales y de relaciones, se sabe menos de la efectividad de las intervenciones en este nivel (Krug et al. 2003).

Otra intervención que ha sido hallada efectiva es la modificación de las consecuencias positivas del comportamiento violento como método para reducir la violencia juvenil asociada con delitos, lo cual ha mejorado la protección legal a través de la policía en vecindarios con altas tasas de delincuencia. Sherman, Shaw y Rogan 1995 (en Weaver y Maddaleno 1999) demostraron que el crimen se puede reducir hasta un 50% cuando la actividad policial aumenta en las áreas con tasas más altas de delitos contra la vida y la propiedad, especialmente si aumenta el patrullaje de puntos donde hay mayor delincuencia, se encarcela a los delincuentes habituales y se controla el consumo de bebidas alcohólicas.

También Guerrero, McAlister y Concha Eastman (1995, en Weaver y Maddaleno 1999), en un estudio sobre medidas preventivas en la ciudad de Cali, respaldan la tesis de la efectividad de la acción coordinada entre la policía y el sistema judicial a favor de la persecución y el encarcelamiento de las pandillas juveniles y sus líderes, con resultados a corto plazo en la reducción de las tasas de homicidios juveniles, aunque hasta ahora no se conocen sus efectos a largo plazo (Blueprints 2001; Rubio 1998). Por ejemplo, en la experiencia de prevención implementada en Belo Horizonte (Brasil), el programa Fica Vivo (20), “Um importante passo para uma melhor atuação do GEPAR [policía militar] foi o fornecimento de mandados de busca e apreensão mais amplos, pelo poder judiciário, que permitem os policiais entrar em um maior número de residências, o que dificulta a fuga dos bandidos” (Lana Leite 2005: 91).

En cambio, parecen ser ineficaces las intervenciones apoyadas en vigilancia de cuadras, que sólo desplazan los delitos y la violencia a las calles más distantes y no patrulladas (Souza 2002), así como el arresto aislado de jóvenes por ofensas menores o de comerciantes minoristas de drogas (Sherman et al. 1997).

No obstante, debido a la desconfianza generalizada hacia la policía en América Latina, hay experiencias de *community policing* cuya eficacia, si bien en la mayoría de los casos no se ha evaluado adecuadamente, ha tenido algunos logros prometedores en barrios de ciudades brasileñas, costarricenses y venezolanas, pues se ha establecido una relación positiva entre la percepción de mayor seguridad en el vecindario y la disminución de los delitos. El enfoque básico de la intervención es de por sí polémico, pues visibiliza y cuestiona las contradicciones del modelo tradicional de la acción policial al acentuar

[...] o dilema presente nas democracias modernas entre lei e ordem e, por outro, evidencia os limites do próprio modelo ao identificar e intervir nos mecanismos informais de controle social, base do modelo preventivo e pró-ativo de polícia, assegurando que laços de confiança necessários para a cooperação entre polícia e comunidade sejam constituídos com o conseqüente aumento da sensação de segurança (Souza 2002: 6).

Se apoya en intervenciones a partir de la creación y/o fortalecimiento de organizaciones comunitarias interesadas en buscar una solución social a los problemas del vecindario antes que en la simple criminalización, en las que el agente de policía cumple el rol



de alertar y derivar oportunamente a adolescentes y jóvenes que hayan presenciado, experimentado o cometido actos de violencia hacia los profesionales competentes (Beato 2003; Lana Leite 2003; Buvinic, Morrison y Shifter 1999; Aniyar 1998; Marens y Schaefer 1998; Carrillo 1997; *U.S. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1995*). En palabras de Souza, los elementos básicos de estas intervenciones son: “[...] aproximação da comunidade, informação, identificação de problemas, policiamento adequado às características e demandas de cada área policiada, solução conjunta dos problemas com efeito a longo prazo” (Souza 2002: 91). Bayley (1994, citado por Souza), sintetiza en la sigla CAMPS —*consultation, adaptation, mobilization, problem solving*—, los principios que marcan el norte de las buenas prácticas en las experiencias de policía comunitaria.

Aunque hace falta más evidencia, el programa Comités de Seguridad Vecinales (5), de la Dirección de Prevención del Delito del Estado de Zulia (Venezuela), ha conseguido, mínimamente, reducir la mala percepción sobre la policía, así como mejorar la seguridad en los barrios donde ha intervenido, combinando el mejoramiento de la infraestructura barrial y el aprovechamiento de los espacios públicos abandonados para actividades comunitarias con programas para reducir la violencia doméstica y sexual coordinados con organizaciones de la sociedad civil, y el mejoramiento de la capacidad de respuesta de la policía —comunicaciones y dotación—. Sus principales lecciones, aprendidas desde 1993, son: 1) que la comunidad misma identifique cuáles son los problemas; 2) que los objetivos sean compartidos; 3) que el liderazgo sea igualmente compartido; y, fundamentalmente, 4) que los jóvenes participen.

La ONG Viva Rio (26) combina el desarrollo comunitario y la inclusión de niños y adolescentes con el control de armas y la reforma de los aparatos de seguridad del Estado, más una fundamental estrategia de comunicación comunitaria, orientada por los principios de permitir expresarse a la población local y a las organizaciones comunitarias, rompiendo con los prejuicios generados por la desigualdad y la violencia. La estrategia de intervención comunitaria de Viva Rio se basa en la colaboración de las instituciones locales, que conforman una extensa red. Los “socios” locales ofrecen infraestructura, personal y conocimiento del contexto de intervención, mientras que Viva Rio proporciona la elaboración del proyecto, la formación técnica y profesional, servicios especializados, y el material didáctico. En el 2003, había 727 organizaciones locales que trabajaban en “parcería” con Viva Rio, incluyendo asociaciones de vecinos, ONG, uniones y cooperativas, escuelas, batallones de la policía militar, emisoras de radio comunitarias, iglesias y prisiones. Con ellas, se realizaron 290 eventos públicos como parte de alguno de los 813 proyectos desarrollados en distintas *favelas* y barrios de la ciudad, en torno a la prevención de la violencia en niños y adolescentes.

Otra intervención que forma parte de las estrategias de prevención dirigidas a la comunidad es la reducción de la disponibilidad de alcohol para adolescentes y jóvenes. Aunque hay alguna evidencia experimental acerca de la relación entre descenso en tasas de criminalidad y reducción de la disponibilidad de alcohol para adolescentes (Arriagada y Godoy 1999; Kraushaar y Alsop 1995), no está claro todavía en qué medida la intervención afectó el comportamiento violento entre jóvenes o cuánto podría funcionar esa intervención en otros ámbitos. Sin embargo, puede que sea muy efectiva en combinación con otras medidas, como las implementadas en Bogotá (Colombia), donde se redujeron sustancialmente las tasas de homicidios de adolescentes y jóvenes. Entre éstas podemos mencionar las medidas tendientes al “diseño y construcción del espacio público urbano como escenario de convivencia” (12) a través de programas de cultura y pedagogía ciudadana, capacitación y reforma de la policía, ordenamiento territorial en



función de la convivencia, medidas tributarias equitativas y eficaces, y restricciones tanto al porte de armas como a la venta de bebidas alcohólicas.

Las actividades de movilización social de la comunidad¹⁰ —a través de trabajos de educación informal en el vecindario, por medio de deportes, recreación, artes escénicas, música, producción de medios de comunicación comunitarios, talleres, etcétera— pueden proporcionar a los adolescentes oportunidades para participar en grupos en torno a objetivos socialmente valorados y recibir por ello un reconocimiento de su entorno. Este reconocimiento refuerza habilidades sociocognitivas que aumentan las interacciones sociales positivas, la confianza interpersonal y la resolución de conflictos en forma no violenta, y fomentan una autoestima más elevada en los adolescentes y jóvenes (McAlister 2000).¹¹

Aunque se necesita demostrar su efectividad en la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes, el proyecto Piel de la Memoria (14), de la Corporación Región, de Medellín, tuvo éxito en modificar las relaciones sociales en un barrio considerado “la zona de mayor tráfico de armas y drogas en la ciudad, lo que ha generado una tremenda violencia de pandillas, que además de sembrar la zozobra y el odio entre sus residentes, ha contribuido a que muchos de sus pobladores se sientan siempre en peligro, y, peor aún, excluidos del resto de la ciudad” (Corporación Región 1997). La intervención, basada en generar la participación comunitaria en torno a un proyecto común —la creación de un museo móvil de la historia del barrio, construido en un bus—, consiguió regenerar el tejido social y facilitar la discusión de los problemas del barrio, así como promover y fortalecer liderazgos comunitarios, especialmente en jóvenes y mujeres. Si bien el proyecto no se proponía directamente reducir el número de homicidios en el barrio, contribuyó a sentar bases consistentes en la comunidad para generar un diálogo en torno a una conciencia —compartida por víctimas y victimarios— sobre la negatividad de la violencia como medio para resolver conflictos.

Sin embargo, para que los proyectos tengan efectos sostenibles, diversos especialistas recomiendan evitar el activismo —las actividades por sí mismas— y desarrollar las prácticas bajo supervisión, así como involucrar a los habitantes en el momento de definir las prioridades y buscar soluciones, reconocer y valorar la interacción compleja entre los distintos factores de riesgo y de protección que actúan en la comunidad, involucrar a padres y a familias, proponer actividades adecuadas desde la perspectiva del desarrollo, y mantenerse en el tiempo (Blueprints 2001; U. S. Department of Health and Human Services 2001; Bobotim et al. 1999; Cornell 1999; Elliott, Hamburg y Williams 1998; Folch y Valdivieso 1998; Chaiken y Huizinga 1995). Algunos estudios mencionan que tales intervenciones reducen la violencia en el corto plazo, pero que el efecto a largo plazo aún no ha sido adecuadamente comprobado (Slaby 1988 en Thornton et al. 2000).

10 “O trabalho de mobilização comunitária tem como diretriz a busca de soluções coletivas para os problemas, no âmbito do território, a partir da interação entre agentes diversos em uma estrutura de rede, que possibilita que recursos, equipamentos e iniciativas sociais sejam potencializados” (Lana Leite 2003: 94-95).

11 En esta línea, Hawkins y Catalano (Cornell 2000; Weaver y Maddaleno 1999) han desarrollado un programa modelo —Communities That Care— que combina, en un mismo vecindario, enfoques *school-based* con programas comunitarios de actividades extracurriculares, con el objetivo de incrementar los factores protectores de la comunidad y disminuir los factores de riesgo. Las evaluaciones han demostrado sus efectos positivos en el aprovechamiento escolar, la disminución en tasas de criminalidad barrial, y la reducción del consumo de alcohol y de drogas: “Communities That Care [...] is a systematic, theoretically grounded approach to helping communities create conditions and relationships that protect youth against drug and alcohol abuse. The Communities That Care model describes how communities can plan, undertake, monitor, and evaluate a series of programs and strategies to reduce risk factors and strengthen protective factors in individual children, their families, schools, and neighborhoods” (Cornell 2000: 10).



La experiencia de Circo Volador (4), de la ONG mexicana Investigación y Desarrollo de Proyectos Submetropolitanos (IDESPRO), que hemos calificado como efectiva por las evidencias que reúne, parece trabajar en las líneas mencionadas. A lo largo de 14 años de actuación, ha transformado una zona degradada de la periferia del área metropolitana del Distrito Federal —donde eran frecuentes los robos y la violencia callejera interpersonal, había escasa presencia policial, servicios públicos deficientes y falta de oferta cultural y de entretenimiento para los jóvenes— en una zona de integración comunitaria alrededor del proyecto de un centro cultural que funciona en un cine abandonado, que los propios jóvenes del lugar se ocuparon de remodelar y restaurar para uso suyo y de los pobladores del barrio. En la zona han disminuido los índices de homicidios y delincuencia, así como el número de pandillas juveniles.

Un elemento que parece importante en la prevención de la violencia sexual y física contra las mujeres es la vinculación de los hombres a iniciativas colectivas en sus comunidades relacionadas con los derechos de la mujer y contra la violencia sexual y doméstica, como lo muestra el estudio de Mehrotra et al. (2000) desarrollado en 16 países de América Latina, con actividades que incluyen discusiones en grupos, campañas de educación y talleres que procuran que los hombres, individualmente, tomen medidas para reducir su propensión a la violencia. Estos resultados nos hacen dudar de la efectividad del proyecto Red Comunitaria de Atención a la Violencia Intrafamiliar (23), que ha demostrado ser exitoso en lograr capacitar a un grupo importante de funcionarios públicos, agentes de policía, docentes, mujeres y jóvenes, pero que apenas ha conseguido involucrar a menos de un hombre por cada 10 mujeres en sus actividades para la prevención de la violencia doméstica y sexual contra mujeres, niños y adolescentes, en un contexto de violencia colectiva generalizada.

También se mencionan como probablemente eficaces las siguientes intervenciones comunitarias (*Painter y Farrington 2001; Williams, Guerra y Elliot 1997*):

- El mejoramiento del ambiente escolar, cambiando las prácticas de enseñanza, las normas y los reglamentos escolares, así como aumentando la seguridad en las escuelas.
- El monitoreo de concentraciones de plomo y la eliminación de productos tóxicos de uso doméstico, cuyas inhalaciones pueden causar daño cerebral en los niños, y conducir indirectamente a la violencia juvenil.
- El establecimiento de rutas seguras para los niños y niñas en su camino a la escuela y de regreso de ésta o de otros espacios comunales en los que se realizan actividades.
- La cualificación de la capacidad de respuesta en los sistemas de atención en salud, a través del mejoramiento del desempeño en los servicios de urgencia, facilitando el acceso a los servicios de salud y capacitando a los trabajadores del sector para identificar y derivar oportunamente a los adolescentes y jóvenes en riesgo.

Parece que las intervenciones dirigidas a la comunidad que intentan prevenir la violencia en adolescentes y jóvenes actuando sobre las pandillas juveniles, organizando a las comunidades afectadas y ofreciendo programas de extensión y orientación para los miembros de las pandillas, así como actividades para encauzar sus metas en dirección a logros socialmente productivos, no son efectivas. Según estudios experimentales en Nicaragua y Estados Unidos, hay pocos indicios de que los intentos por suprimir las pandillas o los programas de “oportunidad” —que proporcionan servicios de orientación, extensión y ayudas para la rehabilitación y reinserción social de los miembros de



pandillas— sean eficaces (*Rodgers 1999; Finestone 1976*); incluso algunas intervenciones han causado resultados inesperados y no deseados, como fomentar una mayor cohesión de las pandillas (*Klein 1967*).

En cambio, parece que la delincuencia se reduce cuando los jóvenes con conductas antisociales se agrupan con pares de buen comportamiento, con una buena supervisión, como lo ha constatado *Feldman (1991)*: “Ese estudio señala claramente que, cuando sea posible, se deberían usar opciones distintas de la segregación institucional practicada en la administración de justicia para con los jóvenes violentos” (*McAlister 2000: 45*).

Otro tipo de intervención que demuestra poca efectividad es la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes mediante el ofrecimiento de dinero como recompensa por la entrega de armas de fuego a la policía u otros organismos de la comunidad, en lo que se conoce como “recompra de armas de fuego”, pues hay indicios de que las armas “vendidas” no son las directamente usadas en los homicidios cometidos por los jóvenes (*U. S. Department of Health and Human Services 2001*).

4.2.4 Estrategias en el nivel social

La reducción de las desigualdades económicas y sociales para el desarrollo —creando programas de empleo o fortaleciendo el sistema de justicia penal—, o la modificación de las normas y valores culturales, son intervenciones de tipo macrosocial que pueden incidir en la disminución de la intensidad de los conflictos sociales generados por la desigualdad y la concentración de ingresos. Sin embargo, son las menos implementadas y evaluadas, según *Krug et al. (2003)*.

Las políticas que intentan reducir la concentración de la pobreza en las zonas urbanas tal vez sean eficaces para combatir la violencia juvenil. Específicamente, hay evidencia experimental sobre los efectos en la reducción del comportamiento violento de adolescentes y jóvenes cuyas familias se trasladan a vecindarios con mejores indicadores socioeconómicos de desarrollo (*Ludwig, Duncan y Hirschfield 2001*).

Cambios en los marcos legales para reducir la disponibilidad y el acceso a las armas de fuego en adolescentes y jóvenes pueden constituir una intervención viable para reducir las tasas de homicidio en esta población. En muchos países, directamente, es ilegal que los jóvenes obtengan armas de fuego. En cualquier caso, un cumplimiento más estricto de las leyes existentes que reglamentan la compraventa de armas de fuego da buenos resultados en cuanto a la reducción de la violencia armada entre adolescentes (*McAlister 2000; Weaver y Maddaleno 1999; Sheley y Wright 1993*).

En Bogotá, durante los años 1990, se diseñaron planes de seguridad con combinaban medidas de fortalecimiento de la policía, frentes comunitarios de seguridad, acciones de desarme y control del porte de armas y restricciones del horario de los establecimientos nocturnos, cuya evaluación “[...] indica que contribuyeron de manera importante a la disminución del número de delitos y homicidios en la ciudad y confirmó la eficacia de las medidas preventivas” (*Concha Eastman y Guerrero 1999*). También en Cali, la prohibición de portar armas de fuego durante los períodos en los que, por experiencia anterior, se sabía que aumentaban las tasas de homicidios —fines de semana posteriores a los días de pago, días feriados—, obtuvo una disminución de los homicidios (*Villaveces 2001; Weaver y Maddaleno 1999*). Sin embargo, el hurto y el robo son una importante fuente de armas de fuego para los mercados ilegales, y se han constituido en las principales formas por las que adolescentes y jóvenes las obtienen. En tales casos, es probable que se produzca un incremento en las tasas de homicidios (*Cook y Moore 1999*).



Según estudios (Buvinic, Morrison y Shifter 1999; Weaver y Maddaleno 1999; y Williams, Guerra y Elliot 1997), otras intervenciones que abordan factores socioeconómicos y culturales que pueden tener efectividad en la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes —aunque se carece de evaluaciones adecuadas— son:

- Campañas de información al público para cambiar las pautas comunitarias prevalecientes y promover el buen comportamiento social.
- Medidas para reducir la exhibición de la violencia en los medios de comunicación.
- Acciones y políticas de integración social para mitigar los efectos de cambios sociales súbitos.
- Fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas policiales y judiciales.
- Reformas institucionales de los sistemas educativos.¹²

Con relación a la violencia sexual en América Latina y el Caribe, se está llevando a cabo una iniciativa interinstitucional de las Naciones Unidas para luchar contra la violencia de género, cuyos objetivos son la sensibilización de la opinión pública sobre los costos individuales, sociales y económicos de la violencia contra las mujeres y las niñas; el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para elaborar y aplicar leyes contra la violencia de género; el reforzamiento de las redes de organizaciones públicas y privadas; y la realización de programas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, aún no se dispone de una evaluación consolidada sobre sus efectos preventivos (Mehrotra et al. 2000).

4.3 Consideraciones finales

Siendo el objeto específico del presente informe las intervenciones de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes que utilizan estrategias dirigidas a las familias —en el nivel de las relaciones, según el modelo ecológico de la violencia de la OMS— y en el nivel de la comunidad, el siguiente cuadro resume y clasifica las expuestas en este capítulo, de acuerdo con su efectividad, a partir de los estudios citados.

Por supuesto, ninguna estrategia es efectiva en todos los casos ni para todos los jóvenes; creer que es así puede inducir a falsas percepciones acerca de la efectividad de un programa, especialmente si el diseño de la intervención no ha definido con claridad sus metas ni establecido una línea de base para medir sus progresos. Además, tratándose de un problema tan complejo y multideterminado como la violencia, la mayoría de las intervenciones aplican un *mix* de estos enfoques, considerando que la violencia en adolescentes y jóvenes se origina en la interacción compleja de múltiples factores en distintos niveles, que requieren medidas capaces de incidir en los diversos sistemas de influencia —del individuo, la familia, la comunidad y la sociedad— y adaptarse a las diferentes etapas de desarrollo psicosocial, en distintas situaciones y contextos vitales.

Dos importantes estudios resaltan la necesidad de implementar intervenciones más integrales. Para Thornton, es poco probable que una sola intervención, llevada a cabo aisladamente, pueda incidir en la reducción de la violencia en adolescentes, por lo que hay que pensar en varios tipos de intervenciones y estrategias suplementarias, como “[...]”

¹² Al respecto, algunos países han fortalecido las leyes que contribuirían a la erradicación del acoso sexual en las escuelas, aunque el informe de la OMS recomienda su combinación con “[...] cambios en la capacitación y la contratación de los docentes y la reforma de los programas de estudios con vistas a modificar las relaciones de género en las escuelas” (Krug et al. 2003: 185).



Cuadro 4.1: Estrategias de prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes dirigidas a la familia (nivel de las relaciones) y en el nivel de la comunidad

	Intervenciones preventivas de la violencia en adolescentes (10-19 años)			Intervenciones preventivas de violencia en jóvenes (20-29 años)		
	Efectivas	Probablemente efectivas	No efectivas	Efectivas	Probablemente efectivas	No efectivas
Estrategias dirigidas a las familias (nivel de las relaciones)	Visitas domiciliarias Capacitación a padres en habilidades de crianza y destrezas para la vida Mentoring y tutelaje Terapia familiar multisistémica	Tutela temporal para delincuentes graves y crónicos (Krug et al. 2003) Capacitación a padres con enfoque de género	Peer mediation approach Enseñanza de habilidades de crianza a adolescentes Capacitación "teórica" en valores e información sobre malas consecuencias de la violencia		Fortalecimiento de vínculos familiares y laborales (Krug et al. 2003)	
Estrategias en el nivel de la comunidad	Establecimiento de rutas seguras Actividades extracurriculares	Transformación del entorno barrial Reducción de la disponibilidad de alcohol Monitoreo de emisiones tóxicas en los hogares Mejoramiento de la atención en salud Mejoramiento de los ambientes escolares Restricción del uso de armas	Recompra de armas de fuego Orientación a miembros de pandillas	Programas recreativos y culturales comunitarios (véanse las condiciones) Coordinación policial y judicial, con medidas comunitarias	Transformación del entorno barrial Reducción de la disponibilidad de alcohol Mejoramiento de la atención en salud Involucramiento de hombres en actividades comunitarias con enfoque de género Community policing	Recompra de armas de fuego Orientación a miembros de pandillas

Fuente: elaboración propia sobre la base de Krug et al. 2003.

un programa de tutoría destinado a ayudar a los adolescentes a evitar que se asocien con pandillas puede complementar una intervención que incluya actividades alternativas fuera de la escuela" (Thornton et al. 2000: 15). Por su parte, McAlister también insiste en la combinación y coordinación de medidas en distintos niveles:

[...] las políticas y la ejecución de las leyes deben ser combinadas con educación y cambios de actitud. Las estrategias punitivas necesitan ir acompañadas de acciones para aumentar las oportunidades de avance personal. Los programas basados en las escuelas deben estar ligados a programas de apoyo a los padres y a los servicios comunitarios. Los medios de comunicación masiva deben combinarse con las comunicaciones interpersonales (McAlister 2000: 39).



Finalmente, hasta la intervención calificada como más efectiva puede fracasar si no es adecuadamente implementada por un equipo competente y bien entrenado en la aplicación de las técnicas específicas requeridas, o no cuenta con una dedicada supervisión a cargo de expertos. Cornell recomienda que un

[...] treatment program must be sufficiently well specified in training manuals and guides, or through supervisory oversight by qualified practitioners, that it can be replicated in a new setting [...] All too often programs have rushed to implement new treatment programs without adequate training and preparation, so that treatment failure is a result of poor implementation, not an inadequate treatment model [...] Staff training and general quality control have often been neglected in prevention settings (Cornell 1999: 1-2).



5. Conclusiones y recomendaciones



5

Conclusiones y recomendaciones

La violencia en adolescentes y jóvenes se ha convertido en uno de los principales problemas políticos y sociales de América Latina, y aunque las causas son complejas y múltiples, la lección fundamental que puede aprenderse de la revisión de la literatura científica y de las prácticas de intervención sistematizadas es que, para ser sostenible, la intervención debe dirigirse a modificar comportamientos individuales y factores estructurales, pero es en la comunidad y la familia donde más efectivamente se pueden producir estos cambios. Aún más: tratándose de la violencia en adolescentes y jóvenes, los cambios individuales y estructurales sólo son efectivos y producen efectos multiplicadores en el ámbito de las relaciones personales y comunitarias más cercanas.

Por el contrario, los esfuerzos por delimitar y tratar sólo causas individuales o estructurales conducen a efectos poco sustentables —en el primer caso— o a complicados ejercicios de formulación de políticas y marcos legales que no disponen del desarrollo institucional necesario para ser efectivos. Por lo tanto, es en el nivel de las relaciones interpersonales y con la comunidad donde se pueden asentar las bases de transformaciones duraderas en los individuos y capacidades para promover transformaciones estructurales en las políticas económicas y los mecanismos de gobernanza de las sociedades.

Si bien en grados diferentes, las intervenciones que han demostrado evidencias de efectividad o logros significativos en la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes han actuado sobre el contexto personal, es decir, en el entorno familiar y comunitario del adolescente y del joven. Desde ese ámbito se ha buscado fortalecer su resiliencia, mediante la identificación y disposición de alternativas e influencias positivas en grado suficiente para modificar sus elecciones personales, proporcionándoles mayores niveles de libertad en el momento de optar entre los rangos de conducta posibles para cada situación frente a los factores de riesgo individuales o de su ambiente. Estos programas o proyectos comparten algunas características y criterios de práctica, que pueden ser identificados como factores que aumentan la probabilidad de realizar intervenciones con carácter preventivo, capaces de incidir en los factores de riesgo y de protección, y así reducir la violencia en adolescentes y jóvenes. Vamos a proponer los que nos parecen más evidentes:

- 1) Son intervenciones —programas, proyectos— basados en la comunidad o que se vinculan directamente a ella por su origen. La violencia en adolescentes y jóvenes, sea como perpetradores o víctimas de ella, se produce en los ambientes donde han crecido; en consecuencia, si se desea realizar intervenciones eficaces, los proyectos deben, por fuerza, involucrar a la familia y a la comunidad del adolescente. Muchas de estas intervenciones no han partido de la nada sino de intereses de la propia comunidad y de acciones iniciadas por ella misma como reacción inicialmente defensiva, pero



después proactiva. Son intervenciones apoyadas y fortalecidas por ONG, donantes internacionales y gobiernos, pero que se basan en la capacidad de la comunidad para enfrentar y solucionar sus problemas.

- 2) Las intervenciones de prevención deben diseñarse para responder a los factores de riesgo y a las influencias locales que están presentes en el entorno. Para esto, deben basarse en análisis y diagnósticos que les permitan expresar sus necesidades e intereses tanto a los adolescentes y jóvenes perpetradores o víctimas de la violencia como a los *stakeholders* más relevantes en la comunidad —padres, docentes, agentes de policía, comerciantes, etcétera—.
- 3) Las experiencias exitosas orientadas hacia la reducción de homicidios, porte de armas y consumo de drogas y alcohol por parte de jóvenes en sectores caracterizados por la presencia de pandillas y la frecuencia de delitos y homicidios, como Fica Vivo, ilustran la importancia de conjugar adecuadamente la actividad de la policía con la de las instituciones que realizan trabajo social. De igual forma, demuestran que una de las claves reside en focalizar las intervenciones en zonas específicas, facilitando una aproximación más pragmática a la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, que ayuda a establecer objetivos de prevención concretos y verificables.
- 4) Con relación al punto anterior, las intervenciones efectivas no sólo se preocupan de *qué hacer* sino de *cómo hacerlo*. Los proyectos de prevención deben incorporar en el diseño, la implementación y la coordinación del proyecto a los adolescentes y jóvenes a quienes se dirigen, no sólo para asegurar la pertinencia de la intervención y su sostenibilidad técnica sino para generar bases de sostenibilidad social, al hacer surgir entre los jóvenes liderazgos locales que pueden volverse referentes y modelos para los menores. Otro tanto puede decirse de las metodologías de las intervenciones, que se referencian en experiencias anteriores de probada efectividad y validez científica, adaptadas a los contextos y situaciones locales. Ejemplos claros son las construcciones de propuestas metodológicas como las de Luta pela Paz y Circo Volador.
- 5) El diseño y la operación de estas intervenciones de prevención pretenden ser integrales, pues tratan de abarcar el espectro de situaciones y factores de riesgo que contribuyen a la generación de la conducta violenta. La priorización de las problemáticas *específicas* relacionadas con la violencia en adolescentes y jóvenes no debe excluir la necesidad de observar el sistema de relaciones entre los diferentes factores de riesgo, así como la identificación de las acciones de prevención que pueden tener un efecto más sinérgico en todos los factores identificados. Pensar que la violencia en adolescentes y jóvenes se puede prevenir con el apoyo a los padres, el empleo de los jóvenes o las actividades extracurriculares no conduce a intervenciones efectivas, como sí las que brindan opciones variadas y suficientes para responder a todos o a la mayoría de los factores de riesgo.
- 6) Las intervenciones con mejores resultados actúan tanto en el ámbito de las relaciones familiares y personales del adolescente y el joven como integrando redes y estableciendo alianzas con grupos y asociaciones locales y fuera de la vecindad, para mejorar la incidencia en los marcos jurídicos y en las decisiones políticas que generan las condiciones que determinan las estructuras de oportunidades y alternativas para adolescentes y jóvenes. Así tenemos, por ejemplo, el control de la circulación de armas de fuego (Viva Rio), la restricción de la disponibilidad para el consumo de alcohol (Alcaldía de Bogotá) o la aprobación de leyes y ordenanzas municipales que protegen a mujeres, niñas y adolescentes de la violencia sexual (Creciendo en Participación y



Protagonismo por una Sociedad sin Violencia). Sin embargo, mantienen un “cable a tierra” interviniendo —desde las relaciones sociales y comunitarias que se desarrollan en las vecindades, barrios o *favelas*— sobre problemas concretos.

- 7) Son intervenciones altamente personalizadas, que se adaptan a las características de sus destinatarios, y funcionan según esquemas que les permiten ajustarse flexiblemente a las demandas más que partir de una oferta inflexible. Esto aumenta sus posibilidades de actuar respecto a necesidades y factores de protección diferentes en contextos similares de alto riesgo.
- 8) Las intervenciones exitosas ofrecen influencias contrarias a los resultados positivos de la conducta violenta, que contribuyen a la aceptación social de la violencia y moldean el aprendizaje social de los adolescentes. No son intervenciones que procuran “convencer” moralmente a los adolescentes y jóvenes con charlas acerca de la “maldad” de los otros —ya que muchas personas violentas son referentes de éxito en sus comunidades y reciben una sincera admiración—, sino mostrando modelos diferentes y asequibles, con parámetros de éxito distintos de los que ofrecen, por ejemplo, los jóvenes de las pandillas, los padres o los amigos.
- 9) Las intervenciones efectivas incorporan a la familia del adolescente, ya que la relación con los padres constituye una fuente primordial de factores de protección y, por regla general, ellos suelen estar interesados en la prevención de la violencia en sus hijos. Las visitas a los domicilios, las reuniones regulares con equipos de asistencia psicológica y social, el apoyo y la asesoría en la crianza de los hijos, el mejoramiento de la comunicación familiar y la equidad de género en las relaciones familiares, son acciones que se han emprendido en intervenciones efectivas reseñadas por la literatura especializada y han sido confirmadas por los logros de proyectos sistematizados como Creciendo en Participación y Protagonismo, y la Asociación Solidaridad Países Emergentes (ASPEM). En esta estrategia, es importante no descuidar la necesidad de muchos padres de generar mejores ingresos para su familia, como parte de la creación de ambientes saludables. Por eso, estas intervenciones se preocupan por buscar soluciones —tales como capacitaciones, bolsas de empleo y créditos subvencionados— dirigidas a mejorar la renta familiar, como demuestran Child First, el Polígono Industrial Don Bosco y Casa Alianza.
- 10) Las intervenciones exitosas incorporan tanto a adolescentes que han cometido actos de violencia de distinta gravedad como a adolescentes no infractores, ya que los jóvenes que viven en las comunidades afectadas por fenómenos de violencia y de alta vulnerabilidad frente a factores de riesgo presentes en la vecindad comparten —más allá de si son comprobadamente infractores— una exposición similar a los factores de riesgo, siendo pobres, social y económicamente marginados, y estando afectados por tipos de violencia que van desde la familia hasta el Estado, pasando por el entorno barrial. Como resultado, todos los adolescentes y jóvenes de la comunidad deben estar en capacidad de acceder a los beneficios de las ofertas de prevención. Además, adolescentes y jóvenes que han sido directamente víctimas o perpetradores de violencia necesitan integrarse con jóvenes no afectados, con el fin de conocer otra posibilidad y permitir un aprendizaje social por modelamiento, que mejora los factores de protección en uno y otro tipo de joven; en cambio, aislar a los adolescentes infractores de sus pares no infractores limita el éxito de la intervención, cuando no termina siendo francamente contraproducente.
- 11) En oposición a la baja autoestima, acrecentada por la sensación de ser ciudadanos de segunda categoría y sufrir constantes discriminaciones y estigmatizaciones por



parte de la policía y otros funcionarios públicos, dar a adolescentes y jóvenes la oportunidad de formar parte de algo importante y valioso —como la creación de un centro cultural, en el caso de Circo Volador— no sólo genera factores protectores y alimenta la capacidad de resiliencia, sino que permite que surjan líderes juveniles que se pueden convertir en modelos y referentes de vida para los niños y adolescentes, distintos de modelos negativos —como amigos o padres—, y que además sea posible seguir e imitar. Así, apoyar a que los jóvenes con capacidades se cualifiquen y se conviertan en animadores, monitores y coordinadores de los proyectos de prevención de la violencia, compartiendo su conocimiento y experiencias con otros, facilita no sólo un medio de vida sino también un modelo cercano de joven o adulto distinto.

- 12) La educación —tanto la formal como la no formal— debe combinarse con el acceso al mercado de trabajo, con el fin de permitir una movilidad social ascendente, que pueda contrarrestar la tentación —frecuentemente idealizada por los medios de comunicación— que ofrece la violencia como un medio para obtener dinero fácil. En contraste, a menudo las ofertas educativas no consideran esta necesidad que tienen los adolescentes y jóvenes de construir una autonomía económica. Algunas intervenciones han conseguido, con bastante éxito, ayudar a los adolescentes a permanecer en la escuela o regresar a ésta facilitándoles formas de ganarse la vida que reconozcan el potencial creativo y el valor artístico de sus expresiones culturales. Éste es el caso de Afro Reggae y CEFOCINE. Otras, como Viva Rio y Luta pela Paz, generan empleo para adolescentes y jóvenes en la misma comunidad intervenida, dentro del proyecto.
- 13) Las intervenciones efectivas no sólo se preocupan por buscar de qué manera los adolescentes y jóvenes pueden obtener ingresos: también se interesan por construir alternativas culturales capaces de demostrar no la negatividad de la subcultura de la violencia —que muchos contemplan, por el contrario, con admiración— sino las ventajas comparativas de elegir otra forma de vivir. Es importante que estas alternativas sean atractivas, emocionantes y de estilo juvenil —como la música, los deportes o la danza—, y que ofrezcan a los adolescentes una identidad propia, necesariamente a través de la identificación grupal con modelos de vida y referentes culturales distintos del éxito y el estatus social de narcotraficantes y líderes de pandillas y bandas criminales. Programas que ponen a los adolescentes y jóvenes en contacto con el arte y expresiones culturales como el deporte son Piel de la Memoria y August Town. Al mismo tiempo, la experiencia de Afro Reggae y de CEFOCINE muestra cómo los adolescentes pueden convertir su creatividad y formas de expresión cultural en un producto que les permite ganar dinero, mantenerse en la escuela y obtener el reconocimiento de la comunidad.
- 14) La prevención terciaria exitosa no siempre se fija como meta la extinción de la pandilla de amigos o que los adolescentes dejen de verlos y estar algún tiempo con ellos. Por un lado, porque esta meta es difícil de alcanzar y se ha mostrado que es, por lo general, poco efectiva; pero además, porque proyectos como el de SERPAZ, por ejemplo, han obtenido logros importantes al aprovechar la estructura de las pandillas existentes, en lugar de promover su rechazo. Así, han involucrado a los pandilleros en proyectos socialmente útiles y enfatizado los aspectos positivos de la pandilla, tales como la seguridad y la contención afectiva y emocional entre los miembros, el apego a normas y disciplinas, la identificación con el grupo. Esta característica no contradice, sin embargo, lo expuesto anteriormente: no se trata de trabajar únicamente con la pandilla, sino de integrar a ésta a otros grupos.



- 15) Los proyectos de prevención terciaria deben incluir el apoyo psicológico profesional para las neurosis traumáticas, el acompañamiento terapéutico a la familia y la asistencia psicopedagógica, como hace el Polígono Industrial Don Bosco, lo que puede explicar sus logros en la rehabilitación.
- 16) Las intervenciones exitosas ofrecen espacios públicos de encuentro e interacción social de los adolescentes y jóvenes con la comunidad —como lo hacen la Fundación La Guaca, Circo Volador y Luta pela Paz—, en los que se construye y restaura la infraestructura comunitaria y social, o bien se incide para que ellos se apropien de ésta y la utilicen, como en el caso del proyecto de la Alcaldía de Bogotá o los Comités de Seguridad Vecinales, en Maracaibo.
- 17) En lugar de proponerse programas de amplia cobertura (nacional o regional) y con estrategias débiles —por la dispersión de recursos—, estas intervenciones exitosas tienden a concentrar sus esfuerzos inicialmente en uno o dos barrios, buscando poco a poco ganar el interés de otras instituciones y sectores de influencia. Funcionan como una “bola de nieve” —es decir, incorporan a nuevos socios a medida que la intervención se va desarrollando— y no al revés —es decir, no se convoca de inmediato a todas las instituciones que actúan en la comunidad sin tener todavía resultados que mostrar ni propuestas muy definidas—. Así lo demuestra la experiencia de la Corporación Región, y más aún, la del programa Fica Vivo. Sin embargo, estas experiencias y otras —como la de Viva Rio— muestran que es recomendable mantener la autonomía en las relaciones con cada institución, generando “redes” no jerárquicas de cooperación que consiguen romper las inercias institucionales que se mantienen en proyectos contruidos alrededor de propuestas “impuestas” desde el nivel central, con objetivos muchas veces globales y poco definidos, como es el caso de los Centros Integrados de Ciudadanía o las acciones formativas en valores del Consejo Nacional de Juventud de Guatemala.
- 18) La importancia dada a los medios y productos de comunicación en las intervenciones exitosas de prevención en las comunidades permite inferir que la percepción que la comunidad tiene de sí misma, así como la forma en que ve a los adolescentes y jóvenes, puede ser modificada si se reconocen y difunden los logros de ellos, las alternativas de acción y las innovaciones producidas en el marco de los proyectos. Además, buenas estrategias de comunicación con la sociedad son útiles para modificar las visiones unilaterales y discriminadoras del problema de la violencia en adolescentes y jóvenes, y comprometen a otros sectores sociales en la búsqueda y el apoyo a las soluciones, como en el proyecto de CEFOCINE y en Viva Rio.
- 19) Es un asunto esencial que los proyectos tengan un formato bien definido, una estructura directiva y un sistema de evaluación que les permitan ser reproducidos a gran escala, posibilitando su transformación en políticas públicas. Es necesario que se promuevan proyectos que declaren explícitamente que su objetivo es la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, y que establezcan metas concretas de reducción de este problema. Es preciso que éstas puedan ser verificadas objetivamente, y que faciliten el seguimiento y la reflexión acerca de los logros.
- 20) Para tener un efecto permanente, los proyectos deben procurar alcanzar niveles de interés público, poder ser transferidos e implementados por el Estado y generar mecanismos de mercado, con el fin de alcanzar su sostenibilidad financiera y disponer de un presupuesto operativo adecuado para la magnitud de sus tareas.
- 21) La violencia de las pandillas genera acciones de venganza tanto por parte de las comunidades mismas como de los organismos de seguridad estatal. Estas reacciones



menoscaban los derechos de los moradores en los vecindarios y estigmatizan especialmente a los adolescentes y jóvenes que viven allí, así como aumentan la probabilidad de que ellos asuman conductas de riesgo asociadas a la violencia. Las intervenciones exitosas —aunque no hay evidencias plenas de su efectividad— buscan modernizar a la policía, promueven que ésta coordine con el sistema judicial, y la ponen bajo el control de las organizaciones comunitarias a través de la cooperación. De esta manera se construyen confianzas imprescindibles para generar otras respuestas que protejan los derechos civiles, al mismo tiempo que se amplían las alternativas no violentas de solucionar los conflictos comunitarios y de convivencia.

- 22) Las intervenciones más efectivas son aquellas en las que la sociedad civil y el Estado delimitan sus roles y funciones, siendo las de este último garantizar y proteger los derechos civiles y sociales de los adolescentes y jóvenes, así como realizar las reformas que permitan crear y sostener oportunidades específicas de inclusión —como la negociación de treguas y el cese al fuego con pandillas—, y tomar medidas contra situaciones concretas de discriminación o generar marcos legales de protección. En esta misma perspectiva, las intervenciones efectivas desde la sociedad civil no se “enamoran” de sus proyectos, sino que tratan de generar las bases de sustentabilidad financiera a través de mecanismos de mercadeo que permitan a la comunidad hacerse cargo de éstos —como en el caso de Afro Reggae— o transferir la experiencia a las políticas públicas.
- 23) En las intervenciones efectivas en las que el Estado se ha involucrado, ha tenido un rol irremplazable en la prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, posibilitando el desarrollo de sentimientos de confianza, la apropiación cívica de los espacios públicos, y el fomento del asociativismo horizontal en las comunidades. De este modo se ha permitido la expresión de demandas y propuestas de la comunidad para incorporarlas en políticas públicas de prevención, y se ha promovido la unificación de criterios de coordinación y consenso con la comunidad con el fin de que las intervenciones de prevención no perjudiquen la convivencia social ni estigmaticen a los adolescentes y jóvenes de un sector.

En contraste, no se encontraron realmente evidencias claras de que el enfoque de género fuera considerado como un factor relevante en la efectividad de las intervenciones sistematizadas; tampoco se encontraron estas evidencias en la revisión de la literatura especializada. En realidad, sólo el proyecto Creciendo en Participación y Protagonismo por una Sociedad sin Violencia tiene acciones que integran a mujeres y hombres —en la perspectiva de discusión y reflexión acerca de los roles sociales de cada género— en las acciones para reducir la violencia sexual y doméstica contra adolescentes y jóvenes, generalmente hijas y esposas o compañeras.

Tampoco se encontraron evidencias —o siquiera datos e informaciones— sobre intervenciones de prevención de la violencia dirigidas a padres y madres adolescentes, así como a jefas de hogar jóvenes, lo que sin duda es un contrasentido si se toma en cuenta el incremento del embarazo de adolescentes en la región y la vulnerabilidad de estas familias a los factores de riesgo que conducen a la violencia y la reproducen de generación en generación. Pensando en esto, los programas y proyectos sociales de prevención de la violencia deberían enfocarse preferentemente en estas familias, proporcionándoles apoyo y asistencia social, así como ofreciendo actividades para sus hijos más pequeños,



tomando en cuenta la ventaja de iniciar tempranamente la prevención de la violencia. Esto lleva a pensar en que es necesaria una mayor coordinación entre las intervenciones de salud, que priorice y defina metas comunes a los distintos sistemas y servicios, y unifique protocolos de identificación, derivación y seguimiento con instancias privadas de prevención y atención, con el fin de realizar una labor más eficaz.

Parece que a pesar de la cantidad de iniciativas de prevención que se dirigen a adolescentes y jóvenes, son pocas las que abordan directamente el problema de la violencia de pareja y sexual. Sin embargo, existe un margen considerable para integrar los conocimientos y las experiencias acumuladas en los programas de salud reproductiva y sexual —que disponen de material didáctico, información y modelos de intervención— en actividades dirigidas a transformar las relaciones y los roles de género que se vinculan con la violencia escolar, la intimidación, la delincuencia y otros problemas de conducta. Las iniciativas que abordan explícitamente el tema, aunque circunscrito al maltrato en las relaciones de pareja, tienden a ser iniciativas independientes patrocinadas por organizaciones que combaten la violencia contra la mujer. Un mayor intercambio entre estas tres intervenciones —prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes, programas de salud sexual y reproductiva, y prevención de la violencia contra la mujer— sería productivo para todas y de gran beneficio en las tareas de reducción de la violencia.



Bibliografía de referencia



Bibliografía de referencia

ABRAMOVAY, M.

2002 *Juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina: desafios para as políticas públicas*. Brasília: UNESCO-BID.

ADORNO, S.

1999 *O adolescente na criminalidade urbana em São Paulo*. Brasília: Ministério de Justiça.

2003 "Exclusão sócio-econômica e violência urbana". En Seminario permanente sobre violencia. San Salvador: PNUD. Disponible en <<http://www.violenciaelsalvador.org/sv/foros.html>>.

AGNEW, R.

1992 "Foundation for a General Strain Theory of Delinquency". En P. M. Sharp, and B. W. Hancock, *Juvenile Delinquency: Historical, Theoretical, and Societal Reactions to Youth*. N. J.: Prentice Hall.

ÁLVAREZ, A.

2005 "Situación de la seguridad en América Latina". En *Seminario permanente sobre violencia*. San Salvador: PNUD. Disponible en <http://www.violenciaelsalvador.org/sv/documentos/otros/seguridad_al.pps#17>.

ANIYAR, L.

1998 "La participación ciudadana en la prevención del delito: antecedentes, debates y experiencias. Los comités de seguridad vecinales". En *La prevención de la violencia como objeto de investigación y de programas de acción*. Reunión de expertos. Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación y Ministerio de Justicia. Disponible en <http://www.secyt.gov.ar/Planplur4/violencia_prevenccion.htm>.

APROCOP

2005 "Estudos comparados que visam descrever e avaliar programas policiais comunitários implantados pelos órgãos de segurança pública, em especial nas áreas geográficas com altas taxas de criminalidade e ou nas comunidades com elevados indicadores de exclusão social". En *Concurso de dotação para pesquisas aplicadas. Programa de prevenção*. Brasília: Ministério de Justiça/SENASP. Disponible en <http://www.mj.gov.br/senasp/pesquisas_aplicadas/anpocs/doc/prevencao/controle%20102.pdf>.

ARBOLEDA, J., P. PETESCH y J. BLACKBURN

2004 *Voces de los pobres de Colombia. Fortaleciendo formas de ganarse la vida, las familias y las comunidades*. Washington, D. C.: Banco Mundial; Bogotá: Alfaomega Colombiana.

ARENDR, H.

2001 *Poder e violência*. Rio de Janeiro: Relume Dumará.

ARRIAGADA, C.

2001 "Servicios sociales y vulnerabilidad en América Latina: conceptos, medición e indagación empírica". En *Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe*. Seminario internacional. Santiago de Chile: CEPAL-CELADE. Disponible en <<http://www.eclac.cl/publicaciones/Poblacion/2/LCL1592/carriagada.pdf>>.

ARRIAGADA, I. y L. GODOY

1999 "Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnósticos y políticas en los años 90". En *Serie de Estudios Sociales CEPAL*. N.º 32. Santiago: CEPAL. Disponible en <<http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloSocial/9/lcl1179/lcl1179e.pdf>>.



ARRIOLA, J.

Propiedad y poder. VIII Jornadas de Economía Crítica. Disponible en <http://www.espaimarx.org/cvb151002_10.htm>.

ASPEM

s/f *Espacios Juveniles*. Presentación en PowerPoint. Lima.

s/f *Proyecto Jóvenes: Reinserción social y ocupacional en los barrios urbanos*. Presentación en PowerPoint. Lima.

BAIRES, S., R. MARTEL, C. ROMERO y C. M. SÁNCHEZ

2005 "Violencia urbana y recuperación de espacios públicos. El caso del área metropolitana de San Salvador". En *Seminario permanente sobre violencia*. San Salvador: Universidad Centroamericana-PNUD. Disponible en <<http://www.violenciaelsalvador.org.sv/documentos/conferencias/espacios-urbanos-violencia.pdf>>.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

La violencia en América Latina. Dimensionamiento y políticas de control. Washington, D. C.: BID. Disponible en <www.iadb.org/res/laresnetwork/studies/st52tor.pdf>.

BARRIONUEVO, G. G.

s/f *Desempleo y seguridad*. Disponible en <<http://galanteh.no-ip.com/TecnoCom/52>>.

BEATO F., C.

2001 "Crime e políticas sociais na América Latina". En *Informativo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública*. Ano 0, n.º1. Belo Horizonte: CRISP-UFMG. Disponible en <<http://www.crisp.ufmg.br/INF01.pdf>>.

2003 "Determinantes da criminalidade em Minas Gerais". En Beato F., C., R. Reis, M. Ottoni, B. Figueiredo y A. M. Silveira. *Programa Fica Vivo: ações simples, resultados efetivos*. En *Informativo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública*. Ano 1, n.º 5. Belo Horizonte: CRISP-UFMG. Disponible en <<http://www.crisp.ufmg.br/ProgramaFicaVivo.pdf>>.

BECK, U.

1998 *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*. Buenos Aires: Paidós.

BEDOYA, D. y JARAMILLO, J.

1991 *De la barra a la banda*. Medellín: El Propio Bolsillo.

BERNALES, E., R. ALBÁN y A. OTÁLORA

2001 *Modernización y condicionamientos sociales en los escenarios actuales de violencia juvenil*. Documento base para la conferencia electrónica organizada por la Organización Iberoamericana de Juventud. Madrid: OIJ. Disponible en <<http://www.oij.org/D-base.exe>>.

BIEHL, L.

2001 *Violencia y juventud. Nota técnica n.º10*. Washington, D. C.: BID. Disponible en <<http://www.iadb.org/sds/doc/SOCNotatecnica10.pdf>>.

BLACKBURN, J.

1999 *Perú: voces de los pobres*. Washington, D. C.: DFID-BM. Disponible en <<http://www1.worldbank.org/prem/poverty/voices/reports/national/per-esp.pdf>>.

BRICEÑO-LEÓN, R. y PÉREZ PERDOMO, R.

1999 *La violencia en Venezuela: dimensionamiento y políticas de control*. Washington, D. C.: BID, documento de trabajo R-373. Disponible en <<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubR-373.pdf>>.

BRITTO, S. de (org.).

1968 *Sociologia da juventude*. Da Europa de Marx à América Latina de hoje. Rio de Janeiro: Zahar Editores.

BRUNEAU, S.

1998 "El empeño de una ciudad: Montreal. La seguridad ciudadana en la ciudad". En *La prevención de la violencia como objeto de investigación y de programas de acción*. Reunión de expertos. Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación y Ministerio de Justicia. Disponible en <http://www.secyt.gov.ar/Planplur4/violencia_prevenccion.htm>.



BUVINIC, M., MORRISON, A. Y SHIFTER, M.

1999 *La violencia en América Latina y El Caribe. Un marco de referencia para la acción*. Washington D. C.: BID. Disponible en <http://www.iadb.org/sds/wid/publication/publication_38_515_s.htm>.

CAMARANO, A. et al.

2001 "Os jovens brasileiros e o mercado de trabalho". *Mercado de trabalho: conjuntura e análise*. Rio de Janeiro: IPEA n.º 17: 31-39.

CARDIA, N., S. ADORNO y POLETO

2003 *Jovens, violência fatal, superposição de carências e mercado de trabalho*. São Paulo: NEV/USP. Disponible en <<http://www.nev.prp.usp.br/>>.

CARPIO, J. y I. NOVACOVSKY (comp.)

1999 *De igual a igual*. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

CARRANZA, M.

2004 *Detención o muerte: hacia dónde van los "pandilleros" de El Salvador*. Rio de Janeiro: COAV/VIVA RIO/ISER/IANSÁ. Disponible en <<http://www.coav.org.br/publique/media/Report%20EI%20Salvador.pdf>>.

CASTRO, A. y ESPINOZA, E.

2005 *Experiencias participativas con adolescentes y jóvenes en proyectos de promoción del desarrollo juvenil y prevención de la violencia*. Lima: OPS-GTZ.

CASTRO, M. et al.

2001 *Cultivando vida, desarmando violências: experiências em educação, cultura, lazer, esporte e cidadania com jovens em situações de pobreza*. Brasília: UNESCO-TELECOM/Fundação Kellogg/BID.

CICHERO, D., FELIU, P. Y MAURO, M.

1999 *Consultations with the Poor. National synthesis report*. Argentina. Washington, D. C.: Banco Mundial, mayo. Disponible en <<http://www1.worldbank.org/prem/poverty/voices/reports/national/arg-esp.pdf>>.

CISALVA

1998 *Dimensionamiento de la violencia en Colombia*. Washington D. C.: BID, documento de trabajo R-339. Disponible en <<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubR-339.pdf>>.

1999 "Vigilancia epidemiológica para la prevención y el control de la violencia en las ciudades". En *Revista Panamericana de Salud Pública*. Vol. 5, n.º 4-5. Washington D. C.

2005 *Experiencias participativas en proyectos de prevención de la violencia con participación de jóvenes*. Cali: OPS-GTZ.

CONCHA-EASTMAN, A. y R. GUERRERO

1999 "Vigilancia epidemiológica para la prevención y el control de la violencia en las ciudades". En *Revista Panamericana de Salud Pública*. Washington: abril y mayo, p. 322-331.

CORNELL, D. G.

1999 *What Works in Youth Violence Prevention*. Virginia Youth Violence Project Charlottesville: University of Virginia. Disponible en <<http://www.curry.edschool.virginia.edu/curry/centers/youthviolence>>.

2000 "Effective Practices in Youth Violence Prevention". In *Juvenile Justice Fact Sheet*. Charlottesville: Institute of Law, Psychiatry, & Public Policy, University of Virginia.

CORPORACIÓN REGIÓN

1997 *Una aproximación a la conflictividad urbana en Medellín*. Medellín (mimeo).

CRUZ, J. M.

2004 "Pandillas y capital social en Centroamérica". En *Maras y pandillas de Centroamérica*. San Salvador: Instituto Universitario de Opinión Pública-Universidad Centroamericana José Simeón Cañas-UCA Editores.

CRUZ, J. M. et al.

1998 *La violencia en El Salvador en los años noventa: magnitud, costos y factores posibilitadores*. Washington, D. C.: BID, Documento de Trabajo R-338. Oct./1998. <http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubR-338.pdf>



CUNILL GRAU, N.

1998 *La reinención de los servicios sociales en América Latina*. Algunas lecciones de la experiencia. Caracas: CLAD. Disponible en <<http://www.clad.org.ve/rev13/Cunill.html>>.

DAAC/IDCT

2003 *Proyecto Jóvenes Tejedores de Sociedad*. Memoria 2001-2003. Mimeo. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

DA GAMA TORRES, H., E. MARQUES, M. P. FERREIRA y S. BITAR

2003 "Pobreza e espaço: padrões de segregação em São Paulo". In *Estudos Avançados*. vol.17, n.º 47. São Paulo.

DAHLBERG, L. L., S. B. TOAL, M. H. SWAHN y C. B. BEHRENS

2005 *Measuring Violence-Related Attitudes, Behaviors, And Influences Among Youths: A Compendium of Assessment Tools*. Atlanta: CD. C. Disponible en <http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/pdf/YV/YV_Compendium.pdf>.

DIÓGENES, G.

1998 *Cartografias da cultura e da violência*. Gangues, galeras e o movimento hip hop. São Paulo: Annablume; Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto.

DOWDNEY, L.

2005 *Ni guerra ni paz. Comparaciones internacionales de niños y jóvenes en la violencia armada organizada*. Rio de Janeiro: COAV/VIVA RIO/ISER/IANSA. Disponible en <<http://www.coav.org.br/publique/media/Livroes.pdf>>.

2003 *Niños en el tráfico de drogas*. Un estudio de caso de niños envueltos en la violencia armada organizada en Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: COAV/VIVA RIO/ISER/IANSA. Disponible en <<http://www.coav.org.br/publique/media/Niños%20en%20el%20Tráfico%20de%20Drogas.pdf>>.

DURSTON, J.

2000 *¿Qué es el capital social comunitario?* Santiago de Chile: CEPAL, Serie Políticas Sociales, n.º 38.

EYZAGUIRRE, H.

1998 *La violencia intencional en Lima metropolitana*. Magnitud, impacto económico y evaluación de políticas de control 1985-1995. Washington, D. C.: BID, Documento de Trabajo R-332. Disponible en <<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubR-332.pdf>>.

FEDESARROLLO

1996 "Salud: análisis epidemiológico de la violencia". En *Coyuntura Social* n.º15. Bogotá.

FOLCH V., F. J. y A. M. VALDIVIESO

1998 "Prevención de la delincuencia en los barrios". En *Conceptos para la prevención y contención del delito*, n.º9. Santiago: Fundación Paz Ciudadana. Disponible en <<http://www.pazciudadana.cl/documentos/9%20.pdf>>.

FOUCAULT, M.

1979 *Un diálogo sobre el poder*. Madrid: Alianza.

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA SALUD

1998 *Análisis de la magnitud y costos de la violencia en la Ciudad de México*. Washington, D. C.: BID, Documento de Trabajo R-331. Disponible en <<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubR-331.pdf>>.

GNT/NUR

1999 *Consultando con los pobres*. Reporte de síntesis nacional. Bolivia. Washington, D. C.: Banco Mundial. Disponible en <<http://www1.worldbank.org/prem/poverty/voices/reports/national/Bol-esp.pdf>>.

GUERRERO, R.

1998 *Violencia en las Américas, una amenaza a la integración social*. En *Revista Centroamericana de Cultura Política*. San José, n.º10.

HADDAD, E. M.

2005 "Projeto de Pesquisa Aplicada em Programas de Prevenção. Instituto Brasileiro de Ciências Criminais". In *Concurso de dotação para pesquisas aplicadas. Programa de prevenção*. Brasília: Ministério de Justiça/SENASP. Disponible en <http://www.mj.gov.br/senasp/pesquisas_aplicadas/anpocs/doc/prevencao/controle%2075.pdf>.



HEIN, A. et al.

2005 "Violencia y delincuencia juvenil: conductas de riesgo autorreportados y factores asociados". En *Seminario Prevenir la violencia y delincuencia juvenil: una tarea pendiente*. Santiago: Fundación Paz Ciudadana. Disponible en <http://www.pazciudadana.cl/archivos_actividades/Presentaciones%20seminario%2014.04.05.pdf>.

HOPENHAYN, H. y F. MIRANDA (coord.).

2004 *La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias*. Santiago: CEPAL, LC/L. 2180. Disponible en <http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloSocial/0/LCL2180PE/CEPAL_OIJ.pdf>.

HOYOS, C.

2002 *Un modelo para la investigación documental. Guía teórica-práctica sobre construcción de estados del arte con importantes reflexiones sobre la investigación*. Medellín: Señal Editora.

KLINSBERG, B.

1999 *El crecimiento de la criminalidad en América Latina: un tema urgente*. Barcelona: IIG, DIALH 29. Disponible en <http://www.iigov.org/dhial/?p=29_01>.

KRAUSKOPF, D.

2002 "Juventud en riesgo y violencia". En *Seminario permanente sobre violencia*. San Salvador: PNUD. Disponible en <http://www.violenciaelsalvador.org.sv/documentos/conferencias/juventud_en_riesgo.pdf>.

KRUG, E., L. DAHLBERG, J. MERCY, A. ZWI y R. LOZANO

2003 *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Publicación Científica y Técnica N.º 588. Washington, D. C.: Organización Panamericana de la Salud. Disponible en <http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/Violencia_2003.htm>.

LANA LEITE, F.

2003 "O programa Fica Vivo! Uma análise sob a perspectiva do capital social". Monografía Curso Superior de Administração. Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Belo Horizonte: CRISP/UFMG. Disponible en <http://www.crisp.ufmg.br/monografia_fica_vivo.pdf>.

LLORENTE, M. V., E. CHAUX y L. M. SALAS

2005 *De la casa a la guerra: nueva evidencia sobre la violencia juvenil en Colombia*. Bogotá: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico.

LONDOÑO, J. L. y R. GUERRERO

1999 *Violencia en América Latina: epidemiología y costos*. Washington, D. C.: BID, documento de trabajo R-375. Disponible en <<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubR-375.pdf>>.

LOOR, K.

2004 *Pandillas y naciones de Ecuador. Alarmante realidad, tarea desafiante. De víctimas a victimarios*. Rio de Janeiro: COAV/VIVA RIO/ISER/IANSA. Disponible en <<http://www.coav.org.br/publique/media/Report%20Ecuador.pdf>>.

MARTÍNEZ F., A.

1999 *Consulta con los pobres en Ecuador*. Informe final. Washington, D. C.: CEPLAES/Banco Mundial. Disponible en <<http://www1.worldbank.org/prem/poverty/voices/reports/national/Ecuaes.pdf>>.

MARX, K.

1984 [1884] *Manuscritos de economía y filosofía*. Madrid: Alianza.

MCALISTER, A.

2000 *Juvenile Violence in the Americas: Innovative Studies in Research, Diagnosis and Prevention*. Washington: OPS-University of Texas/School of Public Health.

MCCORD, J., C. SPATZ W. Y N. CROWELL (edit.)

2001 *Juvenile Crime, Juvenile Justice. Penal on Juvenile Crime: Prevention, Treatment and Control*. Washington, D. C.: National Academy Press.

MEHROTRA A et al.

2000 *Una vida sin violencia: es nuestro derecho*. Nueva York: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.



MELO, M. (coord.)

2000 *Voices dos Pobres do Brasil – Relatório participativo sobre a pobreza* preparado para o Poverty Reduction and Economic Management Network do Banco Mundial. Pernambuco. Disponible en <<http://www1.worldbank.org/prem/poverty/voices/reports/national/brazilpr.>>.

MESQUITA NETO, P. de et al.

2001 *A violência do cotidiano*. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer. Cadernos Adenauer II, n.º1.

MICHAUD, Y.

1989 *A violência*. São Paulo: Ática.

MIHALIC, I. et al.

2001 *Blueprints for violence prevention*. In: *Juvenile Justice Bulletin - US Department of Justice*. Disponible en <[>](http://www.ncjrs.org/pdffiles1/ojdp/187079.pdf).

MINAYO, M. C. DE S. y E. R. DE SOUZA

1999 *Fala, galera: juventude, violência e cidadania*. Rio de Janeiro: Garamond.

1997 “Violência e saúde como um campo interdisciplinar e de ação coletiva”. In *História, ciências, saúde-Manguinhos*. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública. IV (3).

MOGENSEN, M.

2004 *Corner and area gangs of inner-city Jamaica*. Rio de Janeiro: COAV/ISER/VIVA RIO/IANSA. Disponible en <[>](http://www.coav.org.br/publique/media/Report%20Jamaica.pdf).

MORENO MARTIN, F.

1999 “Violence in couples”. *Revista Panamericana de Salud Pública*, vol. 5, n.º 4-5. Disponible en <[>](http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49891999000400008&lng=en&nrm=iso). ISSN 1020-4989.

MOSER, C. y SHRADER, E.

1999 *Crimen, violencia y pobreza urbana en América Latina: hacia un marco de referencia integrado*. Washington, D. C.: Banco Mundial. Disponible en <[>](http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LACInfoClient.nsf/d29684951174975c85256735007fef12/eb7e93c88e1c1767852567ec007e956a/$FILE/cmoser.doc).

NACIONES UNIDAS

1998 *The International Crime Victim Survey in Countries in Transition: National Reports*. Roma: Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia.

NIRENBERG, O., J. BRAWERMAN y V. RUIZ

2000 *Evaluar para la transformación. Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales*. Buenos Aires: Paidós.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS-CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

2005 *Informe sobre la juventud mundial 2005*. Informe del Secretario General. ONU, E/2005/7. Disponible en <[>](http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/635/86/PDF/N0463586.pdf?OpenElement).

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

2003 *Estadísticas de salud de las Américas*. Disponible en <[>](http://www.paho.org).

PASSETTI, E. (coord.).

1999 *Violentados. Crianzas, adolescentes e justiça*. São Paulo: Editora Imaginário.

PAYNE, M. (comp.).

2002 *Diccionario de teoría crítica y estudios culturales*. Buenos Aires: Paidós.

PCUJ

2003 *Conflicto urbano y jóvenes. Estado del arte. Medellín-Bogotá-Cali-Barrancabermeja 1990-2002*. Bogotá: ATI/CJB/IPC/PDPM/CIVIS.



PCUJ, CIVIS y UJTL

2004 *Conflicto urbano y jóvenes*. Memorias, seminario y curso latinoamericano. Bogotá: PCUJ/CIVIS/UJTL.

PEDRAZZINI, Y. et al.

1994 *Jeunes en révolte et changement social. Une sociologie de l'illégitimité au Mexique, au Venezuela en France et au Portugal*. Paris: Éditions L'Harmattan.

PERISSINOTTO, R. M.

2004 "Arendt, poder e a crítica da 'tradição'". *Lua Nova*, n.º 61. Sao Paulo: CEDEC.

PINHEIRO, P. S. et al.

1998 *São Paulo sem medo*. Um diagnóstico da violência urbana. Rio de Janeiro: Garamond.

PIQUET CARNEIRO, L. y L. PHEBO

1998 *Magnitude, custos económicos e políticas de controle de violencia no Rio de Janeiro*. Washington, D. C.: BID, documento de trabajo R-347. Disponible en <<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubR-347.pdf>>.

PLATAFORMA CONFLICTO URBANO y JÓVENES

2003 *Conflicto urbano y jóvenes*. Estado del arte. Medellín-Bogotá-Cali-Barrancabermeja 1990-2002. Bogotá: ATI/CJB/IPC/PDPMM/CIVIS.

RAMÍREZ, I. D.

2004 *Medellín: los niños invisibles del conflicto social y armado*. Rio de Janeiro: COAV/ISER/VIVA RIO/IANSA. Disponible en <<http://www.coav.org.br/publique/media/Report%20Colombia.pdf>>.

RAMOS, C.

1998 *América Central en los noventa: problemas de juventud*. San Salvador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

REDE DE OBSERVATÓRIOS DE DIREITOS HUMANOS

2000 *Os jovens e os direitos humanos*. Relatório de cidadania I e II. São Paulo: Instituto Sou da Paz/USP/PNUD/Ministério de Justiça.

REDLAMYC

2004 Conferencia Internacional sobre Jóvenes Urbanos en Riesgo en América Latina y el Caribe "Familias fuertes, comunidades protectoras y ciudades incluyentes: la experiencia de América Latina y el Caribe." Monterrey. Disponible en <<http://www.redlamyc.info/Eventos/Monterrey%20web%20site%20Korevision.doc>>.

REIMERS, F.

2000 "Educación, desigualdades y opciones de política en América Latina y Chile para el siglo XXI". *Revista Iberoamericana de Educación*. Santiago: OEA/OEI, n.º 23.

REIS S., R. S.

2002 *O disque Direitos Humanos como ação de segurança pública e promoção da cidadania*. Dissertação submetida à avaliação como requisito para a obtenção do título de especialista em criminalidade e segurança pública. Belo Horizonte: CRISP/UFMG. Disponible en <<http://www.crisp.ufmg.br/MonografiaRobson.pdf>>.

RENGIFO, C. et al.

2005 *Jóvenes, conflictos urbanos y alternativas de inclusión*. Bogotá: PCUJ/CIVIS Suecia/ASDI.

REYNA, C. y E. TOCHE

1999 *La inseguridad en el Perú*. Santiago: CEPAL, Serie Políticas Sociales 29.

RIVERA G., A.

s/f *Crisis de la autoridad. Sobre el concepto político de "autoridad" en Hanna Arendt*. Disponible en <<http://www.um.es/dp-filosofia/documentos/crisis-autoridad.doc>>.

RODRÍGUEZ, E.

2002 *Actores estratégicos para el desarrollo: políticas de juventud para el siglo XXI*. México, D. F.: Instituto Mexicano de la Juventud/ Secretaría de Educación Pública.



- 2005 *Políticas públicas y marcos legales para la prevención de la violencia relacionada con adolescentes y jóvenes: estado del arte en América Latina 1995-2004*. Montevideo: OPS/GTZ.
- RUBIO, M.
- 1996 *Capital social, educación y delincuencia juvenil en Colombia*. Bogotá: Documento de discusión.
- 1998 *La violencia en Colombia*. Dimensionamiento y políticas de control. Washington, D. C.: BID, Documento de Trabajo R-345. Disponible en <<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubR-345.pdf>>.
- 2003 "Maras y delincuencia juvenil en Centroamérica". En Llorente, M. V. y M. Rubio (eds.). *Elementos para una criminología local. Políticas de prevención del crimen y la violencia en ámbitos urbanos*. Bogotá: Secretaría de Gobierno de Bogotá, Universidad de los Andes-CEDE, Ediciones Uniandes.
- SALAZAR, A.
- 1996 "Juventud y violencia". En *Jóvenes, una evaluación del conocimiento*. México: Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud.
- SANJUÁN, A. M.
- 1998 "Juventude e violência em Caracas: paradoxos de um processo de perda da cidadania". En Pinheiro P. S. (ed). *São Paulo sem medo: um diagnóstico da violência urbana*. São Paulo: Garamond.
- SEADE
- 1998 *Vinte anos no ano 2000: estudos sociodemográficos sobre a juventude paulista*. São Paulo: SEADE.
- SECRETARÍA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (SENASP)
- 2005 *Perfil das Práticas Cadastradas no Observatório Democrático de Práticas de Prevenção à Violência e Criminalidade*. Brasília: Ministério da Justiça. Disponible en <http://www.mj.gov.br/senasp/prevencao/prevencao_observatorio.htm>.
- SERRANO, J. F.
- 2004 *Menos querer más de la vida*. Concepciones de vida y muerte en jóvenes urbanos. Bogotá: Universidad Central-DIUC/Siglo del Hombre Editores.
- SHERMAN, L et al.
- 1997 *Preventing Crime: What Works, What doesn't, What's Promising*. A report to the United States Congress. Maryland: Department of Criminology and Criminal Justice. University of Maryland. Disponible en <<http://www.ncjrs.org/works/>>.
- SOUZA, E. DE
- 2002 *Avaliação do Policiamento Comunitário em Belo Horizonte*. Dissertação submetida à avaliação como requisito para a obtenção do título de Maestrado da FAFICH/UFMG. Belo Horizonte: CRISP/UFMG. Disponible en <<http://www.crisp.ufmg.br/teseh.pdf>>.
- SUÁREZ R., G.
- 2005 "Espacios urbanos y prevención de la violencia. La experiencia de Bogotá". En *Seminario permanente sobre violencia*. San Salvador: PNUD. Disponible en <http://www.violenciaelsalvador.org.sv/documentos/conferencias/conferencia_gabriel_suarez.pdf>.
- SUDARSKY, J.
- 1998 *El capital social de Colombia. La medición nacional con el BARCAS*. Bogotá: DNP.
- TAYLOR, I., P. WALTON y J. YOUNG (orgs.)
- 1980 *Criminología crítica*. Rio de Janeiro: Edições Graal.
- THORNTON, T. et al. (comp.)
- 2000 *Práticas ótimas para la prevención de la violencia juvenil: libro de referencia para la acción comunitaria*. Atlanta: CDC. Disponible en <[http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/praticasoptimas/Best%20Practices%20\(Span\).pdf](http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/praticasoptimas/Best%20Practices%20(Span).pdf)>.
- WASELFSZ, J.
- 2000 *Mapa da violência II. Os jovens do Brasil. Juventude, violência e cidadania*. Brasília: UNESCO.



WEAVER, K. y M. MADDALENO

1999 "Youth Violence in Latin America: Current Situation and Violence Prevention Strategies". *Revista Panamericana de Salud Pública*, vol. 5, n.º 4-5. Disponible en <http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102049891999000400025&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1020-4989.>.

WEINSTEIN, J.

1992 *Riesgo psicosocial en jóvenes*. Santiago de Chile: PREALC.

WIELANDT, G.

2005 *Hacia la construcción de lecciones del posconflicto en América Latina y el Caribe. Una mirada a la violencia juvenil en Centroamérica*. Santiago de Chile: CEPAL, serie Políticas Sociales, n.º 115.

YEPES, F. (coord.).

2005 *Medición de impactos del programa de escuelas y bandas de música de carácter sinfónico de la Alcaldía de Medellín*. Bogotá: Econometría Consultores.

ZALUAR, A.

1994 *Condomínio do diabo*. Rio de Janeiro: Revan/UFRJ.



Anexo





Anexo: Sistematización de intervenciones de prevención con estrategias de familia y comunidad seleccionadas

Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
<p>1. August Town Sports and Community Development Foundation</p> <p>Jamaica</p> <p>Fuente: Mogensen 2004</p>	<p>Responsabilidad privada (ONG comunitaria), intervención en el nivel municipal-barrial con apoyo del Estado.</p> <p>Está dirigida a niños, adolescentes y jóvenes entre 8 y 20 años en August Town, una comunidad con uno de los más altos índices de violencia en la isla.</p> <p>Se busca que los adolescentes y jóvenes desarrollen capacidades para evitar involucrarse en pandillas juveniles y apliquen formas no violentas para resolver los conflictos de convivencia en los barrios.</p> <p>Se interviene a través del fútbol, así como de talleres sobre resolución no violenta de conflictos, educación en derechos humanos y desarrollo de <i>lifeskills</i>. Además, la organización ha enviado a líderes comunitarios juveniles –hombres y mujeres– a capacitaciones especiales en Estados Unidos sobre negociación. Posteriormente ha tomado parte en el arreglo de una tregua entre pandillas rivales en una de las zonas más violentas de la ciudad, y ha implementado tareas de policía comunitaria en su comunidad.</p> <p>No hay evidencia a favor sobre la aplicación de un enfoque de género.</p> <p>Efectos:</p> <p>A partir del inicio del programa (1997), se reporta una disminución de 50% en los homicidios de jóvenes y de 56% en las actividades criminales. Esta tregua se ha sostenido hasta el último reporte (año 2004), sin contar las muertes registradas durante las elecciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay evaluaciones disponibles. 2. La intervención se adecua a los consensos científicos, salvo en la mediación entre pares. 3. La intervención ha sido aplicada con suficiencia, y sus efectos parecen plausibles. 4(a). La intervención es relevante con el contexto. 4(b). La base teórica es parcialmente consistente. 4(c). Hay elementos de sustentabilidad política y financiera, así como capacitación del personal y fuerte apoyo comunitario. 	<p>Probablemente efectiva, aunque haría falta más evidencias e información sobre la efectividad de la mediación ante las pandillas.</p>
<p>2. Centros Integrados da Cidadania (CIC) - Governo do Estado de São Paulo</p> <p>Brasil</p> <p>Fuente: Haddad 2005</p>	<p>Responsabilidad pública (nivel estadual), con intervención municipal-distrital.</p> <p>Distritos de la ciudad de São Paulo donde existen barrios con altos índices de violencia interpersonal y delincuencia organizada.</p> <p>Integración territorial a través de un local barrial gestionado participativamente con la comunidad y sus organizaciones sociales, donde operan instituciones responsables por la administración de la justicia, con la tarea</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se dispone de evaluaciones, aunque parece que no se orientan a los resultados sino más a la gestión del proyecto. 2. No hay referencias en la literatura revisada sobre intervenciones de mediación comunitaria con estas características. 3. Suficiencia incompleta; no hay datos para evaluar la plausibilidad. 	<p>Presumiblemente no efectiva en la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes.</p>





Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>de realizar funciones de mediación para la resolución de conflictos, sean formales o informales, buscando la prevención de la violencia.¹</p> <p>Dificultades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevalecen inercias institucionales que dificultan las relaciones horizontales entre la comunidad y los órganos de justicia, así como una estructura y una cultura institucional orientada al tratamiento punitivo del conflicto antes que a su prevención.² - En consonancia con lo anterior, cada institución mantiene sus propios proyectos dentro del CIC, lo que resulta en fragmentación, falta de objetivos comunes y ausencia de criterios compartidos. <p>No se menciona nada que haga suponer o negar la aplicación de un enfoque de género.</p> <p>Efectos:³</p> <ul style="list-style-type: none"> - No obstante estas dificultades, también se observaron prácticas innovadoras, tendientes a superar esta fragmentación, por parte de algunos operadores institucionales del proyecto, aunque no se han evaluado. - Ampliación del acceso a la justicia identificada en conflictos que ahora pueden ser solucionados en un marco formal de derechos sociales y expedientes alternativos. 	<p>4(a). La intervención no parece ser relevante en tanto parece existir un bajo nivel de participación comunitaria.</p> <p>4(b). Se dispone de una base teórica consistente desde el derecho y la filosofía.</p> <p>4(c). Sustentabilidad cuestionada.</p>	
<p>3. Child First</p> <p>Jamaica</p> <p>Fuente: Mogensen 2004</p>	<p>Responsabilidad privada (ONG comunitaria), de intervención municipal-barrial con apoyo del Estado.</p> <p>700 niños y adolescentes, hombres y mujeres, habitantes de la calle o en situación de calle, con edades entre 3 y 18 años, en Spanish Town.</p> <p>Se trabaja tanto con los niños y adolescentes como con sus familias; los padres, por ejemplo, son asesorados sobre cómo mejorar sus ingresos. Los niños y adolescentes reciben entre-</p>	<p>1. No hay evaluaciones disponibles.</p> <p>2. La intervención está adecuada a los consensos científicos.</p> <p>3. La intervención ha sido aplicada con suficiencia, pero no se mencionan sus efectos.</p> <p>4(a). La intervención es relevante con el contexto.</p> <p>4(b). Hay consistencia entre la intervención y la teoría.</p>	<p>Es probable que sea efectiva pero no hay suficiente evidencia para afirmarlo. Además, hay un elemento innovador, como es la tentativa de una socialización alterna al modelo de la pandilla, pero no hay información.</p>



1 Sobre los fundamentos teóricos de la intervención, se menciona que ésta está “[...] focada na resolução das demandas, na complexidade em que se apresentam – diferentemente da intervenção convencional que procura enquadrar e traduzir as demandas segundo a oferta de institutos jurídicos em cada instância do sistema” (Haddad 2005: 8).

2 “A pesquisa revelou a persistência da dificuldade em substituir o modus operandi da atuação repressiva pela metodologia de trabalho fundada na mediação dos conflitos interpessoais. Todavia se verifique a reprodução do discurso de valorização de formas alternativas de resolução, ainda se atribui um papel de centralidade a procedimentos típicos repressivos e práticas formalistas” (Haddad 2005: 7).

3 El proyecto ha sido profusamente investigado y evaluado desde 1999 (Haddad, Sinhoretto e Pietrocolla 2003; Mello 2003; Villaga 2003; Muszkat 2003; SENASP 2003; Haddad e Sinhoretto 2003; Araujo 2001; Sinhoretto e Pietrocolla 1999), siendo objeto de numerosos y difíciles debates en círculos civiles, académicos y políticos, debido a su acelerada difusión y a las diferentes opiniones sobre su eficacia (actualmente, hay en funcionamiento al menos 15 CIC en diferentes barrios de la ciudad).



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>namiento en habilidades sociales y participan en actividades de refuerzo escolar para evitar que abandonen la escuela, incluyendo ayuda con los gastos escolares. También se centran en las relaciones entre niños y adolescentes con jóvenes, tratando de romper la socialización a través de modelos desviantes, como los pandilleros.</p> <p>No se menciona el enfoque de género ni los efectos del programa, aunque es una iniciativa que ha sido reconocida por el gobierno jamaicano.</p>	<p>4(c). Hay elementos de sustentabilidad política y financiera.</p>	
<p>4. Circo Volador - Investigación y Desarrollo de Proyectos Submetropolitanos (IDESPRO)</p> <p>México</p> <p>Fuente: <http://www.habitat.aq.upm.es>; <http://www.circovolador.org>.</p>	<p>Responsabilidad privada (ONG), con intervención municipal-barrial.</p> <p>Se trabaja con adolescentes y jóvenes de un barrio periférico del área metropolitana del Distrito Federal.</p> <p>Como resultado de un proyecto de investigación con metodologías participativas y de enfoque cualitativo, se identificaron problemas relacionados con la situación de adolescentes y jóvenes en la periferia de la ciudad de México, en cuanto a los vecindarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cercanía de varios barrios degradados. • Frecuentes robos y violencia. • Pobreza, adicción y niños de la calle. • Cercanía de un enorme mercado mayorista de fruta y verdura. • Escasa presencia policial. • Servicios públicos ineficaces. • Falta de oferta cultural y de entrenamiento para la zona en general. <p>Al mismo tiempo, la investigación procuró identificar y contactar a grupos de jóvenes pobres y excluidos, para “averiguar qué pensaban, qué veían y/o qué producían, en otras palabras, sus capacidades y fuerzas, en base a las cuales [...] diseñamos propuestas de trabajo que les dieran la oportunidad de empezar a influir en su entorno”. Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.⁴</p> <p>Esto se tradujo en la creación y puesta en funcionamiento de una <i>infraestructura social</i>, representada por un centro cultural, el Circo Volador: “Un viejo y abandonado cine de 2.000 metros cuadrados fue restaurado por</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay evaluaciones disponibles, aunque “Periódicamente, se remiten informes económicos acerca de los fondos obtenidos y su uso en los proyectos a los inversores solidarios desde la oficina de contabilidad, responsable de la administración financiera del proyecto”, así como hay investigaciones –especialmente del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Unidad de Estudios de la Juventud, de la UNAM– que han analizado y respaldado la efectividad del proyecto en la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes. 2. La intervención se ajusta a los consensos científicos en prevención de la violencia mediante estrategias en el nivel comunitario. 3. La intervención ha sido aplicada con suficiencia y sus efectos parecen plausibles con el fortalecimiento de factores de protección en el área del proyecto. 4(a). La intervención es relevante con el contexto, partiendo de la generación de un sentido de apropiación por parte de los adolescentes y jóvenes vinculados. 4(b). La base teórica del proyecto está explicitada y coherentemente desarrollada en las hipótesis de 	<p>Hay evidencia de efectividad en las informaciones disponibles.</p>



4 “Se ha usado el texto *Common Culture*, del antropólogo cultural británico Paul Willis, de 1994, como referencia conceptual para integrar valores y reconstruir el tejido social entre los diferentes sectores mediante el refuerzo de la identidad juvenil (hacia los pobres) y la construcción y diseminación de lenguajes comunes (hacia sectores integrados)”. Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>los jóvenes que trabajaban en el proyecto, a los que se les dio obligaciones administrativas y operativas, además de animarles a actuar como instructores en determinados talleres [...] El esfuerzo por implicar a la comunidad en la remodelación y restauración del área tenía como objetivo incorporar el lugar a su vida cotidiana". Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.</p> <p>Por otro lado, se ha hecho el esfuerzo de identificar a socios que colaboren con la iniciativa, recurriendo a dos estrategias principales: "[...] en primer lugar, negociar un espacio físico donde desarrollar actividades basadas en las sugerencias de los jóvenes de clase baja, para que actúe como diseminador antes que como catalizador, y en segundo lugar, asegurar que la programación temática del proyecto sea coherente y facilite la participación de diferentes clases sociales" —disponible en <www.habitat.aq.upm.es>—, evitando la estigmatización de la violencia como un asunto de los pobres.</p> <p>Algunas actividades del Circo son:</p> <p>Realización de talleres, cursos de verano para adolescentes y jóvenes, obras de teatro, programas de radio, realización de videos, "maratones" de cine, espectáculos de lucha libre, club de libros y revistas, diseño y administración de páginas web, apoyo a expresiones culturales hip-hop, concursos de artistas jóvenes, festivales y fiestas comunitarias, conciertos y actuaciones musicales, además de proyectos de investigación aplicada, publicaciones académicas y tesis profesionales.</p> <p>Se menciona específicamente como logro la incorporación de una perspectiva de género en los conceptos, las estrategias y las acciones del proyecto: "Se ha incorporado la perspectiva de género, cambiando patrones culturales machistas. Mientras que antes el 95% de los participantes eran hombres, ahora hay un equi-</p>	<p>trabajo, metodologías y actividades.⁵</p> <p>4(c). Hay elementos de sustentabilidad técnica, financiera y social, con apoyo de la comunidad.⁶ El proyecto es replicado y transferido a gobiernos municipales para formular planes y estrategias para el desarrollo social de la gente joven, así como a organismos públicos y privados de otros países, mediante convenios y asesoría a Homies Unidos (El Salvador) y al Instituto de Planeamiento de la Arquitectura y la Facultad de Planeamiento de la Universidad Central de Venezuela, a través de estudios sobre la seguridad en zonas urbanas.</p>	

5 Se ha publicado un libro, *Juventud, cultura y política social*, que proporciona una explicación del modelo metodológico que se aplica en el proyecto.

6 "Actualmente, aproximadamente el 35% de los recursos financieros se obtienen gracias a los acuerdos de Inversiones Solidarias con varios socios, con los que definimos los objetivos de trabajo en base a un Programa Operativo Anual de actividades. El 65 por cien restante de los fondos necesarios se consiguen mediante la organización de eventos tales como: conciertos, cine, teatro, etc. cerrando de esta manera el ciclo de participación: la contribución de los jóvenes que acuden a estos eventos, normalmente en una mejor situación económica, sirve para pagar el mantenimiento del espacio y sus actividades, apoyando así a los que carecen de esos recursos [...] Se han establecido procesos para diversificar las fuentes de financiación y movilización de recursos, diseñando proyectos multidisciplinarios dirigidos a jóvenes". Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.



→ Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>librio entre sexos debido a la participación de las mujeres”. Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.</p> <p>Efectos:</p> <p>Durante 14 años de trabajo, la organización ha alcanzado los siguientes logros:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Identificación, integración y trabajo con los grupos sociales existentes en el área a través de actividades que fortaleciesen sus vínculos sociales, permitiendo a cambio la reconstrucción gradual del tejido social. – Construcción de redes sociales con grupos comunitarios en el área metropolitana. – Coordinación y trabajo con oficinas gubernamentales y ONG. – Visibilidad del proyecto como foro de expresión y aprendizaje en beneficio de la comunidad. – Refuerzo de las instituciones con el apoyo de organizaciones internacionales. – Revalorización, construcción y refuerzo de la identidad juvenil. – Construcción de procesos de autogobierno y autogestión de las comunidades del área de intervención. – Creación de estrategias que eliminan los procesos de exclusión social y discriminación generacional y de género. – Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat (Dubai, 2004), y catalogada con mención especial. 		
<p>5. Comités de Seguridad Vecinales</p> <p>- Dirección de Prevención del Delito del estado de Zulia</p> <p>Venezuela</p> <p>Fuente: Aniyar 1998</p>	<p>Responsabilidad pública (nivel estadual), con intervención municipal-barrial.</p> <p>120 barrios pobres de Maracaibo y de otras ciudades del estado de Zulia.</p> <p>Fomento y apoyo a comités de seguridad vecinal integrados por asociaciones de vecinos, los agentes policiales —preferentemente habitantes de la zona— asignados a cada comité, el prefecto o jefe civil de la parroquia, los representantes de iglesias, vecinos voluntarios, comerciantes, representantes de las escuelas y de las organizaciones juveniles, para:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluaciones cualitativas por reportes de los mismos comités; otros datos fueron hallados inconsistentes. 2. Adecuada según los consensos científicos. 3. Suficiencia completa; no hay datos para elaborar la plausibilidad. 4(a). La intervención es presumiblemente relevante. 4(b). Se puede asumir una base teórica consistente. 4(c). Sustentabilidad. 	<p>Probablemente efectiva en reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes, pero falta más evidencia.</p>



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<ul style="list-style-type: none"> – Disminuir la percepción de inseguridad en los barrios. – Desestimular la brutalidad policial. – Reforzar la cohesión y la organización barrial.⁷ – Facilitar el reconocimiento de los modos de producción delictiva en cada zona. – Identificar y valorizar respuestas sociales e imaginativas al problema de la violencia. <p>A través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento de la infraestructura barrial para aprovechar los espacios públicos abandonados con el fin de realizar en éstos actividades comunitarias. • Programas con organizaciones de la sociedad civil para reducir la violencia doméstica y sexual. • Mejoramiento de la capacidad de respuesta de la policía (comunicaciones y dotación). <p>Enfoque de género: violencia sexual y doméstica.</p> <p>Efectos:</p> <p>Reducción de la corrupción y de la brutalidad policiales, así como del sentimiento de inseguridad; aumento de la credibilidad en la función policial.</p>		
<p>6. Consejo Nacional de Juventud (CONJUVE). Presidencia de la República</p> <p>Guatemala</p> <p>Fuente: Lisette Rosales (encuesta)</p>	<p>Responsabilidad pública (nivel nacional), con intervención nacional.</p> <p>Se trabaja con adolescentes entre 12 y 18 años, ladinos e indígenas, con o sin educación, en el área capitalina y en cabeceras departamentales. Se dirige a adolescentes en situación de calle, adolescentes en riesgo de establecimientos educativos, y adolescentes en el nivel comunitario. Su situación ocupacional ha sido desde estudiantes a trabajadores.</p> <p>El programa está dirigido a la comunidad y a la familia, puesto que brinda apoyo psicológico para la resolución de conflictos en el nivel familiar y a la vez aporta en forma integral al desarrollo personal de los jóvenes por medio de talleres, conferencias y docencia, transmitiendo el concepto de prevención y cultura de paz.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se accedió a evaluaciones. 2. Inadecuada según consensos científicos (una sola estrategia —capacitaciones—, no se trabaja con la familia ni con la comunidad, no hay objetivos claros de prevención de la violencia en la comunidad y la familia). 3. No hay datos para evaluar la suficiencia y la plausibilidad. 4(a). La intervención no parece relevante en razón de la amplitud de los objetivos y del grupo de destinatarios. 4(b). No se encuentra una base teórica consistente. 	<p>Presumiblemente no efectiva en la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes.</p>



7 "Hoy sabemos que, para que un modelo participativo vecinal tenga éxito es necesario, en primer lugar, asegurar las siguientes cosas: 1) que la comunidad misma identifique cuáles son los problemas; 2) que los objetivos sean compartidos; 3) que el liderazgo sea igualmente compartido; y, preferentemente, 4) la participación de jóvenes" (Aniyar 1998: 27).



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>El programa de prevención consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitar a jóvenes vulnerables con talleres técnico-ocupacionales para que aprendan un oficio y puedan así optar por un empleo o formar su propia "microempresa". Darles información sobre riesgos a los que están expuestos, como el abuso sexual, la explotación sexual comercial, el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. - Realización de talleres de motivación y actividades para el mejoramiento de las relaciones interpersonales y el desarrollo de destrezas. - Capacitación en temas de formación y desarrollo integral, así como en herramientas para la resolución de conflictos emocionales, familiares y académicos. <p>No aplican enfoque de género: "Trabajamos con ambos sexos sin hacer énfasis en ninguno de ellos. Como Consejo, sí se trabaja equidad de género y en contra de la discriminación, pero no desde el punto de vista de este programa".</p> <p>Efectos: No mencionan ninguno, pero califican su efectividad como "alta" por factores institucionales (¿?).</p>	<p>4(c). No hay información para evaluar su sustentabilidad, pero técnicamente no parece tenerla.</p>	
<p>7. Consejo Nacional de Seguridad Pública-Presidencia de la República</p> <p>El Salvador</p> <p>Fuente: Carranza 2004</p>	<p>Responsabilidad pública (nivel nacional), con intervención municipal y barrial.</p> <p>Cien comunidades de 17 municipios del país (principalmente San Salvador, Soyapango, Ilopango y Apopa).</p> <p>Formulación e implementación de un programa especial de prevención social de la violencia y de la delincuencia, con énfasis en la participación ciudadana.</p> <p>No se centra en un solo tema específico (niños de la calle, maltrato infantil) sino en las comunidades con factores de riesgo. Interviene a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformación de organizaciones comunitarias específicas para la prevención de la violencia. • Reforzamiento escolar a jóvenes. • Construcción de canchas deportivas y espacios comunitarios. • Mejoramiento del acceso a la policía. • Transformación del entorno barrial focalizando lugares considerados 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay evaluaciones disponibles. 2. Adecuada según consensos científicos. 3. Suficiencia incompleta; no hay datos para evaluar la plausibilidad. 4(a). La intervención es presumiblemente relevante. 4(b). Se puede asumir una base teórica consistente. 4(c). Poca sustentabilidad en el nivel político y financiero. 	<p>Probablemente no efectiva para reducir la violencia en adolescentes y jóvenes, pero falta más evidencia.</p>



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>peligrosos por la comunidad (mala iluminación, arbustos altos, etcétera).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organización y apoyo a jornadas deportivas (fútbol, etcétera) y a actividades artísticas con participación de jóvenes. Formación laboral y ubicación en empleos. • Realización de jornadas sanitarias con personal de salud. <p>No se percibe enfoque de género.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – El personal a cargo del programa menciona “buenos resultados”.⁸ – Incidencia incipiente en técnicos y funcionarios públicos del nivel municipal en el tema de prevención. 		
<p>8. Creciendo en Participación y Protagonismo por una Sociedad sin Violencia. Proyecto Voces de la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE) y la Congregación de Religiosas Adoradoras Esclavas del Smo. Sacramento y de la Caridad.</p> <p>Argentina</p> <p>Fuente: <http://www.habitat.aq.upm.es></p>	<p>Responsabilidad privada, con intervención municipal-barrial.</p> <p>La intervención se realiza a través de un equipo de profesionales y voluntarios, en dos niveles: el de prevención primordial y primaria de la violencia sexual en la ciudad de Rosario, y en un nivel institucional de prevención secundaria-terciaria con 75 adolescentes víctimas de violencia sexual o en situación de vulnerabilidad, desde la perspectiva de la resiliencia.</p> <p>Se implementa a través de talleres, seminarios, difusión en los medios y otros eventos en red con otras organizaciones, dirigidos a docentes, profesionales, familias, niños/as y adolescentes, estudiantes de ciencias sociales, mujeres y madres en situación de prostitución, instituciones públicas y privadas, y comunidad en general.</p> <p>Además, se ofrece asesoría y tratamiento psicoterapéutico a las adolescentes y sus familias, cubre las necesidades básicas insatisfechas, y a través de un centro de capacitación, procura mejorar los ingresos, la autoestima y la calidad de vida de los padres de familia.</p> <p>Como principios de trabajo, el proyecto procura:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Conseguir una amplia participación de niños, niñas y adolescentes como agentes multiplicadores. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se accedió a evaluaciones, pero se menciona que “Los informes elevados cada año con la práctica realizada, logros, impacto y nuevas propuestas para la atención y formación de las niñas y adolescentes, hacen posible una evaluación favorable y el aporte de nuevos recursos, junto a la valoración y reconocimiento de los diversos grupos de la comunidad”. Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>. 2. La intervención se adecua a los consensos científicos vigentes para el tema. 3. El proyecto se realiza con suficiencia y demuestra plausibilidad en los efectos. 4(a). La intervención toma en cuenta los aspectos culturales y sociales del contexto. 4(b). La base teórica, especialmente, está explicitada con claridad y es consistente con los objetivos y la metodología de intervención. 4(c) Hay elementos de sustentabilidad financiera, social y política. La intervención se 	<p>Hay evidencias suficientes de efectividad.</p>

8 “Sin embargo, nuestro entrevistado reconoció que a pesar de los buenos resultados de los programas, en el país no existe una forma unificada de entender la prevención. Así, muchas veces, la prevención es interpretada como capacitación a través de talleres, seminarios, etc., y nunca se piensa en una prevención desde la vida de la comunidad. De cualquier forma, y todavía más lejos, el gran problema es que no se piensa en términos generales que la prevención sea una verdadera alternativa para los problemas de la violencia en el país” (Carranza 2004: 44).



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar el trabajo en equipo y en red entre grupos comunitarios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. - Obtener la implicancia de los medios de comunicación social. <p>Se aplica el enfoque de género.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El trabajo de capacitación, formación y movilización realizado con más de 3.000 niños, niñas, jóvenes y adultos multiplicadores. - Tratamiento y acompañamiento realizado a 75 mujeres adolescentes que han mejorado sus condiciones de vida por el acompañamiento y la formación alcanzada a nivel integral. - Posicionamiento del proyecto, al recibir demandas crecientes de capacitación, asesoramiento y acompañamiento por situaciones de violencia sexual contra niños/as y adolescentes. - Incidencia pública en la reglamentación de leyes nacionales y ordenanzas municipales para la prevención y detección temprana del abuso sexual y el maltrato infantil, a través de la participación en redes y alianzas estratégicas.⁹ - Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat, y catalogada como best. 	<p>realiza con calidad y cuenta con sistemas de monitoreo y <i>accountability</i>.¹⁰ La experiencia ha sido replicada en otros proyectos y ciudades, y se ha transferido a la política pública municipal y nacional.</p>	
<p>9. Fundación La Guaca</p> <p>Colombia</p> <p>Fuente: <http://www.habitat.aq.upm.es> <http://www.laguaca.org></p>	<p>Responsabilidad privada (ONG comunitaria), con intervención departamental-municipal, en barrios urbanos marginados y comunidades rurales.</p> <p>Dirigido e implementado a través de niños, adolescentes y jóvenes, con sus familias, en barrios marginados de Cali y comunidades rurales y urbanas en los departamentos de Valle y Cauca —un proceso que va desde “El proyecto [que] comenzó como un trabajo de barrio, luego se pasó a la ciudad y luego a los departamentos vecinos”, disponible en <www.habitat.aq.upm.es>, a partir de la elaboración de</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay evaluaciones disponibles en los sitios web. 2. La intervención se adecua a los consensos de la comunidad científica. 3. La intervención ha sido aplicada con suficiencia, y dado su reconocimiento y replicabilidad, sus efectos parecen plausibles. 4(a) La intervención es relevante con el contexto. 4(b) No es posible evaluar la base teórica de la inter- 	<p>Probablemente efectiva.</p>

9 “La necesidad de trabajar en red nos ha permitido instalar el tema en organizaciones gubernamentales como la Municipalidad de Rosario, Área de la Niñez, en organizaciones no gubernamentales, escuelas, sindicatos, comedores, profesionales de diferentes áreas, etc.”. Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.

10 “La práctica implementada tiene el reconocimiento de la comunidad y son muchas las instituciones que espontáneamente se implican en el proyecto como también algunos profesionales, madres de familia, y los mismos esposos de las mujeres de los equipos. Las jóvenes estudiantes de trabajo social se comprometen desinteresadamente con el proyecto al igual que algunos medios de comunicación, como la radio o la televisión, que ofrecen sus espacios para cuando los necesitamos”. Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.



→ Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>proyectos ciudadanos, comunitarios e institucionales con énfasis en adolescentes y jóvenes, dirigidos a la participación y movilización comunitaria en prevención de la violencia.</p> <p>Desde 1996 se ha trabajado con cerca de 11.000 personas en los departamentos involucrados, que han participado en actividades lúdicas, deportivas y artísticas, recuperación de la autoestima, promoción de estilos de vida saludables, pedagogía de la ternura y desarrollo humano; de igual forma, en el fortalecimiento de las relaciones de familia y de sus valores, reconstrucción y apropiación de la historia familiar.</p> <p>Se priorizó la prevención de la violencia como objetivo principal de la Fundación, enfocada —según su propia definición— como una “minimización de las potencialidades y capacidades de los individuos, grupos y comunidades a nivel físico, psíquico y espiritual”. Disponible en <www.habitataq.upm.es>.</p> <p>Se trabaja a partir de proyectos concretos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bibliotecas comunitarias, que evitan la deserción y el ausentismo escolar, procurando establecer un nexo entre la escuela, la comunidad y la familia, proporcionando refuerzo en las tareas escolares, motivación y apoyo a adolescentes y jóvenes fuera del sistema escolar, programas de validación e ingreso en institutos de enseñanza superior. – Clubes juveniles en los que se promueve y fortalece la organización juvenil orientada al trabajo comunitario, con seguimiento personalizado de los adolescentes y jóvenes, y asesoría psicológica a sus familias con el objeto de mejorar la comunicación entre padres e hijos. – Escuela de Liderazgo Ecológico, que permite a adolescentes y jóvenes implementar grupos de estudio sobre la realidad, conociendo y aprovechando la legislación ambiental, para impulsar el arte en la ecología y en el hábitat humano. <p>Etapas de desarrollo de proyectos comunitarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sensibilización barrial y sectorial, e identificación de líderes comunitarios actuales o potenciales. – Conformación y cualificación de grupos de base, con capacitación 	<p>cción, que no está explicitada.</p> <p>4(c) Hay elementos que apuntan a la sustentabilidad de la experiencia: sólidos nexos con las comunidades, sistemas de monitoreo, réplica y transferencia a organismos privados y públicos, relaciones nacionales e internacionales con gobiernos y donantes.</p>	





Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>en prevención de la violencia y monitoreo de resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divulgación y promoción, involucrando directamente en su ejecución a adolescentes, jóvenes y familiares. - Circularidad evaluativa, poniendo énfasis en los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria. <p>La Fundación implementa sus actividades con enfoque de género, estableciendo indicadores específicos en el tema de la equidad y lucha contra la discriminación.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adolescentes, jóvenes y padres de familia son gestores culturales y comunitarios que se han convertido en animadores de sus comunidades. • Conformación de 17 organizaciones civiles en los barrios y comunidades donde la Fundación ha trabajado, que han aprovechado la experiencia y recibido supervisión de La Guaca. • La equidad de género es fundamental y especialmente en la prevención de la violencia, a través de la generación de empleo en las familias y el mercadeo de productos elaborados por los beneficiarios. • Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat y catalogada como <i>best</i>. 		
<p>10. Grupo Cultural Afro Reggae</p> <p>Brasil</p> <p>Fuente: <http://www.afroreggae.org.br> Dowdney 2005, 2003</p>	<p>Responsabilidad privada (ONG), con intervención municipal-barrial en varias ciudades del Brasil, sobre todo en Rio de Janeiro.</p> <p>Se dirige especialmente a adolescentes y jóvenes de <i>favelas</i> con altos índices de crimen organizado, infraestructura social precaria y bajos índices de desarrollo social.</p> <p>Apoya iniciativas individuales de jóvenes, adaptando su oferta a los intereses de aquellos que desean desvincularse de las pandillas o evitar entrar en ellas, al tiempo que procuran rescatar y valorizar la cultura negra, en particular el <i>reggae</i>, el <i>soul</i> y el <i>hip-hop</i>.</p> <p>Afro Reggae ofrece a los jóvenes educación y formación cultural y artística, con el objeto de que puedan desarrollarse como ciudadanos con plenos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay evaluaciones disponibles en el sitio web ni en las fuentes consultadas. 2. La intervención parece adecuada al consenso científico, pero hace falta más información. 3. La intervención ha sido aplicada con suficiencia, pero no hay forma de verificar la plausibilidad. 4(a). La intervención es relevante con el contexto, dadas las características e intereses de la población meta. 4(b). No es posible evaluar la base técnica de la intervención, que no está explicitada, aunque hay elementos para suponer que es adecuada. 	<p>Probablemente efectiva, pero resulta difícil comparar las múltiples intervenciones que realizan y saber con exactitud cuáles son los elementos que explican la efectividad. Surge la pregunta acerca de cuán transferible y replicable es la experiencia como política pública para la prevención de la violencia, o sólo funciona en unas <i>favelas</i> y no en otras. Además, está pendiente la cuestión acerca de su efectividad a largo plazo en la prevención de</p>



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>derechos, y consigan encontrar alternativas al subempleo y la violencia criminal organizada.</p> <p>Trabaja sobre la base de proyectos artísticos comunitarios a través de núcleos culturales (cuatro en la actualidad) que ofrecen proyectos y talleres de animación sociocultural, que incluyen danza, percusión, reciclaje, fútbol y capoeira.</p> <p>Además, mantiene una activa presencia en medios de comunicación, tanto propios como en los <i>mass media</i> nacionales e internacionales, e implementa una activa gestión en <i>merchandising</i> de productos culturales de los jóvenes y <i>fundraising</i> ante donantes privados.</p> <p>Se aplica el enfoque de género, facilitando las experiencias y las reflexiones permanentes sobre las relaciones hombre-mujer.</p> <p>No se encontraron menciones específicas sobre efectos o evaluaciones de impacto, aunque es una organización con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales desde 1993.</p>	<p>4(c) Hay elementos que parecen señalar la sustentabilidad de las intervenciones, pero no se ha accedido a mayor información acerca del diseño de los proyectos o sobre su monitoreo (dadas las exigencias de los premios que la institución ha recibido, se supone que hay un alto nivel de rigurosidad técnica en los proyectos implementados).</p>	<p>la violencia, sobre lo que no se detectaron evidencias.</p>
<p>11. Homies Unidos</p> <p>El Salvador</p> <p>Fuentes: <www.homiesunidos.org>, <www.comminit.com>. Dowdney 2005</p>	<p>Responsabilidad privada (ONG comunitaria), con intervención a nivel nacional e internacional (coordinación con Los Ángeles, Estados Unidos).</p> <p>Desarrollar alternativas creativas a la violencia y a la drogadicción juvenil a través del acceso a educación alternativa y no formal, desarrollo de liderazgos, fortalecimiento de la autoestima y programas de educación en salud dirigidos a jóvenes vinculados con pandillas y a adolescentes y jóvenes en riesgo, con edades entre 8 y 35 años de edad.</p> <p>Por su origen —es una asociación entre <i>maras</i> rivales formadas por hijos y parientes de inmigrantes salvadoreños, vinculados con pandillas en Los Ángeles y posteriormente deportados a El Salvador—, la organización coordina y fomenta alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales para fortalecer los esfuerzos humanitarios y comunitarios, promoviendo y difundiendo su trabajo de prevención y educación a través de las relaciones públicas y los medios de comunicación.¹¹</p>	<p>1. No hay evaluaciones disponibles en el sitio web ni en las fuentes consultadas.</p> <p>2. La intervención no está de acuerdo con el consenso de la comunidad científica.</p> <p>3. La intervención ha sido aplicada con suficiencia, pero no hay cómo verificar su plausibilidad, salvo en los propios integrantes de la organización.</p> <p>4(a). La intervención es relevante con el contexto, dadas las características e intereses de la población meta, aunque no sean apreciables sus efectos en la reducción de la violencia.</p> <p>4(b). No es posible evaluar la base teórica de la intervención, que no está explicitada.</p> <p>4(c). Hay elementos que parecen señalar la sustentabilidad de las intervenciones a nivel político,</p>	<p>Probablemente no se trata de una intervención efectiva, aunque sea exitosa para sus integrantes; sus vínculos con la clase política y las agencias de cooperación internacional —evidentes en sus acciones de <i>lobby</i>— parecen indicar un sentido diferente del de las acciones en la comunidad, más allá de las capacitaciones. En todo caso, hacen falta evidencias e información más concreta.</p>

¹¹ De hecho, los objetivos expuestos en su web son más de desarrollo organizacional que de prevención o rehabilitación; sin embargo, están relacionados con la intención de alcanzar “el empoderamiento institucional que permita que el trabajo de Homies Unidos llegue a una mayor cantidad de jóvenes ligados al problema de violencia social” y alcanzar una gestión más eficiente de la organización, así como mejorar la calificación de su personal en la mediación y resolución creativa de conflictos, métodos de rehabilitación y reinserción, y realización de charlas y capacitaciones. Disponible en <www.homiesunidos.org>.



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>Se destaca la estrategia de llegar a los adolescentes miembros de <i>maras</i>, a través de programas de extensión y educación impartida por otros jóvenes que conocen su estilo de vida, su lenguaje y sus códigos de conducta.</p> <p>No se encuentra explícitamente referencias a la aplicación de un enfoque de género, aunque se trabaja con temas que lo requieren, como prevención del VIH. Además, hay participación de mujeres en las tareas de gestión organizacional.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserción de jóvenes tatuados y/o deportados en el sistema educativo, tras <i>lobby</i> con el Ministerio de Educación y centros educativos para lograr su apoyo. • Gestión de becas con centros de capacitación en oficios de la Municipalidad de San Salvador. • Atención gratuita en exámenes de VIH, chequeo prenatal y salud en general para pandilleros jóvenes. • Integración a redes institucionales nacionales e internacionales para mejorar condiciones en centros penales, derogar leyes violatorias de los derechos humanos, y mejorar la atención y seguimiento a casos de violaciones de derechos. 	<p>así como el acceso a fondos y donantes, pero la sustentabilidad técnica no parece ser tan evidente.¹²</p>	
<p>12. Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT), Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá</p> <p>Colombia</p> <p>Fuente: Suárez 2005, Concha y Guerrero 1999</p>	<p>Responsabilidad pública (gobierno municipal), con intervención municipal.</p> <p>Habitantes de Santa Fe de Bogotá.</p> <p>Diseño y construcción del espacio público urbano como escenario de convivencia,¹³ a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programas de cultura y pedagogía ciudadana que promuevan la apropiación y el uso adecuado del espacio y de los recursos públicos, que permitan compartir responsabilidades entre el gobierno y los ciudadanos. • Capacitación y diversificación de la policía. • Ordenamiento territorial, fundamentado en la función social y 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluaciones y monitoreos según análisis epidemiológico (Sistema unificado de información en violencia y delincuencia, véase también Concha y Guerrero 1999). 2. Adecuada a consensos científicos. 3. Suficiencia completa; plausibilidad. 4(a) La intervención es presumiblemente relevante. 4(b) Se puede asumir una base teórica consistente. 4(c) Sustentabilidad. 	<p>Efectiva en la reducción de la violencia, no específicamente en adolescentes y jóvenes.</p>

12 Llama la atención que estudios muy completos sobre la problemática de la violencia juvenil en El Salvador (caso Carranza 2004) no mencionen esta organización.

13 "Si tenemos un espacio público conveniente, suficiente y que satisface las necesidades de la comunidad urbana, es más fácil prevenir y controlar la violencia; los espacios desordenados, sucios, contaminados, ruidosos e insuficientes, generan agresividad en quienes los deben usar, mientras que los espacios amplios, limpios, bien diseñados y agradables, invitan a tener actitudes más amables y conviviales" (Suárez 2005: 14).



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, y la distribución equitativa de las cargas tributarias y los beneficios sociales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restricciones al porte de armas de fuego y a la venta de bebidas alcohólicas. <p>No se menciona el enfoque de género.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aumento en la percepción de seguridad. – Disminución de la tasa de homicidios y de delitos. – Acercamiento entre agentes de policía y la comunidad, mejorando las relaciones. 		
<p>13. Jóvenes: Reinserción social y ocupacional en los barrios urbanos marginales de Lima- Asociación Solidaridad con Países Emergentes (ASPEM)</p> <p>Perú</p> <p>Fuente: Jorge R. Fernández Iraola (encuesta)</p>	<p>Responsabilidad privada (ONG), con intervención barrial.</p> <p>Adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres, entre los 14 y los 24 años, escolarizados, residentes en barrios urbano-marginales.</p> <p>Se busca el mejoramiento de las condiciones económicas y de soporte socioeducativo, profesional y ocupacional para los jóvenes de la zona, con particular atención a los fenómenos de violencia y de desviación social.</p> <p>Se hace a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Promoción de actividades artísticas extracurriculares y de movilización social para integrar a los jóvenes a sus comunidades. – Formación en oficios. – Talleres socioeducativos para el desarrollo de habilidades sociales y mejoramiento de la autoestima. – Atención legal y psicológica a adolescentes y jóvenes. – Defensoría y asesoría legal familiar. – Fondo rotatorio para microempresas. <p>El enfoque de género no está fundamentado: “Sí lo tiene [enfoque de género], porque apostamos por abrir espacios donde los adolescentes y jóvenes puedan encontrarse, divertirse, aprender, mejorar y crear relaciones de equidad donde se respete al o a la otra por el solo hecho de ser un ser humano, de ser persona, brindado iguales oportunidades a la participación de uno y otro sexo” (encuesta ASPEM).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. El proyecto se inició en junio del 2005, y no se dispone de evaluaciones. 2. Hay consistencia con el consenso de la comunidad científica, pero la información es muy general para tener una conclusión. 3. Suficiencia incompleta; no hay datos para evaluar la plausibilidad. 4(a) La intervención no persigue la reducción de la violencia como objetivo, sino la inserción sociolaboral de adolescentes y jóvenes no integrados. 4(b) No se encontró una base teórica consistente. 4(c) La sustentabilidad financiera está prevista por dos años. 	<p>Probablemente con algún efecto en destinatarios directos, pero faltan evidencias e información.</p>





Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>Efectos:</p> <p>Califican su efectividad de media-alta, por la estrategia del proyecto y la calidad de los profesionales que intervienen en su ejecución.</p>		
<p>14. La Piel de la Memoria. Corporación Región</p> <p>Colombia</p> <p>Fuente: <http://www.prevencionviolencia.org.co>, <http://www.region.org.co> y <http://www.altocomisionado-paralapaz.gov.co>.</p>	<p>Responsabilidad privada, con intervención municipal-barrial.</p> <p>Es una intervención para el fortalecimiento de la convivencia en un barrio de Medellín que “ha sido considerado la zona de mayor tráfico de armas y drogas en la ciudad, lo que ha generado una tremenda violencia de pandillas, que además de sembrar la zozobra y el odio entre su residentes, ha contribuido a que muchos de sus pobladores se sientan siempre en peligro, y, peor aún, excluidos del resto de la ciudad”. Disponible en <www.prevencionviolencia.org.co>. ¹⁴</p> <p>La motivación es crear un “bus-museo” para exhibir objetos con un significado en la historia del barrio y por la escenificación teatral de esa historia, para “[...] recuperar los recuerdos significativos y dolorosos del pasado para evitar el congelamiento del odio y la desconfianza como únicos referentes para establecer las relaciones”. En <www.prevencionviolencia.org.co>.</p> <p>A partir de esa intención, mediante una metodología con instrumentos gráficos y técnicas vivenciales, se desarrollan temáticas alrededor de unos ejes básicos: convivencia pacífica, participación, organización y recuperación de la memoria. Al mismo tiempo, se procura mejorar la coordinación entre las instituciones públicas y privadas que trabajan en el barrio, para aprovechar mejor los recursos.</p> <p>Enfoque de género como componente de todas las actividades.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Generación de ambientes de confianza. – Reconocimiento de los problemas del barrio. – Fortalecimiento de la organización barrial, especialmente de jóvenes y mujeres. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se dispone de evaluaciones, pero los logros fueron relevados en una consulta con la comunidad. 2. La intervención es altamente innovadora, pero guarda coherencia con los consensos científicos. 3. La aplicación del proyecto se efectuó con suficiencia, y los cambios son plausibles de acuerdo con su objetivo. 4 (a) La intervención considera los aspectos culturales del contexto, involucrando problemáticas del barrio que son sentidas aunque no fueran manifestadas. 4 (b) La base teórica, especialmente la metodológica, está explicitada con claridad y es consistente con los objetivos y la intervención. 4 (c) Hay elementos de sustentabilidad social y política. La intervención se realiza con calidad y presencia de sistemas de monitoreo. 	<p>Efectiva para el fortalecimiento de factores de protección en el vecindario.</p>



14 El proyecto no se propone ser un mecanismo directo de pacificación sino contribuir a que “victimarios y víctimas [...] adquirieran conciencia de cómo esos actos violentos los estaban llevando a la autodestrucción”. Disponible en <www.prevencionviolencia.org.co>.



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción y descubrimiento de valores. - Sentido de pertenencia. - Estatus y reconocimiento de los actores sociales. - Articulación de los actores a espacios formales. - Alianzas barriales el trabajo interinstitucional. - Mayor tolerancia hacia grupos anteriormente discriminados.¹⁵ 		
<p>15. Luta Pela Paz. Viva Rio</p> <p>Brasil</p> <p>Fuentes: <http://www.lutapelapaz.org.br>, <http://www.vivario.org.br> Dowdney 2005, 2003</p>	<p>Responsabilidad privada, con intervención en el nivel municipal-barrial. Es un centro deportivo y educacional que trabaja con 150 niños, adolescentes y jóvenes de ambos sexos, que viven en el Complejo da Maré (Rio de Janeiro).</p> <p>Se procura ofrecer a los jóvenes en riesgo alternativas al crimen y al desempleo, utilizando el box, la capoeira y la lucha libre para atraerlos al proyecto. Además de la acción preventiva, el proyecto también ayuda a los adolescentes y jóvenes rehabilitados, que han dejado de trabajar para las facciones de narcotraficantes, a incorporarse al mercado laboral formal.</p> <p>El proyecto implementa las siguientes líneas de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deporte como estilo de vida, para canalizar la agresividad hacia el entrenamiento deportivo, procurando generar habilidades para el trabajo en equipo, respeto a las reglas del juego y disciplina. - Educación, apoyando a los adolescentes y jóvenes a retornar a la escuela, ofreciendo refuerzo escolar y convenios con programas educativos especiales. - Actuación social y cultura de paz, a través de talleres sobre ciudadanía, educación sexual, familia, género, violencia, derechos humanos, habilidades sociales. - Acceso al mercado de trabajo, ofreciendo alternativas y perspectivas financieras concretas, así como gestionando empleos en empresas, organismos públicos y ONG. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay evaluaciones disponibles en el sitio web ni en las fuentes consultadas. 2. La intervención es altamente adecuada según el consenso científico. 3. La intervención ha sido aplicada con suficiencia, y sus efectos son plausibles desde el modelo teórico de prevención que aplican. 4(a) La intervención es relevante con el contexto, dadas las características e intereses de la población meta y los objetivos de prevención. 4(b) La base teórica de la intervención es consistente con el diseño. 4(c) El proyecto es viable en los tres aspectos analizados, y comienza a crear asociaciones con el gobierno municipal para ser replicado por otros proyectos. 	<p>Probablemente efectiva en la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes, así como en la rehabilitación.</p>

¹⁵“Una pareja de jóvenes homosexuales que habían sido discriminados, se reincorporan nuevamente a su familia y uno de ellos trabaja con el Teatro Popular de Medellín con las luces y utilería [...] Algunos participantes juveniles se postularon como candidatos a juntas vecinales”. Disponible en <www.prevencionviolencia.org.co>.



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>- Capacitación y formación de líderes juveniles, apoyando en técnicas de presentación, trabajo en equipo, y organización y participación comunitaria, para incentivar su actuación como representantes en seminarios, reuniones institucionales y responsabilidades directas —mediante contratación— en el proyecto.</p> <p>El proyecto se implementa con enfoque de género.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lucha por la Paz ha permitido prevenir con éxito el ingreso de niños y jóvenes a pandillas juveniles ligadas al narcotráfico, así como ha rehabilitado a quienes desean abandonarlas, empleando para ello los deportes y la actividades artísticas y comunitarias. • Su metodología ha sido sistematizada, y puede encontrarse en la web del proyecto. • El proyecto ha comenzado a trabajar conjuntamente con el gobierno municipal en el diseño de sentencias alternativas para menores en conflicto con la ley. 		
<p>16. Modelo de atención integral de prevención, contención y tratamiento de la violencia— Casa Alianza</p> <p>Nicaragua</p> <p>Fuente: Casa Alianza (encuesta)</p>	<p>Responsabilidad privada (ONG), con intervención nacional.</p> <p>Adolescentes entre 13 y 18 años en situación de riesgo (ruptura del vínculo familiar, consumo de drogas, víctima de violencia, abuso sexual y/o explotación sexual comercial) en barrios marginados de Managua.</p> <p>Proporcionan atención terapéutica individual al adolescente y al grupo familiar, así como acciones de prevención de la violencia intrafamiliar en escuelas, iglesias y comunidad.</p> <p>Se efectúan las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grupo de autoayuda de niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia, abuso sexual y explotación sexual comercial. – Grupo de autoayuda de niños y adolescentes sobrevivientes de violencia y que ejercen violencia. – Grupo de reflexión de niños y adolescentes sobre machismo, violencia y género. – Talleres sobre temas relacionados con la violencia, el abuso sexual y la explotación sexual comercial, autoestima, comunicación (interpersonal e intrafamiliar), derechos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se accedió a evaluaciones. 2. Adecuada a los consensos científicos. 3. Suficiencia completa; plausibilidad. 4(a) La intervención es presumiblemente relevante. 4(b) Base teórica consistente. 4(c) Sustentabilidad. 	<p>Efectiva en la reducción de la violencia en adolescentes.</p>



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>humanos, relaciones familiares, metas y planes de vida.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Atención individual y terapia sistémica para niñas, niños, adolescentes y familiares. – Escuela para padres. – Asesoría a escuelas públicas en prevención de la violencia. <p>Enfoque de género en temas y actividades: “[...] en cada una de las actividades que se realizan se promueve la igualdad entre hombres y mujeres, se trabaja el cambio de actitudes negativas y/o machistas que pueden tener algunos jóvenes hacia las mujeres, además se refuerzan aquellas manifestaciones de igualdad de género que puedan expresarse” (Encuesta Casa Alianza).</p> <p>Efectos:</p> <p>La efectividad es calificada por la institución como media-alta con relación a otras intervenciones, principalmente por la calidad profesional del personal y la estrategia del programa: “Las estrategias utilizadas han sido muy bien aceptadas por la población atendida. Se ha logrado percibir cambios en los niños, niñas y adolescentes atendidos/as, tanto en sus actitudes como en su comportamiento; se ha observado disminución en los niveles de violencia y el inicio de un proceso de recuperación emocional” (Encuesta Casa Alianza).</p>		
<p>17. Movimiento No Matarás Pastoral social de la Iglesia Católica</p> <p>Colombia</p> <p>Fuentes: Dowdney 2005, Ramírez 2004</p>	<p>Responsabilidad privada (confesional) de intervención en el nivel municipal-barrial.</p> <p>El movimiento surge como iniciativa de jóvenes vinculados a dos bandas rivales vecinas de la ciudad de Medellín, con el apoyo financiero, logístico y técnico de la Iglesia. Abarca a cerca de 300 personas en 18 barrios.</p> <p>Las personas se organizan en grupos —llamados células de vida—, los cuales se deben mantener como mínimo durante un año. En el grupo participan hombres y mujeres con edades entre 14 y 40 años, que han sido capacitados en la metodología del movimiento y la filosofía de la no-violencia, con un claro componente religioso-cristiano.¹⁶</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se dispone de evaluaciones. 2. La intervención no tiene una referencia clara en el marco de los consensos científicos sobre la prevención de la violencia. 3. Al parecer, la aplicación del proyecto se ha efectuado con suficiencia, pero no hay evidencia sobre su plausibilidad desde el punto de vista de la reducción de las muertes violentas en los barrios. 4 (a) La intervención toma en consideración aspectos culturales del contexto y se basa en una iniciativa 	<p>No parece efectiva si se contrasta con la prevención de muertes violentas en adolescentes y jóvenes, que es uno de sus objetivos.</p>



¹⁶“El movimiento se caracteriza básicamente por hacer un trabajo desde el Evangelio, reforzando la parte espiritual, ya que durante todo el proceso ha sido acompañado por la iglesia, según uno de los coordinadores del programa, “Es la espiritualidad la que sentimos que nos caracteriza como no violentos” (Ramírez 2004: 49).



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>En estos grupos participan hombres y mujeres jóvenes pertenecientes a organizaciones armadas, así como también jóvenes que actúan solos o en asociaciones de delincuencia común sin una estructura de comando definida.</p> <p>Cada grupo desarrolla tres líneas de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabajo preventivo, dirigido principalmente al sector educativo. • Trabajo pedagógico dirigido a jóvenes involucrados en conflictos armados o en zonas de riesgo, junto con sus familias, en aspectos como transformación del conflicto, derechos humanos, no violencia, reconciliación y participación comunitaria. • Protección y capacitación a jóvenes en peligro inminente de muerte. <p>No se aplica un enfoque de género: “[el movimiento] no cuenta de manera específica con un planteamiento programático o de proyecto que dé cuenta de la especificidad de los niños y niñas vinculadas a grupos de violencia armada organizada” (Ramírez 2004: 50).</p> <p>Efectos:</p> <p>Como logro importante del movimiento, se menciona el fortalecimiento de la confianza interpersonal en las comunidades donde éste trabaja, así como la desvinculación de jóvenes de las bandas;¹⁷ sin embargo, es difícil calificar el proyecto como exitoso desde la disminución de los homicidios, que constituye uno de sus propósitos.</p>	<p>comunitaria y de los propios implicados.</p> <p>4(b) La base teórica no está explicitada con claridad.</p> <p>4(c) Hay elementos de sustentabilidad financiera, pero en el contexto no se aprecia su capacidad de mantenerse aislada de la acción gubernamental en el marco de los procesos de negociación con paramilitares en Medellín.</p>	
<p>18. Patrulla Juvenil. Dirección de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Perú (PNP)</p> <p>Perú</p>	<p>Responsabilidad pública, con intervención municipal a nivel nacional.</p> <p>Se tiene información acerca de un proyecto con 478 jóvenes de ambos sexos en el distrito carenciado de Santa Anita, zona periférica del área metropolitana de Lima, vinculados con 17 pandillas juveniles, de un total de 48 grupos existentes en esa área.</p>	<p>1. No hay evaluaciones disponibles.</p> <p>2. La intervención contradice el consenso científico sobre la inefectividad de las intervenciones basadas en mediación entre pares vinculados a actividades delictivas y/o conductas de riesgo.</p>	<p>La evidencias parecen indicar que se trata de una intervención que no es efectiva para la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes, especialmente cuando no se trabaja también sobre la</p>



17 “Lo que sí es posible cuantificar es el número de personas que han pasado por el movimiento (más de 1.500), las que permanecen (300), es decir, un nivel de efectividad del 20%, es decir el número de personas, especialmente jóvenes que han sido de alguna manera desvinculados. Si se compara esta cifra con la de la alcaldía de Medellín y su programa de Reinserción, exceptuando los 850 desmovilizados en el proceso antes descrito con el Bloque Cacique Nutibara [un grupo paramilitar de la ciudad con una alta participación de adolescentes y jóvenes] y a la vez con los recursos invertidos y la infraestructura disponible, se destaca que el movimiento No Matarás presenta unos mayores logros en este nivel” (Ramírez 2004: 51).



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
<p>Fuentes: <http://www.elperuano.com.pe>; <http://www.pnp.gob.pe/direcciones/dirfa-paci></p>	<p>El proyecto busca la transformación de las relaciones de hostilidad entre jóvenes pandilleros, integrantes de la delegación policial y vecinos, para establecer relaciones de cooperación y buena vecindad. De esta forma, se busca que los líderes de la comunidad desarrollen actividades preventivas que reduzcan el nivel de violencia adolescente y juvenil. Para esto, se cuenta con el apoyo del Comité Cívico de Cooperación de la PNP y de las juntas vecinales del sector.</p> <p>Se implementa mediante charlas de prevención y orientación acerca del tema del pandillaje, las actividades destinadas a lograr el buen uso del tiempo libre, y las jornadas de capacitación laboral, mediante los talleres de manualidades y tejido. Otro estímulo para quienes colaboran con los integrantes de la delegación es la posibilidad de acceder a becas de estudios, así como la realización de concursos artísticos.</p> <p>Se pretende —a cambio— que las patrullas juveniles sirvan como multiplicadores ante los jóvenes que no han abandonado sus pandillas, y que también identifiquen y deriven a adolescentes en riesgo.</p> <p>No se mencionan aspectos referentes a la implementación del enfoque de género en la concepción y en las actividades del proyecto ni tampoco efectos de reducción de la violencia.</p>	<p>3. No hay datos ni evidencias para indicar el grado de suficiencia y plausibilidad de la intervención.</p> <p>4(a) La intervención no parece relevante en el sentido de atender los intereses de todos los involucrados, especialmente de los propios jóvenes.¹⁸</p> <p>4(b) No hay referencias a la base teórica del proyecto, que en términos generales se reduce a ofertar actividades generales y a “seducir” a los jóvenes con privilegios especiales, a cambio de que realicen tareas de vigilancia.</p> <p>4(c) Hay elementos de sustentabilidad política, pero hay dudas sobre la calidad de la implementación y la permanencia de los jóvenes en las actividades.</p>	<p>transformación de las lógicas de actuación de la policía y de la propia comunidad.</p>
<p>19. Polígono Industrial Don Bosco. Comunidad Salesiana</p> <p>El Salvador</p> <p>Fuente: Carranza 2004</p>	<p>Responsabilidad privada (confesional), con intervención municipal: 87 adolescentes jóvenes, entre 14 y 18 años, en San Salvador.</p> <p>Proporciona educación y acompañamiento a jóvenes en conflicto con la ley, en alto riesgo y a jóvenes de la calle, bajo un régimen de internación (prevención secundaria y terciaria).</p> <p>Ofrece apoyo educativo a padres de familia y supervisión familiar mediante un <i>staff</i> psicopedagógico (componente de libertad asistida para jóvenes con medidas judiciales y seguimiento a la salida de los jóvenes de la institución).</p>	<p>1. No hay evaluaciones disponibles (o por lo menos no se aclara según qué modelo).</p> <p>2. Inadecuada a consensos científicos (internación, jóvenes de pandillas con jóvenes en alto riesgo).</p> <p>3. Suficiencia completa, plausibilidad.</p> <p>4(a) La intervención es presumiblemente relevante.</p> <p>4(b) No se puede asumir una base teórica consistente en todos los aspectos.</p>	<p>No hay evidencias suficientes para evaluar su efectividad; sin embargo, el componente de intervención con las familias parece ser un elemento plausible en la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes en el marco del proyecto.</p>



¹⁸Una nota de prensa acerca de jóvenes que opinan sobre el proyecto en el que participan hace pensar en que hay necesidades e intereses que no son debidamente considerados, así como el planteamiento general de la intervención: “Mientras tanto, Miguel, Raúl, Alfredo y José están orgullosos no sólo por el nuevo camino, sino también por el premio ganado. Y al final, mientras se seguían atropellando con las palabras, dicen su gran verdad: ‘Es hora de que nos den oportunidades, señor. Yo tengo una hijita, Miguel también, y Alfredo, un varoncito. Tenemos que darles de comer, ¿por qué nadie nos ayuda?’. Es la protesta de José”. Disponible en <www.elperuano.com.pe>.



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>No se percibe enfoque de género</p> <p>Efectos:¹⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60% estudian y trabajan. – 25% han regresado a sus casas y no están vinculados con pandillas. – 15% han reincidido en actos violentos y delictivos. 	4(c) Sustentabilidad.	
<p>20. Programa Fica Vivo. Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais</p> <p>Brasil</p> <p>Fuente: Lana Leite 2003, Beato 2003, Souza 2002</p>	<p>Responsabilidad pública (universidad), con intervención municipal-barrial.</p> <p><i>Favelas</i> con altas índices de homicidios y delitos, en Belo Horizonte.</p> <p>Reducción del número de homicidios, principalmente entre jóvenes, aplicando una metodología de "solución de problemas" en tres niveles:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Institucional, que promueve medidas preventivas de largo plazo dirigidas a jóvenes, ejecutadas por instituciones públicas y privadas especializadas, así como medidas de acción represiva, efectivas en el corto plazo, para controlar la ocurrencia de homicidios. – Comunitario, buscando la movilización y articulación de las asociaciones de la comunidad, para contribuir a la reducción de la violencia en forma organizada y sistemática, como medida de medio y largo plazo. – Individual, centrada en adolescentes y jóvenes, con campañas de comunicación y actividades comunitarias. <p>Características claves del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Se parte del conocimiento y la adaptación de experiencias exitosas en otros contextos, principalmente el programa Operación Cese al Fuego (Operation Cease-fire), aplicado en Boston con éxito en la reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes. 	<p>1. Evaluaciones según diseño experimental, con experiencia piloto y grupo de control; sistema de monitoreo epidemiológico y evaluaciones cualitativas por reportes de los mismos comités; otros datos fueron hallados inconsistentes.</p> <p>2. Adecuada según los consensos científicos.</p> <p>3. Suficiencia completa, plausibilidad.</p> <p>4(a) La intervención es relevante.</p> <p>4(b) Se dispone de una base teórica consistente.</p> <p>4(c) Sustentabilidad comprometida.</p>	Efectiva en reducción de la violencia en adolescentes y jóvenes.

19 "Las cifras de rehabilitación y de cambio para los jóvenes son muy positivas, da la impresión que el trabajo resulta muy eficaz. Esto contrasta con las afirmaciones que hacen algunos gobiernos de que la rehabilitación de los jóvenes en pandillas no es posible. Desde el Polígono Industrial Don Bosco no sólo se confirma que es posible, sino con cifras bastante alentadoras" (Carranza 2004: 48).



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<ul style="list-style-type: none"> – Contratación de policías con nuevo “perfil” y exigencias.²⁰ – Gestión coordinada en el nivel local entre las instancias comunitarias, en el nivel regional por medio de grupos especializados de trabajo, y en el nivel central a través de las instituciones municipales, estatales y federales.²¹ – Enfoque de “bola de nieve”: a medida que la intervención se desarrolla, incorpora a nuevos “socios” cuyos recursos diferentes, bien coordinados, contribuyan a mejorar la eficacia y eficiencia del programa. – Combinación de acciones de control y represión del delito con acciones de prevención. – Búsqueda constante de la participación de la policía en la vida de la comunidad, en la perspectiva de formación de redes, fomento del capital social comunitario y control social de la policía.²² <p>La intervención es sobre múltiples niveles del modelo ecológico de la violencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivel individual, intervenciones <i>scholl-based</i>. • Nivel de relaciones, ambientes familiares saludables. • Nivel comunitario, construcción y mejoramiento de la infraestructura barrial; acción coordinada entre la policía, la comunidad y el sistema 		

20 El proyecto ha sido tan exitoso en el cumplimiento de sus metas, que ha sido “transferido” como política de seguridad pública de todos los municipios de Minas Gerais (Lana Leite 2005); sin embargo, es necesario anotar que Souza hace hincapié en las críticas que ha recibido el esquema de financiamiento de la experiencia —basado en aportes “voluntarios” de la comunidad, que Souza llama “privatización de la seguridad pública”— como algo que ha comprometido su expansión y credibilidad:

“A Polícia Militar de Minas Gerais vem, desde a década de 80, passando por uma séria crise financeira, acarretada pelo baixo investimento do estado e ausência de uma política eficaz, capaz de conter os aumentos das taxas de criminalidade e garantir segurança [...] A polícia comunitária [...] surge nesse contexto [...] como uma fonte alternativa e viável para canalizar recursos para a organização policial, sem querer com isso diminuir o interesse político da organização em resgatar sua legitimidade frente aos cidadãos, por meio de um policiamento preventivo condizente com os princípios constitucionais do Estado democrático. Entretanto, a dependência criada entre a Polícia Militar e, principalmente, as associações comunitárias para a implementação do policiamento comunitário tem sido o nó górdio do programa de polícia comunitária” (Souza 2002: 131).

21 Participación de la policía municipal, estadual y federal, el Ministerio Público, la Prefeitura de Minas Gerais, la Universidade Federal de Minas Gerais, cámaras y gremios de comerciantes, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales y de la comunidad de las localidades.

22 “Nesse sentido, a estruturação do policiamento comunitário nos bairros resultou na divisão da região policiada em pequenas áreas delimitadas de policiamento (formada ou por ruas, bairro, ou conjunto de bairros) chamadas de núcleos comunitários [...] Sua criação teve por objetivo aproximar a polícia da comunidade, aumentando a confiança pública na polícia. Em muitos bairros, foram criadas unidades de policiamento comunitário [...] nos mesmos edifícios onde funcionam as associações comunitárias para facilitar o contato diário com os representantes dos bairros e favorecer a interação, a transparência e o controle da atividade policial” (Souza 2002: 101).



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>judicial contra el delito;²³ actividades de recreación y desarrollo sociocultural con adolescentes y jóvenes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nivel social, acciones contra desigualdades y discriminaciones de género, etnia y edad. <p>Existen indicios de que hay elementos propios de un enfoque de género.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En el barrio "piloto" hubo una reducción de 47% en el número de homicidios durante los primeros meses del programa, así como en otros barrios intervenidos posteriormente.²⁴ <p>Otros resultados que se mencionan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> La movilización de los actores comunitarios e institucionales, públicos y privados, en torno a un objetivo común que incrementa su confianza, agiliza procesos y promueve nuevas acciones. Visibilización temática en el ámbito público de la problemática de la violencia y la situación de sus habitantes en la <i>favela</i> piloto, Morro das Pedras. 		
<p>21. Proyecto Pandillas: una apuesta por la esperanza. CEFOCINE</p> <p>Ecuador</p> <p>Fuente: <http://www.cefocine.org>; Dowdney 2005; Look 2004</p>	<p>Responsabilidad privada (ONG), con intervención municipal.</p> <p>El proyecto beneficia a 387 jóvenes, de entre 13 y 20 años, en riesgo de integrarse a una pandilla o que pertenezcan a ellas; trabaja en tres cooperativas de barrios marginales de Guayaquil.</p> <p>El objetivo del proyecto es impulsar una propuesta juvenil alternativa con jóvenes pandilleros que contribuya al desarrollo comunitario, convirtiendo a las pandillas en grupos juveniles capaces de generar sus propias oportunidades y de emprender procesos de participación social dentro de sus comunidades.</p> <p>Utilizan una metodología basada en la teoría grupal, con un enfoque</p>	<ol style="list-style-type: none"> La ONG dispone de una unidad de monitoreo para los proyectos; igualmente, se alude a la publicación de una evaluación externa, a la que no se tuvo acceso, que menciona efectos positivos en los destinatarios con relación a factores protectores, pero no dice nada acerca de cambios en la comunidad o en las familias. La intervención no parece adecuarse totalmente a los consensos de la comunidad científica, pero es innovadora en el uso de los medios y tecnologías de información. 	<p>Probablemente es una intervención que incide en fortalecer y generar factores de protección individual y grupal en adolescentes y jóvenes en riesgo, pero no hay evidencia en la reducción de la violencia a largo plazo.</p>

23 "Uma característica marcante do GEPAR [polícia militar] é a sua preocupação em ter um bom relacionamento com a comunidade, para conquistar a sua confiança, o que propicia um melhor trabalho da polícia, ao ter os moradores como seus aliados. Para isto, os policiais envolvem-se no dia a dia das comunidades, interagindo com os seus cidadãos e conhecendo a região. Esta postura é baseada na atuação da polícia comunitária [...] (Lana Leite 2005: 92).

24 "Não obstante o crescimento acentuado dos homicídios na cidade como um todo, a região centro-sul [favelas donde se implementa el programa] tem assistido a um decréscimo. Este é o resultado da ação articulada dos dois grupos que estão atuando no projeto e, sobretudo, da adesão crescente da comunidade ao programa. Trata-se de uma metodologia em desenvolvimento que, já em seu inicio, mostra resultados promissores" (Beato et al. 2005: 5).



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>que enfatiza el trabajo en los planos comunicacional y afectivo, cuyo fundamento metodológico consiste en generar condiciones afectivas y competencias en la comunicación interpersonal y, desde esta perspectiva, promover en los y las jóvenes la construcción de proyectos de vida positivos, con metas de crecimiento personal.</p> <p>Las actividades implementadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crecimiento personal, por medio del acompañamiento personalizado y el impulso a procesos de comunicación interpersonal. - Desarrollo grupal, abriendo espacios de formación y capacitación a grupos juveniles que incorporan nuevas corrientes pedagógicas, nuevos conceptos de liderazgo y fortalecimiento grupal, teniendo como eje la comunicación. Se busca promover el liderazgo juvenil crítico y propositivo, que utiliza para sus objetivos los medios masivos de comunicación y las tecnologías de información. - Apoyo a la actoría social juvenil, tejiendo redes sociales a través de la radio, los impresos y los videos como espacios de información, educación, diálogo, expresión y muestra de referentes, para impulsar la democratización y el mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades. - Educación para los medios, desarrollando en adolescente y jóvenes habilidades para el consumo inteligente, selectivo y crítico de los medios masivos de comunicación y de las tecnologías de información. - Capacitación para producir y comunicar mensajes a la sociedad, desarrollando el potencial creativo, imaginativo y expresivo de los jóvenes. - Asesoría a docentes y agentes comunitarios para la incorporación real y efectiva de los medios masivos de comunicación y las tecnologías de información en la cotidianidad de su relación con adolescentes y jóvenes. <p>No hay evidencia clara de la aplicación de un enfoque de género en el proyecto, más allá de la participación de hombres y mujeres como destinatarios.</p>	<p>3. La intervención ha sido aplicada con suficiencia, y dado su reconocimiento, parece que ha tenido efectos plausibles en sus destinatarios.</p> <p>4(a) La intervención es altamente relevante con el contexto y los intereses del grupo meta.</p> <p>4(b) Hay una base teórica sustentada científicamente que justifica la intervención y su diseño metodológico.</p> <p>4(c) Hay elementos que apuntan a evidenciar la sustentabilidad de la experiencia desde la calidad en la ejecución y la competencia de los profesionales, sus sistemas de monitoreo y de evaluación, y el reconocimiento social y oficial de la experiencia (Gobierno Nacional, municipalidades de Quito y Guayaquil, empresa privada).</p>	



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>Efectos:</p> <p>Según una evaluación externa publicada en el 2002, las conclusiones acerca de los efectos destacan el aporte del proyecto a la construcción de estilos y proyectos de vida saludables y con sentido en los jóvenes: "La evaluación consideró el proyecto un éxito [...] el mayor logro identificado radica en el desarrollo de actitudes positivas, autoestima y crecimiento personal de los jóvenes [...] Es notorio que el enfoque y metodología empleados posibilitaron logros evidentes en los jóvenes participantes expresados en la valoración de sí mismos y en una comprensión más positiva de sus potencialidades como personas con capacidades y perspectivas de construir sus particulares proyectos de vida" (Look 2004: 63).</p>		
<p>22. Proyecto para la Capacitación en Liderazgo- SERPAZ²⁵</p> <p>Ecuador</p> <p>Fuente: <http://www.serpaz.org>. Dowdney 2005, Look 2004</p>	<p>Responsabilidad privada, con intervenciones a nivel municipal.</p> <p>Específicamente, el proyecto se ejecuta en 6 áreas urbano-marginales de Guayaquil, con líderes de 17 naciones, con el fin de aprovechar la estructura de las pandillas y sus aspectos positivos, utilizando los elementos de la cultura hip-hop, como las pinturas murales, la música y la vestimenta, para orientarlos hacia actividades productivas y socialmente útiles.</p> <p>Los objetivos del proyecto de capacitación en liderazgo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generar procesos de formación, participación y elaboración de propuestas políticas y sociales. - Impulsar procesos formativos integrales, que promuevan la cultura de paz como referente de acción. - Desarrollar, con profesionales involucrados en la construcción de la paz, programas de formación e investigación en los temas relacionados con la violencia, la justicia y el manejo de conflictos en adolescentes y jóvenes. <p>A través del entrenamiento en habilidades y el desarrollo de conocimientos, el proyecto apunta a construir destrezas para la resolución pacífica</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay monitoreo del proyecto y evaluaciones externas, pero no se accedió a su resultado ni a su diseño. 2. La intervención no parece adecuarse totalmente a los consensos de la comunidad científica. 3. La intervención ha sido aplicada con suficiencia, y dado su reconocimiento, parece que con efectos plausibles. 4(a) La intervención es altamente relevante en el contexto y los intereses del grupo meta. 4(b) Hay una base teórica que justifica la intervención y su diseño metodológico. 4(c) Hay elementos que apuntan a evidenciar la sustentabilidad de la experiencia, la calidad en la ejecución, sólidos nexos con las comunidades, sistemas de monitoreo y evaluación externa; reconocimiento social y oficial de la ex- 	<p>Probablemente es una intervención plausible en la rehabilitación de adolescentes y jóvenes vinculados con pandillas. Está pendiente la cuestión acerca de su efectividad a largo plazo en la prevención de la violencia, sobre lo que no se detectaron evidencias.</p>

²⁵SERPAZ se orienta hacia:

- Fortalecer redes, especialmente de jóvenes, a favor de la construcción de una cultura de paz.
- Promover la cultura de paz de forma permanente, a través de publicaciones y eventos.
- Formar a multiplicadores para la sostenibilidad de los procesos formativos.
- Investigar y documentar las situaciones conflictivas para generar su reflexión y desarrollar alternativas participativas de intervención.



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>de conflictos entre los líderes de las pandillas.</p> <p>Los principios metodológicos que orientan la propuesta desarrollada son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento y respeto al conocimiento y vivencia de los jóvenes y sus agrupaciones. - Partir de lo positivo y potenciar la capacidad propositiva de los sujetos sociales. - Transparencia y confiabilidad en las acciones y relaciones. <p>La metodología del proceso es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación y acercamiento a líderes de pandillas y naciones. - Potenciación de las capacidades artísticas de los sujetos de intervención. - Desarrollo de destrezas comunicacionales y habilidades de un liderazgo democrático-trascendente. - Socialización de las expresiones culturales de las pandillas y naciones. - Implementación de alternativas laborales, como pequeños negocios que puedan ser directamente manejados por los jóvenes de pandillas y naciones. <p>Las principales actividades desarrolladas por el proyecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talleres dirigidos a pandillas y naciones sobre manejo de conflictos. - Talleres de dibujo y diseño para grafiteros. - Elaboración de <i>graffitis</i> públicos por la paz. - Concursos de baile y música rap. - Foros de crecimiento personal a través de diálogos con personajes exitosos. - Espacios radiales para difundir acciones positivas de jóvenes vinculados con naciones y pandillas. - Creación de microempresas, especialmente de calzado. - Elaboración y comercialización de productos comunicacionales por los propios jóvenes del proyecto, tales como videos, revistas, camisetas, CD, pancartas, etcétera. <p>No se informa sobre la aplicación de un enfoque de género en el proyecto.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de espacios de diálogo y concertación entre líderes de pandillas y naciones. 	<p>perencia (Gobierno Nacional, municipalidades de Quito y Guayaquil, empresa privada).</p>	





Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<ul style="list-style-type: none"> • Tolerancia y reconocimiento social del valor artístico de las expresiones culturales de las pandillas y naciones. • Reconocimiento por parte de directores y docentes de los colegios en las zonas de intervención de la existencia y dimensión de la problemática de las pandillas y naciones. • Apertura de los medios de comunicación a difundir las expresiones positivas de los jóvenes que forman parte de pandillas y naciones. • Interés de los chicos que han intervenido en el proyecto para participar en acciones de movilización social por la paz. • Financiamiento de la banca privada a iniciativas empresariales de los jóvenes que participaron en el proyecto. 		
<p>23. Red Comunitaria de Atención a la Violencia Intrafamiliar-Fundación Mujer y Futuro, con apoyo de la ACNUR</p> <p>Colombia</p> <p>Fuente: <http://www.saliendodelcallejón.pnud.org.co>.</p>	<p>Responsabilidad privada, con intervención a nivel municipal-barrial.</p> <p>Familias de siete barrios del municipio de Puerto Wilches (Santander) que presentan los índices más altos de violencia ejercida sobre las mujeres, los niños y las niñas.</p> <p>La Red Comunitaria promueve el desarrollo de relaciones justas en la familia para prevenir que los y las jóvenes, por la situación de violencia que viven en sus familias, se vinculen a una organización armada: “[...] la violencia dentro de los hogares es un factor determinante en la vinculación de menores de edad a grupos armados al margen de la ley, y la violencia conyugal contribuye a perpetuar las demás violencias intrafamiliares”. Disponible en <www.saliendodelcallejón.pnud.org.co>.</p> <p>El proyecto empezó con la sensibilización de profesores, funcionarios y funcionarias y mujeres del municipio frente al tema de la violencia intrafamiliar; estas personas se comprometieron a promover acciones de prevención y promoción del buen trato familiar. Los objetivos del proyecto son:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Promover procesos de formación y reflexión frente a las violencias que se ejercen en las familias. – Desarrollar relaciones familiares más equitativas y respetuosas. – Prevenir la violencia intrafamiliar y fomentar el buen trato en la familia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No hay evaluaciones disponibles, pero el proyecto ha sido sistematizado y está incluido en el portal de buenas prácticas del PNUD en Colombia. 2. La intervención está de acuerdo con elementos consensuados en la comunidad científica, aunque no hay datos sobre su efecto en la reducción de la violencia, específicamente en su objetivo de prevenir el ingreso de adolescentes a los grupos armados ilegales. 3. Al parecer, el proyecto se ha desarrollado con suficiencia y con efectos plausibles. 4(a) La intervención es relevante frente a las problemáticas y circunstancias de la comunidad. 4(b) El proyecto se implementa sobre una base teórica consistente, tanto en la hipótesis de trabajo como en las estrategias, aunque el enfoque de género está sólo centrado en la participación de las mujeres (en los grupos comunitarios de la Red, por 80 mujeres sólo hay 2 hombres). 4(c) La sustentabilidad de la experiencia puede estar 	<p>Probablemente efectiva a corto plazo con las mujeres directamente involucradas como destinatarias del proyecto, pero no hay evidencia de la sostenibilidad de los efectos en el largo plazo debido al contexto particular de la zona (violencia social y colectiva).</p>





Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinar acciones con entidades encargadas de la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, empleando protocolos unificados de identificación y seguimiento a las víctimas. - Recuperar la credibilidad en las instituciones del Estado encargadas de atender los casos de violencia intrafamiliar. <p>Para esto, se implementaron las estrategias de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Articulación y fortalecimiento institucional. - Formación en equidad de género, derechos de las mujeres y de la niñez, comunicación y técnicas de negociación de conflictos. - Orientación legal. - Atención psicológica al grupo familiar. - Difusión del proyecto por la radio y en actividades culturales comunitarias. <p>El tema de género es tratado como uno de los componentes esenciales del proyecto, pero no se perciben acciones dirigidas a incluir más a los esposos y padres en las actividades.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La “desnaturalización” de la violencia como medio para resolver conflictos en una zona del país ubicada en medio del conflicto armado, evidenciando que la violencia ejercida contra mujeres y niños no es una conducta que conduzca a la resolución de los problemas de convivencia, sino que los empeora, y que es posible construir otras formas de relación dentro de las familias. - Se ha recobrado la gobernabilidad y la credibilidad en las instituciones, con lo que ha aumentado el número de denuncias por maltratos, violaciones y violencia intrafamiliar, así como la demanda de acciones de asistencia legal y psicológica, en una zona donde el Estado estaba deslegitimado por la violencia del conflicto armado. - El emprendimiento de acciones para el empoderamiento de las mujeres y el cambio de prácticas violentas por el diálogo y el encuentro. - También se han capacitado en temas relacionados con el proyecto: 	<p>en su replicabilidad y transferencia al sector público, así como en la relevancia social y cultural de la estrategia de intervención. Sin embargo, el contexto tiene supuestos riesgosos, y se mencionan problemas de tipo financiero y político que generan reservas, que la Red expresa: “Uno de los desafíos de esta iniciativa es la necesidad de un mayor compromiso por parte de las instituciones gubernamentales, promover una mayor participación de los hombres, y consolidar financieramente la Red”. Disponible en <www.saliendodelcallejon.pnud.org.co>.</p>	





Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios y funcionarias de comisarías de familia, psicólogas, secretarios municipales, inspectores y agentes de policía, en el nivel estatal. • Líderes comunitarias vinculadas a asociaciones de padres y miembros de juntas vecinales, así como docentes, psicólogos y coordinadores de escuelas y colegios. • Más de 300 jóvenes, hombres y mujeres, en las escuelas de los barrios. • Se ha conformado un equipo coordinador de la Red, compuesto por representantes del sector público, de las organizaciones comunitarias y jóvenes. <ul style="list-style-type: none"> – En los encuentros en los barrios e interbarriales se construyeron vínculos de confianza entre las mujeres, se avanzó en el reconocimiento que ellas hacen de sus derechos y en el control social que se ejerce frente a la violencia que se comete contra ellas. – A través de la organización de seis núcleos de mujeres en los barrios se diseñaron y ejecutaron acciones tendientes a disminuir la problemática de la violencia intrafamiliar y a fomentar iniciativas de inclusión y respeto por los derechos. Estas acciones se constituyen en otra fortaleza. – También se crearon espacios para articular y emprender acciones con instituciones como la comisaría, la estación de policía y la alcaldía. – La Red tiene un espacio radial en la emisora comunitaria del municipio, para dar a conocer las problemáticas de las mujeres y de las familias del municipio, así como informar sobre derechos e instituciones de protección y prevención. 		
<p>24. Red de Escuelas de Música y Bandas sinfónicas - Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Programa Seguridad y Convivencia Ciudadana - Alcaldía de Medellín</p>	<p>Responsabilidad pública (universidad), intervención a nivel municipal. 4.000 niños y adolescentes de Medellín, habitantes de barrios de estratos socioeconómicos medio-bajo y bajo, priorizando siete escuelas de música localizadas en zonas de mayor violencia social y seis en zonas por debajo del promedio del índice de calidad de vida.</p> <p>Ofrecer una alternativa extracurricular de formación integral, uso del tiempo libre e inclusión social para</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay una evaluación de impacto, pero no mide directamente la reducción de la violencia intrafamiliar o en la comunidad o la contribución de la participación de los padres en el programa, sino el desarrollo de probables factores protectores individuales. 2. No hay una clara adecuación de la intervención al consenso de la comunidad 	<p>Presumiblemente efectiva en la generación y fortalecimiento de factores protectores individuales, pero no hay evidencia suficiente para valorar su efectividad en la reducción de la violencia.</p>



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
<p>Colombia Fuente: Martha Eugenia Arango (Encuesta); Yepes et al. 2005</p>	<p>una población en alto riesgo de ser afectada o de cometer actos de violencia en la familia y en la comunidad. Mediante la educación musical y la promoción de la participación ciudadana en niños, niñas, jóvenes y padres de familia, incidir en la disminución de comportamientos agresivos y conductas transgresoras de las normas y valores necesarios para la convivencia familiar y social.</p> <p>Incluye acciones de participación e inclusión de los padres de familia y los vecinos en las decisiones de las escuelas, en la cogestión de los recursos y el sostenimiento de éstas y en especial, porque enfatiza la construcción de relaciones significativas en la escuela de música, en la familia y la comunidad.</p> <p>Se implementa a través de la educación musical, la promoción de valores de convivencia en la escuela de música y en la comunidad, el respeto por las diferencias socioculturales, y el trabajo en equipo.²⁶</p> <p>Se aplica enfoque de género: "... la adopción de estrategias hacia la tramitación civilizada de los conflictos y el trabajo en equipo afectan de manera positiva la manera como se relacionan entre los géneros y se genera una situación de equidad entre estos" (Encuesta Red de Escuelas).</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El programa tuvo impactos positivos en 4 de 5 categorías analíticas construidas para la evaluación: aumentó la confianza personal (autoconcepto y autoestima); mejoró el sentido de inclusión (pertenencia y reconocimiento de filiación); desarrolló habilidades para el manejo no violento de conflictos; fortaleció la perseverancia y disciplina; en cambio, no generó cambios en la categoría de autocuidado. Según la evaluación, hubo un mayor impacto en los valores y actitudes de las adolescentes (Yepes et al. 2005). • Padres de los niños y niñas reportaron efectos positivos en la dismi- 	<p>científica sobre intervenciones efectivas.</p> <p>3. La intervención fue aplicada con suficiencia, pero no hay evidencias para afirmar la plausibilidad de la participación de los padres en la reducción de la violencia en adolescentes.</p> <p>4(a) La intervención parece relevante al contexto y es innovadora.</p> <p>4(b) La base teórica es parcialmente consistente pero la relación entre objetivos y estrategias no está claramente explicitada.</p> <p>4(c) Hay elementos de viabilidad política y financiera, así como monitoreo de la ejecución.</p>	

²⁶ "La educación musical promueve el trabajo en equipo, la responsabilidad y disciplina frente al aprendizaje del instrumento, la educación de públicos para el disfrute y la apreciación estética y maneras dialogadas de dirimir los conflictos" (Encuesta Red de Escuelas).



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
<p>25. The Craig Town Youth Organisation</p> <p>Jamaica</p> <p>Fuente: Mogensen 2004</p>	<p>nución de comportamientos agresivos y conductas transgresoras de las normas y valores necesarios para la convivencia familiar y social.</p> <p>Responsabilidad privada (ONG comunitaria), de intervención municipal-barrial con apoyo del Estado.</p> <p>Emplea un enfoque integrado de desarrollo comunitario y prevención de la violencia, con la metodología CARE (Community Adult Remedial Education), que proporciona educación remedial y supletoria a jóvenes entre 15 y 35 años de Craig Town, que participan o han formado parte de pandillas.</p> <p>La propia organización diseñó el programa adecuado a su contexto, con el apoyo de una universidad.</p> <p>No se evidencia enfoque de género ni se exponen efectos de la intervención.</p>	<p>1. No hay evaluaciones disponibles.</p> <p>2. La intervención contradice el consenso científico sobre la efectividad de intervenciones de "oportunidad" a jóvenes involucrados en pandillas.</p> <p>3. La intervención ha sido aplicada con suficiencia, pero no se mencionan efectos.</p> <p>4(a) La intervención es relevante con el contexto, dada las características de la población meta.</p> <p>4(b) No es posible evaluar la base teórica de la intervención, aunque hay elementos para suponer que es adecuada.</p> <p>4(c) Hay elementos de viabilidad técnica y política, con apoyo de la comunidad.</p>	<p>No hay evidencias suficientes, pero de acuerdo con la literatura especializada probablemente no sea efectiva en una reducción sostenible de la violencia en los adolescentes y jóvenes de la comunidad.</p>
<p>26. Viva Rio</p> <p>Brasil</p> <p>Fuentes http://www.habitat.aq.upm.es; http://www.vivario.org.br</p>	<p>Responsabilidad privada, con intervención nacional, estadual, municipal y barrial.</p> <p>Usando instrumentos de investigación y la experiencia práctica, identifica e interviene en grupos de riesgo —especialmente adolescentes y jóvenes con ingresos bajos, que abandonan la escuela, viven en <i>favelas</i> y barrios desfavorecidos de la periferia de la ciudad de Río de Janeiro, donde pueden tener fácil acceso a armas de fuego—. También desarrolla actividades en otras regiones del Estado.</p> <p>La práctica combina, de una manera enfocada y sinérgica, la inclusión de niños y jóvenes, el desarrollo comunitario, el control de armas y la reforma de los aparatos de seguridad del Estado.</p> <p>Viva Río cuenta con la colaboración de las instituciones locales, conformando una extensa red. Los "socios" locales ofrecen infraestructura, personal y conocimiento del contexto de intervención, mientras que Viva Río proporciona la elaboración del proyecto, la formación técnica y profesional,</p>	<p>1. No se accedió a evaluaciones, pero la transferibilidad de sus experiencias y la replicabilidad de sus intervenciones, sugieren un trabajo eficiente y con resultados; además se menciona que "Viva Río publica informes mensuales, con datos cuantitativos y cualitativos, controlando los resultados de sus actividades para poder evaluar el trabajo actual e identificar problemas y nuevas cuestiones. La investigación es fundamental en la definición de la estrategia". Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.</p> <p>2. La intervención se adecua a los consensos científicos vigentes para el tema, además de constituirse en sí misma como fuente de intervenciones innovadoras y de investigación y producción científica y técnica: "Viva Río desarro-</p>	





Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>servicios especializados, y el material didáctico.²⁷</p> <p>Los principios con que trabaja son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de un enfoque de seguridad humana en una situación marcada por la violencia armada urbana. • Diseño y ensayos de soluciones específicas a las causas, tanto sociales como de seguridad, que alimentan la violencia armada. • Acciones orientadas a la transferencia y replicabilidad de soluciones por el sector público a través de la asesoría en políticas públicas consistentes con los resultados de las buenas prácticas. • Desarrollar una intensiva estrategia de comunicación, identificando y promoviendo las conexiones entre problemas y soluciones, y acciones locales y globales. • Producción de información confiable para planear, controlar y evaluar prácticas de prevención. • La comunicación como componente principal de Viva Rio, en tres frentes:²⁸ <ul style="list-style-type: none"> – Dar voz a la población local y a las organizaciones comunitarias. – Llegar a dirigentes con propósitos de defensa legal. – Romper con los prejuicios negativos generados por la desigualdad y la violencia. <p>La organización trabaja con enfoque de género, tanto en sus proyectos, como en su gestión operativa y administrativa, con claras políticas de</p>	<p>lla manuales de materias específicas que se usan como herramientas técnicas para una producción y expansión apropiada de la información". Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.</p> <p>3. El proyecto se realiza con suficiencia y calidad controlada, y demuestra plausibilidad en los efectos.</p> <p>4(a) La intervención toma en cuenta los aspectos culturales y sociales del contexto.</p> <p>4(b) La base teórica está explicitada con claridad, y es consistente con los objetivos y la metodologías de intervención.</p> <p>4(c) Hay elementos de viabilidad financiera, social y política, en varios niveles.²⁹ La intervención se realiza con sistemas de monitoreo y <i>accountability</i>. La experiencia ha sido replicada en otros proyectos y ciudades, tanto a nivel nacional como internacional, y se ha transferido a la política pública municipal.³⁰</p>	



27 "En 2003, Viva Rio tenía 727 socios locales, incluyendo asociaciones de vecinos, ONG, uniones y cooperativas, escuelas, batallones de la policía militar, emisoras de radio comunitarias, iglesias y prisiones. Se realizaron 290 eventos públicos como parte de alguno de los 813 proyectos locales. De estos, 284 fueron en el área de educación, 216 en el de comunicación, 125 en desarrollo comunitario (generación de ingresos), 57 en seguridad y derechos humanos, 1 en medio ambiente, 1 en deportes y 129 en proyectos voluntarios". Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.

28 "[...] cuenta con un programa de formación de periodistas que viven en los barrios degradados y producen información para la red de comunicación de la organización. Tiene una radio AM con 150.000 oyentes al día y produce contenidos para una red de radios comunitarias. Viva Rio cuenta con siete sitios web diferentes que ofrecen información y servicios y a los que acceden más de 500.000 personas al mes, con una media de 2.500,00 visitas". Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.

29 Por ejemplo, financieramente se demuestra una diversidad de fuentes: "Los ingresos [...] fueron de 16.970.322,80 dólares. Entre un universo de 81 donantes, el 9,0% provenían de empresas, el 58,3% de gobiernos nacionales e internacionales, el 19,3% de fundaciones y ONG y el 11,4% de sus propias ventas y recaudaciones. Financiada principalmente por fuentes brasileñas, en los últimos años el apoyo internacional ha crecido en importancia, desde un 4% del presupuesto en 1999, hasta un 41% en 2003". Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.

30 El Ministerio Brasileño de Relaciones Exteriores ha contratado a Viva Rio para la formación e instalación de un programa de cursos a distancia comunitarios en Timor Oriental; además, en colaboración con la ONU, está creando una red de ONG en la región, para proporcionarles un nivel mínimo de equipamiento y conocimiento que permita a estas instituciones articular mejor su vigilancia de las armas de fuego en el área.



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>equidad y afirmación, especialmente hacia mujeres, jóvenes y afrobrasileños.</p> <p>Efectos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Desde 2001, 16 proyectos de la ONG han beneficiado a 20.594 personas en acciones de generación de ingresos, creación de empleo y acceso a créditos.- Más de 96.827 jóvenes se beneficiaron con actuaciones locales en educación y formación profesional.- La práctica también se propuso la reducción del número de armas de fuego en Río de Janeiro y se ha contribuido a la modernización de la policía, formando a 5.100 policías.- 58.000 personas recibieron asesoría legal gratuita en situaciones conflictivas en los campos más variados.- Han incidido públicamente en leyes de control de armas y de seguridad pública, en todos los niveles del estado.- Viva Rio es reconocida a nivel federal y estatal como un actor principal, y participa en comisiones internacionales y aconsejando a diferentes instituciones públicas.- La experiencia en la reforma del sector de la seguridad y la formación de las fuerzas policiales se reconoce como punto de referencia, y las autoridades locales y estatales solicitan a la organización el trazado de los planes de seguridad y la formación de la policía y la fuerza de seguridad ciudadana.³¹- En el 2003, Viva Río contrató los servicios remunerados de 927 personas (el 65 % mujeres), y contó con la participación de 2.050 voluntarios que trabajaron en las campañas y proyectos. Muchos coordinadores de área y la gran mayoría del personal remunerado son habitantes de las favelas donde se realiza la intervención.		

³¹ "Viva Rio está asesorando a los gobiernos municipales del estado de Rio de Janeiro en el diseño y la mejora de los Planes de Seguridad Pública, que ofrecen la oportunidad de probar completamente las acciones de integración, desarrollo y seguridad". Disponible en <www.habitat.aq.upm.es>.



Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<ul style="list-style-type: none"> - La organización es llamada constantemente para servir de canal de comunicación entre las autoridades públicas y las comunidades locales, que se encuentran bajo el doble fuego de la policía y las bandas criminales. - Experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos-HABITAT, y catalogada como <i>best</i>. 		
<p>27. Voluntariado juvenil y desarrollo local "De calle a calle": Jóvenes mejorando el barrio-CEDRO</p> <p>Perú</p> <p>Fuente: <http://www.cedro.org.pe></p>	<p>Responsabilidad privada, intervención a nivel municipal-barrial.</p> <p>El proyecto se realiza en el centro de la ciudad de Lima, mediante una alianza con organizaciones juveniles y de base locales, autoridades comunales, e instituciones sanitarias y educativas. El grupo destinatario está conformado por aproximadamente 900 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 22 años, hombres y mujeres.</p> <p>El supuesto que orienta el programa es que el peligro de conductas de riesgo asociadas a la comisión de actos violentos disminuirá, si los jóvenes fortalecen sus habilidades sociales básicas, participando en grupos positivos y comprometidos con el desarrollo de sus comunidades, fortaleciendo especialmente los componentes éticos, de autoestima y liderazgo.</p> <p>El objetivo general del proyecto es la reducción de la delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas entre los y las jóvenes, como factores precursores o correlacionados con la violencia, en barrios marginales de alto riesgo.</p> <p>Como objetivos específicos, busca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer las habilidades sociales de los adolescentes y jóvenes, así como de sus familias. • Incrementar las actividades de voluntariado, brindando entrenamiento y soporte financiero a los jóvenes. • Abrir espacios comunitarios para actividades educativas, culturales y recreativas, dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes, para el adecuado uso del tiempo libre. • Apoyar a través de becas para estudios técnicos, a los líderes más destacados. • Mejorar la imagen del joven y del grupo juvenil, dentro de su comu- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se dispone de evaluaciones. 2. La intervención se enmarca en el consenso científico sobre intervenciones efectivas. 3. No hay información acerca de la aplicación con suficiencia ni sobre la plausibilidad de los efectos. 4(a) La intervención parece relevante al contexto. 4(b) La base teórica es consistente pero es poco específica. 4(c) Hay elementos de viabilidad política y financiera, a través del apoyo de entidades públicas y privadas, y el involucramiento de los centros de salud y educativos del lugar. 	<p>Es probablemente efectiva, pero se carece de evidencia demostrativa.</p>



→

Datos de identificación	Perfil de la intervención	Evaluación de criterios	Evidencias de efectividad
	<p>nidad y en relación con las autoridades locales.</p> <p>Para conseguirlos, el proyecto desarrolla talleres de capacitación en temas de contribución a su comunidad, actitud compasiva, respeto, responsabilidad, comunicación, manejo de conflictos, cooperación, autocontrol, pensamiento creativo, pensamiento crítico, toma de decisiones y autoestima, así como un entrenamiento de tres años en habilidades para la vida.</p> <p>Estos conceptos se alternan con el trabajo voluntario desarrollado por los propios jóvenes en beneficio de sus comunidades, y con el trabajo de difusión de los avances del proyecto, buscando cambiar la imagen pública de los jóvenes en su comunidad.</p> <p>Reconociendo el papel crítico que los padres desempeñan en el desarrollo de sus hijos, el programa también proporciona entrenamiento en habilidades de crianza a través de las "escuelas para los padres".</p> <p>No se perciben evidencias de la aplicación de un enfoque de género en el proyecto.</p> <p>Efectos: No son mencionados.</p>		